



DJI

Documentos de Jóvenes Investigadores

Nº 30

Noviembre 2011

**LAS CORPORACIONES AGRARIAS
E INDUSTRIALES FRENTE
AL GOLPE DEL '76: APUNTES PARA
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FUERZA
SOCIAL CONTRARREVOLUCIONARIA**

**Verónica Baudino
Gonzalo Sanz Cerbino**



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GINO GERMANI
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires



Documentos de Jóvenes Investigadores

Nº 30

noviembre 2011

DJI

Documentos de Jóvenes Investigadores

Nº 30

noviembre 2011

**LAS CORPORACIONES AGRARIAS
E INDUSTRIALES FRENTE
AL GOLPE DEL '76: APUNTES
PARA LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA FUERZA SOCIAL
CONTRAREVOLUCIONARIA**

**Verónica Baudino
Gonzalo Sanz Cerbino**



INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GINO GERMANI
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires





INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
GINO GERMANI
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Buenos Aires

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Pte. J.E. Uriburu 950, 6° piso - C1114AAB
Ciudad de Buenos Aires, Argentina

www.iigg.sociales.uba.ar

Los **Documentos de Jóvenes Investigadores** dan a conocer los avances de investigación de los becarios y auxiliares del IIGG. Todos los trabajos son arbitrados por especialistas.

ISBN 978-950-29-1336-0

Desarrollo Editorial: Centro de Documentación e Información, IIGG

Asesoramiento gráfico: Pablo Alessandrini para aureliolibros.com.ar

LAS CORPORACIONES AGRARIAS E INDUSTRIALES FRENTE AL GOLPE DEL '76: APUNTES PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA FUERZA SOCIAL CONTRAREVOLUCIONARIA

Resumen

En el presente trabajo analizaremos el comportamiento de la burguesía argentina durante los años previos a la instauración del régimen militar de Videla. Nos ocuparemos de reconstruir la acción política de esta clase, que se destaca por la intervención abierta en la arena política, recurriendo a lock outs, movilizaciones y pronunciamientos, con una recurrencia marcada hacia la acción directa. En este caso, sus acciones se orientaban a generar las condiciones para la consumación del golpe de estado, buscando desestabilizar al gobierno democrático y socavar su legitimidad. Tal grado de movilización de la clase dominante, poco común, se explica como respuesta a la amenaza que implicaba el ascenso de la lucha de clases y el proceso revolucionario abierto desde fines de la década de 1960. Para tal fin observaremos las posiciones de los distintos agrupamientos burgueses, sus alianzas y disputas. Nos basaremos en fuentes de circulación masiva, Memorias y Balances y otros documentos institucionales.

Palabras clave:

Burguesía argentina - Estrategia - Golpe de Estado

THE AGRICULTURAL AND INDUSTRIAL GROUPS FACED THE COUP OF '76: NOTES FOR THE RECONSTRUCTION OF THE COUNTERREVOLUTIONARY SOCIAL FORCE

Abstract

In this paper we analyze the behavior of the bourgeoisie in Argentina during the previous years before the establishment of the military regime of Videla. We will rebuild the political action of this class, which is characterized by open intervention in the political sand, using lock outs, demonstrations and uprisings, with a strong recurrence towards direct action. In this case, their actions were directed to create the conditions for the consummation of the coup, seeking to destabilize democratic government and undermine its legitimacy. We explain this unusual degree of mobilization of the dominant class as a response to the threat that implied the rise of class struggle and the revolutionary processes opened since the late 1960s in both countries. For this purpose we will look at the positions of different bourgeois groups, their alliances and disputes. We will relay on mass media sources, Memory and Balances and other institutional documents.

Keywords:

Argentinian bourgeoisie - Strategy - Military government

LOS AUTORES

Verónica Baudino veronicabaudino@yahoo.com.ar

Licenciada en Historia - UBA

Instituto de Investigaciones Gino Germani - CONICET

Becaria doctoral

Gonzalo Sanz Cerbino camilogx@yahoo.com

Licenciado en Historia - UBA

Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CONICET

Becario doctoral

ÍNDICE

Introducción.....	13
La burguesía y el golpe: breve estado de la cuestión.....	26
El retorno del peronismo al gobierno: 1973-1974.....	43
La ofensiva de la burguesía rural: enero-junio de 1975.....	66
El Rodrigazo como punto de inflexión.....	87
El Partido del Orden: la creación de APEGE.....	127
La descomposición de la alianza reformista: el final de la CGE	151
Después de la tormenta: las corporaciones empresarias y el golpe.....	161
Conclusiones.....	173
Referencias bibliográficas.....	179

Introducción

Para explicar la naturaleza y las causas del golpe de estado de 1976 en la Argentina debemos retrotraernos a la primera mitad de la década del '50. Desde ese momento el país comienza una etapa de inestabilidad política y económica, cuyo elemento central es la apertura de una crisis hegemónica.¹ Ello implica que se han roto los lazos políticos e ideológicos que unen a las clases subalternas con las dominantes. Es en ese sentido, una crisis de dominación de la sociedad.² La crisis encuentra sus primeras manifestaciones hacia mediados de los '50, cuando la burguesía, al no encontrar consenso en la clase obrera para poner en práctica las medidas que demandaba relanzar la acumulación de capital debe recurrir al golpe de estado y a la proscripción del peronismo. La imposibilidad de resolver la situación lleva a la alternancia de gobiernos y regímenes políticos que no pueden estabilizar la dominación, dando paso a una profundización de la crisis y a la multiplicación de los cuestionamientos:

“Los obreros, los estudiantes, los docentes, los profesionales, los vecinos, ciertas fracciones de la burguesía y ciertos sectores de la Iglesia, comienzan a expresar un proceso de desarticulación política en relación al Estado, dentro de una relación de oposición a la política que implementa el gobierno y/o al gobierno mismo. El orden y la posición que cada grupo ocupa en la sociedad comienza a estar alterado por las nuevas condiciones que el desarrollo del capitalismo impone y son éstas las que crean las condiciones de la emergencia de una nueva forma de articulación política, basada en una relación social contradictoria con los intereses del capital [...] Este proceso de desarticulación política se expande

1 O'Donnell, Guillermo: *Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976*, CEDES, Documento de trabajo N° 5, Buenos Aires, 1976; Portantiero, Juan Carlos: “Clases dominantes y crisis política en la Argentina”, en Braun, O.: *El capitalismo argentino en crisis*, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.

2 Sartelli, Eduardo: “Celeste, blanco y rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica”, en *Razón y Revolución* n° 2, primavera de 1996, p. 50.

hacia el conjunto del país asumiendo las más variadas formas.”³

Un elemento central de esta crisis son los enfrentamientos interburgueses. Estos enfrentamientos se expresaron en la disputa entre dos alianzas, dirigidas por distintas fracciones de la burguesía, cada una de las cuales intentaba imponer su salida a la crisis hegemónica. Este enfrentamiento no pudo resolverse en los 20 años que van de 1955 a 1976. La alianza que expresaba los intereses de la burguesía más concentrada tenía un programa que implicaba abrir un proceso de expropiación de las fracciones más débiles de la burguesía, de la pequeña burguesía y de la clase obrera, desatando un proceso de concentración y centralización que relanzara la acumulación de capital en el país, eliminando conquistas obreras y diezmando los salarios reales. Este programa encontró un freno en la estructuración de una “alianza defensiva”, que a pesar de no poder relanzar la acumulación de capital, tenía la fuerza suficiente para evitar la expropiación de las fracciones atacadas por el programa liberal. Esto llevó a una situación de “empate” en medio de una crisis que se profundizaba con el correr del tiempo.⁴

El año 1969 marca un hito en el proceso, ya que apareció allí, incipientemente, una tercera alianza integrada por fracciones del proletariado y de la pequeño-burguesía, que actuaban con independencia de las distintas fracciones de la clase dominante.⁵ El concepto de alianza, o fuerza social, remite a la forma en que

3 Balvé, Beba y Beatriz Balvé: *El '69. Huelga política de masas*, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005, p. 57.

4 O'Donnell, op. cit.

5 Balvé y Balvé, op. cit.; Marín, Juan Carlos: *Los hechos armados. Un ejercicio posible*, La Rosa Blindada/PICASO, Buenos Aires, 2003; Izaguirre, Inés: *Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada*, CEAL, Buenos Aires, 1994.

se manifiesta en la realidad la lucha de clases. Las clases no se enfrentan como bloques homogéneos, sino bajo la forma de alianzas entre sus fracciones y capas, que intervienen políticamente en conjunto bajo un programa aún ambiguo y que carece de dirección técnica. Siguiendo a Sartelli:

“Las clases, sin embargo, no van al enfrentamiento como tales clases [...] La clase [obrera] está dividida no sólo por su grado de activación, sino por el alineamiento de sus diversas fracciones en relación a la burguesía. Lo normal es que, sobre todo al inicio del proceso revolucionario e incluso en las etapas iniciales de una situación revolucionaria, una fracción mayoritaria de la clase se encuentre militando en las filas de la burguesía [...] De allí que la unidad de la clase obrera, es decir, la medida en que la vanguardia logre hegemonizar al conjunto del proletariado, sea un elemento que sella el destino de la revolución. “Esas fracciones de vanguardia no se mueven solas, sino que trazan alianzas con otras fracciones de otras clases sociales, conformando así una ‘fuerza social’. Los grandes combates de clase se dan, entonces, entre fuerzas sociales y no directamente entre clases. La suerte de dichas fuerzas dependerá de su capacidad hegemónica, es decir, de ampliar permanentemente el campo de sus alianzas dentro de su programa [...] Todo el problema de las alianzas es su dirección. Cuando lo que está en juego, para la clase obrera, en una alianza determinada, son sus intereses secundarios, la dirección corresponde a la burguesía. En esos casos, una fracción de la burguesía apela a la clase obrera como base de maniobras contra otra fracción, nacional o internacional. Es el caso típico de los movimientos anti-imperialistas y del nacionalismo en general. Un efecto directo de estas alianzas es la limitación que establecen al desarrollo de la lucha obrera, en tanto la conciliación con la fracción burguesa en cuestión obliga a conceder y poner límites al desarrollo de la acción proletaria [...] De cualquier modo, las alianzas, como expresión de fuerzas sociales, son el síntoma de que las clases no se agrupan en bloques sino que se parten en fracciones que integran diferentes alineamientos. Dicho de otra manera, siempre se encontrarán burgueses en el ‘campo’ obrero y obreros en el ‘campo’ burgués.”⁶

El ciclo insurreccional que se abrió en 1969 y el crecimiento de los

⁶ Sartelli, Eduardo: *La sal de la tierra. Clase obrera y lucha de clases en el agro pampeano (1870-1952)*, 2011, mimeo.

partidos revolucionarios dio cuenta de la existencia de fracciones (minoritarias) de la clase obrera y de la pequeña burguesía que comenzaron a actuar en conjunto y que se diferenciaron en su acción de lo propuesto por las dos alianzas dirigidas por la burguesía. Estas fracciones empezaron a romper paulatinamente con la estrategia reformista (aunque eso no se manifieste aún a nivel subjetivo), característica de la clase obrera hasta ese momento. Un síntoma de este cambio de estrategia se manifestó en el recurso a la acción directa para expresar reclamos frente al Estado o la clase dominante, que se incrementó en la etapa en detrimento de las vías institucionales, más propias del reformismo. Por estas razones, estaríamos ante la apertura de un proceso revolucionario.

La apertura de un proceso revolucionario no implica que la disolución de la sociedad capitalista se encuentre a la vuelta de la esquina, y ni siquiera demanda la existencia de una organización capaz de llevar a cabo esta tarea. El concepto remite a la conjugación de una serie de elementos estructurales y superestructurales que hacen posible el desarrollo de tal alternativa. Implica la apertura de una etapa en la que se pone sobre la mesa la disputa por el poder social, y la intervención de una fuerza social que se plantea (aún en forma embrionaria) la transformación social. El inicio del proceso está marcado por cuatro elementos: a) Crisis orgánica: el conjunto de la reproducción social se encuentra agotado; b) Crisis hegemónica: se rompen los lazos ideológicos que hacen posible sostener la dominación; c) Crisis interburguesa: la burguesía se encuentra dividida, ninguna de sus fracciones o alianzas puede oponer una salida a la crisis, ni tiene los medios materiales para hacerlo; y d) Constitución de una fuerza social revolucionaria: Las clases dominadas desarrollan formas de acción que superan las mediaciones institucionales y tienden a comportarse con

independencia política de la burguesía. En palabras de Lenin:

“resulta indudable que la revolución es imposible si no se da una situación revolucionaria, pero no toda situación revolucionaria conduce a la revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales: 1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las ‘alturas’, una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución, no basta que ‘los de abajo no quieran vivir’, sino que hace falta también que ‘los de arriba no puedan vivir’ como hasta entonces. 2) Una agravación, superior a la habitual, de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. 3) Una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las masas, que en tiempos ‘pacíficos’ se dejan expropiar tranquilamente, pero que en épocas históricas turbulentas son empujadas tanto por la situación de crisis de conjunto como por las ‘alturas’ mismas, a una acción histórica independiente. Sin estos cambios objetivos, independientes no solo de la voluntad de estas o aquellas clases, la revolución es, por regla general, imposible. El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria [...] la revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino sólo de una situación en la que a los cambios objetivos antes enumerados viene a sumarse un cambio subjetivo.”⁷

A medida que la crisis se profundizaba, las divisiones en el seno de la burguesía tendieron a resolverse por la vía de la confluencia en una alianza que se proponía liquidar los brotes de insurgencia para recomponer la hegemonía burguesa y lanzar, desde nuevas bases, la acumulación de capital. Denominamos a esta alianza Fuerza Social Contrarrevolucionaria. Ella fue la que promovió el golpe de estado de 1976, la eliminación de la alianza revolucionaria mediante el aniquilamiento de sus dirigentes y cuadros medios, y el disciplinamiento del conjunto de sus bases. Hacia 1975,

⁷ Lenin, Vladimir: “La bancarrota de la II Internacional”, *Obras completas*, Tomo XXI, Ed. Cartago, Bs. As., 1960, pp. 211-212.

las divisiones en la clase dominante tienden a desdibujarse, produciéndose una confluencia detrás de la salida golpista, empujadas por el peligro común que enfrentaban: la destrucción de la sociedad capitalista.

En este trabajo nos proponemos reconstruir la génesis, los enfrentamientos desarrollados y los componentes de la alianza golpista. Para ello tomaremos como observables a las corporaciones empresarias que expresaron los intereses de las diferentes fracciones y capas de la burguesía agraria e industrial, en la medida en se incorporaron o enfrentaron a dicha alianza. Siguiendo el análisis marxista, definimos a la burguesía como aquella clase que en la sociedad capitalista a) detenta la propiedad privada de los medios de producción y b) esa propiedad la constituye en término dominante de una relación de explotación por la que se apropia de una parte del excedente social que no produce. Es decir, que extrae, mediante relaciones de explotación, parte del valor creado por el trabajo asalariado. La burguesía como clase es una totalidad que traspasa las fronteras nacionales en una dinámica de contradicción permanente, causada por la competencia. Todos los capitales luchan entre sí por vender su mercancía en el mercado y así poder seguir reproduciéndose. Quien no produce al valor que reconoce el mercado, progresivamente va quedando en el camino. Este mecanismo de competencia va diferenciando a la burguesía. De acuerdo con la actividad que desarrolla se divide en fracciones: industrial, financiera, agraria, comercial. En relación a su tamaño se diferencia por capas. Este último es el corte que determina en primera instancia la relación entre los capitales particulares, ya que su posición depende de la escala, que determina, en buena medida, su productividad. Por ende, en la competencia quienes tienen superioridad son, normalmente, los grandes sobre los chicos. Históricamente, los burgueses se han asociado entre sí en función

de intereses comunes derivados de su pertenencia a la misma fracción o capa. Esto ha dado lugar a la conformación de aquello que conocemos como “corporaciones empresarias”, es decir, asociaciones de individuos que tienen en común, en primer lugar, pertenecer a la burguesía, y en segundo lugar la pertenencia a cierta capa o fracción de dicha clase (acumular en la misma rama, tener tamaños similares, etc.). Este tipo de asociaciones surge de la necesidad de defender con mayor fuerza los intereses comunes, y que como conjunto, los enfrentan a otras capas o fracciones de la burguesía, al Estado, o a fracciones del proletariado. En general, en la corporación prima, en principio, la defensa de un interés económico (el valor de la fuerza de trabajo en la rama, disputas por la renta, por obtener ciertos beneficios o transferencias del Estado), que los lleva a intervenir en la vida política (defender a un personal político frente a otro, porque de esa manera se garantizan un mejor eco a sus demandas). El peso político estará dado a su vez por el peso que tengan las fracciones representadas en la economía (el tamaño de sus capitales, la centralidad de la rama en la acumulación, la cantidad de obreros que empleen).

Las corporaciones no son homogéneas, y su grado de heterogeneidad aumentará a medida que se integren a ellas capitales (o asociaciones de capitales) provenientes de distintas fracciones o capas de la burguesía. Es necesario diferenciar entonces a las corporaciones en relación a su estructura: hay corporaciones que integran a capitales individuales, otras que integran a corporaciones, y otras que integran a asociaciones de corporaciones. Tenemos así corporaciones de primer, segundo y tercer grado. Cada una de ellas presenta un grado de generalidad mayor, incorporando en su seno a diferentes capas de una misma fracción, o incluso de fracciones diferentes. Por esta razón, a la hora de analizarlas, es importante atender a su grado de heterogeneidad, y a su vez, a las

disputas internas derivadas de su grado de heterogeneidad. Esto lleva al problema de la representatividad del grupo dirigente de la corporación, y a la medida en que expresa o no al conjunto de sus bases. En primer lugar es necesario señalar que los dirigentes de una corporación han llegado allí porque cuentan con un apoyo mayoritario en su base. Lo cual no significa que el conjunto de los representados esté de acuerdo con cada declaración, demanda o acción del dirigente, pero sí que existe un acuerdo general siempre que no encontremos síntomas de lo contrario. Si no existe una línea interna de oposición identificable, procesos masivos de desafiliación o escisiones, podemos acordar que los dirigentes expresan en cierto grado el sentimiento de su base. En el caso de nuestra investigación en particular hemos atendido a este problema, intentando recomponer las líneas de oposición interna e intentando reflejar los momentos en que la base muestra su acuerdo (o desacuerdo) con el proceder de su dirigencia: aprobación en asambleas, acatamiento de las medidas decretadas, expresiones de divergencia, niveles de movilización, etc.

Es importante hacer también una precisión metodológica para el análisis. Para reconstruir el programa y la estrategia de cualquier tipo de organización, en este caso corporaciones empresariales, es importante percibir los dos niveles en que eso se expresa: lo que efectivamente hacen, y lo que dicen que hacen. Es decir, la acción y el discurso. La reconstrucción del programa de una corporación a partir de sus discursos siempre es parcial: las acciones pueden presentar contradicciones con el sentido que le otorgan quienes elaboran las declaraciones públicas. A su vez, una reconstrucción basada exclusivamente en la acción también resulta parcial: los discursos pueden iluminar aspectos relevantes sobre el sentido y los objetivos de esas acciones, que no necesariamente se desprenden de las mismas. A su vez, hay que tener en cuenta que

los pronunciamientos públicos también tienen una incidencia en la realidad (marcando un rumbo de acción, deslegitimando a un adversario, profundizando una crisis política, etc.), que no hay que menospreciar. Por eso creemos necesario un análisis que integre ambas dimensiones, atendiendo a sus particularidades y que de cuenta de sus contradicciones.

Analizaremos en este trabajo los posicionamientos y las acciones de las principales corporaciones de la burguesía agraria entre 1973 y 1976. La Sociedad Rural Argentina (SRA), que expresaba a las fracciones más concentradas de la burguesía terrateniente, con intereses, a su vez, en la industria y las finanzas. Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que reunía a 12 corporaciones regionales de segundo grado cubriendo casi todo el territorio nacional. Una de ellas, CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa), es la que mayor gravitación y peso tenía en su seno. Expresaba los intereses de la burguesía rural mediana y grande, en la zona núcleo de la producción agrícola nacional. Al igual que SRA, nucleaba a los propietarios de tierras, pero que no habían expandido sus intereses hacia otro tipo de negocios. También veremos la intervención de la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresaba los intereses de los pequeños y medianos propietarios agrícolas y de algunos pocos arrendatarios. Por último, observaremos también a Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), la asociación nacional de cooperativas agrícolas y ganaderas.⁸ Con diferencias

⁸ Martínez Nogueira, Roberto: "Las organizaciones corporativas del sector agropecuario", en Barsky, Osvaldo et al.: *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales*, FCE-IICA-CISEA, Buenos Aires, 1988; Palomino, Mirta: *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*, CISEA, Buenos Aires, 1988; Palomino, Mirta: *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*, CISEA, Buenos Aires, 1989.

tácticas, estas corporaciones impulsaron las acciones tendientes a desestabilizar al gobierno democrático y acicatearon la salida golpista. En los meses previos al golpe, algunas de ellas confluyeron con otras corporaciones de la burguesía financiera y comercial en la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), por la que, a partir de ese momento, se canalizaron las acciones golpistas. Estas corporaciones, son, por lo tanto, la base de la Fuerza Social Contrarrevolucionaria.

También analizaremos el desempeño de las corporaciones que expresaban los intereses de la burguesía industrial. Aquí tenemos, por un lado, a la Unión Industrial Argentina (UIA), una entidad burguesa cuya dirigencia, en el período estudiado, se componía de un pequeño núcleo de grandes capitales en alianza con un vasto conjunto de capitales menores a escala nacional, unificados por su debilidad en el mercado internacional.⁹ Por otro lado, nos concentraremos en el análisis de la Confederación General Económica (CGE), que agrupó durante el período a las fracciones de la pequeña y mediana burguesía industrial orientadas hacia el mercado interno.¹⁰ Ambas corporaciones, en diferentes grados, constituyeron el apoyo burgués al tercer gobierno peronista. Como tales, conformaron uno de los pilares de la Fuerza Social Reformista. Tal confluencia alcanzó expresión institucional en la constitución de la Confederación Industrial Argentina (CINA) en 1974, resultado de la fusión de la Confederación

9 Baudino, Verónica: *La estrategia de la Unión Industrial Argentina, 1966-1976*, Tesis doctoral en Historia, Universidad de Buenos Aires, en evaluación.

10 Acuña, Carlos: “Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955 – 1983)”, *Realidad Económica*, N° 138, 1996; Schwarzer, Jorge: *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina*, Imago Mundi, 1991; Caggiano, Roque: *Notas sobre el desarrollo de la burguesía nacional. La Confederación de la Industria y La UIA en el período 1957-1973*, Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1975.

General Industrial (CGI, “pata industrial” de la CGE) y la UIA. Desde 1975, fueron blanco de los ataques de las corporaciones agrarias, y posteriormente de APEGE, en su lucha hegemónica para imponer la estrategia golpista en el interior de la clase dominante. Desde ese momento la Alianza Reformista entró en un proceso de descomposición, que se expresó cabalmente en el desmembramiento y la crisis de la CGE. Hacia el final del período, veremos cómo buena parte de las corporaciones que la integraban abandonaron la Alianza Reformista para sumarse a la estrategia golpista impulsada por APEGE. Aquí los sectores provenientes de la UIA tuvieron un rol destacado en este proceso, horadando desde su interior la legitimidad de la CGE.

Es necesario aclarar que este trabajo se concentrará en uno de los planos en los que desplegará su acción la Fuerza Social Contrarrevolucionaria, el plano corporativo-gremial. Es decir, no analizaremos los derroteros del personal político y técnico que se sumará a la Alianza Contrarrevolucionaria. Quedará para otros trabajos un análisis de la acción de los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Tampoco profundizaremos en el análisis de las corporaciones financieras y comerciales, otra deuda pendiente que saldaremos en un futuro próximo. Es necesario aclarar, a su vez, que en el trabajo se percibirá una fuerte presencia e intervención de las corporaciones de la burguesía agraria. Este hecho no se debe a un sesgo en la reconstrucción de los autores, sino a la destacada presencia de estas corporaciones en la constitución de la alianza golpista y en el recurso a la acción directa contra el gobierno, que hacía más visible su actuación. Las corporaciones agrarias oficiaron como vanguardia de la ofensiva golpista, y a eso se deben su mayor visibilidad. Las corporaciones industriales, que mantuvieron su apoyo al gobierno casi hasta el final, y que se fueron integrando

en la alianza golpista a último momento, a cuentagotas, y sumidos en disputas internas, necesariamente tienen una presencia menor en el proceso. Para reconstruir los alineamientos y las acciones de las corporaciones agrarias e industriales recurriremos, además de las fuentes secundarias, a las posiciones vertidas por las entidades o sus dirigentes en sus propias publicaciones y en periódicos de circulación nacional. A través de estas fuentes reconstruiremos a su vez sus acciones: paros comerciales, movilizaciones y actos.

La burguesía y el golpe: breve estado de la cuestión

La estrategia desplegada por la burguesía en argentina durante la década de 1970 y su colorario en el golpe de 1976 ha sido analizada al menos en dos niveles. El más difundido es aquel que enfoca el aspecto económico-sociológico del problema. El mismo enfatiza los programas económicos desarrollados por el régimen instaurado en 1976 y los sectores de la burguesía que fueron beneficiados. Deriva de allí el comportamiento político de las diferentes fracciones en la coyuntura previa y posterior al golpe.

La posición dominante de esta corriente entiende que el régimen militar expresó el arribo de una alianza de la burguesía concentrada y el empresariado extranjero. Esta asociación habría operado para dejar fuera del campo político y económico a la burguesía nacional. Especialmente a través de la instauración de una serie de políticas económicas tendientes a modificar la estrategia de acumulación de capital. En este sentido, de un anclaje en la producción de mercancías característico del peronismo, se habría pasado a la recirculación de las ganancias en el circuito financiero como la forma predominante de acumulación. En síntesis, la fracción “no nacional” de la burguesía había cambiado la estrategia de acumulación predominante a partir de un cambio en las políticas económicas desarrolladas.

La obra de Eduardo Basualdo es representativa de un arco muy amplio de trabajos sobre empresariado argentino,¹¹ que definen a la

11 Azpiazu, Daniel y Khavisse, Miguel.: *La concentración de la industria argentina en 1974*, Centro de Economía Transnacional (CET), Buenos Aires, 1984; Azpiazu, Daniel, Basualdo, Eduardo y Khavise, Miguel: *El nuevo poder económico en la Argentina de los '80*, Editorial Legasa, Buenos Aires, 1986; Azpiazu, Daniel: *Concentración de la industria argentina a mediados de los '90*, EUDEBA/FLACSO, Buenos Aires, 1986; Azpiazu, Daniel y Schorr, Martín: *Hecho en Argentina. Industria y Economía 1976-2007*. Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2010; Castellani, Ana: *Estado, empresas y empresarios. La construcción*

capa de la burguesía que se erige como hegemónica desde la última dictadura militar como “oligarquía diversificada”. A partir de sus propiedades agrícolas, el mencionado sector habría expandido sus bases de acumulación hacia otras ramas, fundando su desarrollo en la apropiación de excedentes, no en su generación. Este sector de clase habría acaudillado el proceso económico los últimos treinta años, a partir de la valorización financiera, la toma de deuda y la apropiación de transferencias estatales. Estos procesos, acompañados de la concentración y centralización de capitales, terminaron por liquidar a la burguesía nacional. A su juicio, este sector de la burguesía conformó el nuevo bloque de poder junto a las empresas extranjeras financieras. Por lo tanto, no presentaría contradicciones con la fracción financiera del capital. Esta posición asocia burguesía nacional con una fracción de capital que contiene la potencialidad de realizar los intereses propios así como los de todas las clases y fracciones que habitan determinado territorio. Es por la adopción de esta estrategia política que eluden denominar burguesía nacional a los grandes capitales sobre los que cargan todas las tintas de la represión de los ‘70 y las sucesivas crisis económicas, para así resguardar a un sector “puro” de la burguesía con quien trazar una alianza política. Además, al inferir el proceso en función de su resultado, no pueden dar cuenta de la multitud de pequeños y medianos capitales nacionales y de sus corporaciones representativas que se alinearon entre fines del ‘75 y principios del ‘76 con la alianza golpista. En la mencionada línea se inscriben también estudios de empresas, centrados en las dificultades del empresariado local, o bien que resaltan las conductas positivas de casos excepcionales.¹²

de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989, Buenos Aires, Prometeo libros, Buenos Aires, 2010.

12 Rougier, Marcelo: *Industria, finanzas e instituciones en la Argentina*. La

Posicionado desde un ángulo similar, aunque marque diferencias en torno al carácter instrumental del Estado, Alfredo Pucciarelli argumenta que en 1976 se implementa el terrorismo de Estado y la valorización financiera como una forma de socavar las bases político-institucionales y económicas del enemigo a eliminar.¹³ Entonces, podemos inferir que la dictadura no constituyó la estrategia del conjunto de la burguesía contra su enemigo de clase, sino de una fracción, otra vez la concentrada y transnacionalizada contra la burguesía nacional. La gestión del Proceso se habría basado en el “copamiento” por parte de las corporaciones más poderosas de los lugares que dejaron vacantes los partidos tradicionales. En este sentido, para el autor, el Estado habría perdido su carácter autónomo, de mediador en los conflictos, para subordinarse a los intereses sectoriales. Crece y multiplica sus formas de intervención económica, a través de subsidios y otras formas de subvención a las grandes empresas, y deja de regular y

experiencia del Banco Nacional de Desarrollo, Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires 2004; Pampin, Graciela: “La industria de bienes electrónicos y el desarrollo tecnológico en Argentina: expansión y crisis de Winco S.A., 1954-1980”, *Revista de Historia Industrial*, N° 38, Buenos Aires, 2008; Rougier, Marcelo: “Expansión y crisis de La Cantábrica (1940-1990)”. En Rougier, Marcelo (dir.): *Políticas de promoción y estrategias empresariales en la industria argentina 1950-1980*, Ediciones Cooperativas, Buenos Aires, 2007; Schwarzer, Jorge y Rougier, Marcelo: *Las grandes empresas no mueren de pie: el (o) caso de SIAM*, Grupo Editorial Norma, Buenos Aires, 2006; Roman, Valeria y di Salvo, María Teresa: “Los ‘hombres de farmacia’ como empresarios”, *XXI Jornadas de Historia Económica*, Caseros, 2008; Dethiou, C.: “Macar S.R.L.: Trayectoria de una empresa textil (1956-1990)”, *XXI Jornadas de Historia Económica*, Caseros, 2008.

13 Pucciarelli, Alfredo (Coordinador): *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2004; Para períodos posteriores consultar: Pucciarelli, Alfredo (Coordinador): *Los años de Menem*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2011 y Pucciarelli, Alfredo (Coordinador): *Los años de Alfonsín: ¿el poder de la democracia o la democracia del poder?*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2006.

administrar eficientemente en pos del beneficio común. Más allá de la discusión que se desprende sobre el carácter del Estado, en lo que a nuestro trabajo respecta, sus conclusiones adolecen del mismo problema que las de Basualdo: se infiere el proceso previo de su resultado, arribando a una conclusión que contradice los datos empíricos ya que, como demostraremos, el golpe no fue impulsado solamente por las “corporaciones más poderosas”.

Continuando con la línea de “erradicación” de la burguesía nacional del poder político y económico, desde una posición de izquierda, se encuentra Carlos Echagüe.¹⁴ En su opinión, el régimen militar habría profundizado la dinámica de extranjerización de la economía, cuyos actores triunfantes fueron la burguesía imperialista e intermediaria. En otra vertiente del mismo planteo, el de CICOSO, Martín Asbornó¹⁵ sostiene que el golpe de Estado de 1976 representó la acción directa de los sectores financieros por el control político para la realización de sus objetivos. Una condición de los mismos era forzar a los capitales ineficientes a desaparecer del mercado. Según el autor, los “criterios de selección” no estaban dados por las ventajas comparativas de las ramas, sino por la capacidad diferenciada de los capitales para soportar los nuevos marcos políticos e institucionales. Dichos criterios significaron un acelerado y masivo pasaje de los capitales de la esfera productiva a la financiera.

Más allá de las deficiencias que puedan señalarse sobre la caracterización de las transformaciones asociadas a los programas económicos impuestos durante la última dictadura militar, el principal problema de estos trabajos es que no analizan la

14 Echagüe, Carlos: *Argentina: declinación de la soberanía y disputa ínter imperialista*, Editorial Ágora, Buenos Aires, 2004.

15 Asbornó, Martín: *La moderna aristocracia financiera. Argentina 1930-1992*, El bloque, Buenos Aires, 1993.

acción política de las distintas fracciones de la burguesía, sino que la infieren de los resultados de los planes económicos implementados. En el presente trabajo nos proponemos avanzar sobre la acción política de la burguesía tomando como observable una de las formas en que se dio: la acción y los posicionamientos de las corporaciones empresarias que expresaban sus intereses en el plano económico-gremial. A partir de este análisis intentaremos discutir los postulados dominantes en la producción académica, que identifican como impulsores del golpe de estado de 1976 sólo a las fracciones agrarias y financieras de la burguesía, o a sus sectores más concentrados, asociados a los intereses transnacionales. Por el contrario, un análisis del proceso previo muestra que el golpe terminó imponiéndose como una salida del conjunto de la clase dominante, grande y chica, agraria, comercial, financiera e industrial. Por supuesto, que esa estrategia hegemónica fue el resultado de una intensificación de las luchas hacia el interior de la clase dominante, y de cara a las fracciones obreras y pequeño-burguesas que cuestionaban su dominación. La amenaza sobre la continuidad de la dominación capitalista terminó pesando más, y alineó a la clase dominante toda detrás de la defensa de la propiedad privada de los medios de producción.

Otro de los niveles de estudio presentes en la producción académica parte de las acciones de las corporaciones empresariales y los intereses por ellas representados. Aunque menos difundidos, varios son los trabajos de caracterización general de las corporaciones que nos permiten acercarnos a la problemática.

Guillermo O'Donnell¹⁶ analiza el movimiento de la burguesía distinguiendo la existencia de dos estrategias, liberal y mercadointernista. Cada una con una composición y programa que se alternan en el ascenso al poder de acuerdo a la fase

16 O'Donnell, Guillermo: *Catacumbas*, Prometeo, Buenos Aires, 2008.

del ciclo que atravesase la economía argentina. La burguesía industrial ocupa un lugar central en ambas alianzas. Las capas más pequeñas, representadas en la CGE, como base de la alianza mercadointernista. Y la Unión Industrial Argentina, representante de la “gran burguesía industrial”, “pendulando” entre una alianza y otra según quién detente el poder. Las causas del fraccionamiento de la burguesía se encuentran, para el autor, en la apertura de una crisis de acumulación en la década de 1950 y en las distintas estrategias para cerrar la crisis que se dieron las fracciones de la burguesía. A diferencia de otros autores, O’Donnell caracteriza correctamente la crisis, señalando sus principales elementos. Su aproximación al problema resulta útil a la hora de hacer una periodización del proceso, por lo menos hasta 1969, cuando se dejan de lado ciertos cambios significativos y el análisis pierde capacidad explicativa. Otro acierto de O’Donnell es retomar el concepto gramsciano de Fuerza Social, útil para observar cómo actúan políticamente las clases en la realidad. Como los enfrentamientos interburgueses y el despliegue de la crisis no se realizan en abstracción de las clases dominadas, su profundización llevó al debilitamiento de los lazos ideológicos que articulaban el consenso en la sociedad, que se manifestó en la apertura de una “coyuntura pre-revolucionaria” a partir de 1969. El grado de amenaza sobre la reproducción de la propia sociedad en tanto capitalista explica la superación de las disputas interburguesas y el impulso que le dieron al golpe del ’76 todas las fracciones de la burguesía, desde las más débiles hasta el capital más concentrado. Este momento clave para explicar el advenimiento del golpe sólo se aborda superficialmente. O’Donnell no le otorga entidad a una tercera alianza que se conforma en 1969, la alianza revolucionaria, encabezada por una fracción de la clase obrera que comienza a romper con el peronismo y manifiesta tendencias

a la independencia de clase. Un factor clave para explicar el desgajamiento de la “alianza defensiva”, que se va deshaciendo a lo largo del proceso que va de 1974 a 1976, tanto por izquierda como por derecha. Sin los desprendimientos que se producen en la alianza defensiva no se puede explicar la fuerza que adquiere la salida golpista. Otro déficit del trabajo procede del excesivo peso que se le otorga a las determinaciones estructurales, que terminan anulando la política. La crisis de acumulación es un factor determinante, pero por si misma no puede explicar la crisis revolucionaria. La economía no es más que el marco de posibilidad para que esto suceda, pero las especificidades del proceso hay que buscarlas en la conciencia de las masas, cuya disputa se da en el terreno político. No alcanza con deducir los comportamientos políticos de las determinaciones estructurales, es necesario investigar que sucede allí.

A pesar de sus debilidades, la importancia del texto radica en que demuestra la inviabilidad y los costos sociales de cualquier salida capitalista a la crisis de acumulación. La primera de ellas, el programa de la alianza ofensiva, porque implica la expropiación y el despojo de las masas, y sólo puede realizarse aplicando altas dosis de represión. La segunda, propuesta por la alianza defensiva, porque es económicamente inviable, y reedita una y otra vez la crisis de acumulación, a niveles cada vez más profundos.

En una línea que se propone continuar con los postulados de O’Donnell, Carlos Acuña¹⁷ analiza los enfrentamientos entre las distintas corporaciones empresarias durante el período 1955-1983. Su hipótesis principal es que los conflictos entre corporaciones, y también el surgimiento y disolución de entidades de tercer y cuarto grado durante el período, quedó directamente ligado a la lucha entre el sector “liberal” de las cámaras empresarias

17 Acuña, op. cit.

(que expresaban los intereses de la gran burguesía asociada al capital multinacional) y aquel constituido por los intereses del empresariado mediano y pequeño. Los representantes del segundo sector se nuclearon en la CGE, mientras que los primeros lo hicieron en ACIEL, entre 1958 y 1973, y en APEGE en 1975-1976. El surgimiento de estas últimas entidades estuvo ligado a la necesidad de enfrentar la presencia política de la CGE (su resurgimiento en 1958 y su influencia política a partir de la victoria electoral peronista en 1973).

En lo político, y más allá de su formal apartidismo, la CGE se asoció fundamentalmente al peronismo, y desde fines de los '50, también a sectores del radicalismo. Por esta razón, ampliaba su influencia política durante los gobiernos civiles. El avance de los intereses representados por la CGE coincidía con la etapa ascendente de los ciclos económicos, y la ampliación de su poder dependía de las aperturas políticas que permitiesen la canalización de su alianza con los sectores obreros. En términos ideológicos la CGE postulaba: a) la necesidad de una fuerte presencia del Estado como guía y ordenador de la política; b) la necesidad de concertar las estrategias socioeconómicas con el Estado y los sectores sindicales; c) reducir la presencia del capital multinacional en áreas consideradas estratégicas.

Por el contrario, tanto ACIEL (Acción Coordinada de las Instituciones Empresarias Libres) como APEGE sustentaron un discurso de corte liberal que planteaba: a) la necesidad de reducir la presencia del Estado en el plano económico y social; b) la importancia de basar el desarrollo sobre una asignación de recursos guiada por el libre juego de las fuerzas de mercado y no en una dinámica de negociación entre corporaciones; c) planteaban un papel relevante del capital multinacional en el desarrollo. El poder político de estas asociaciones disminuía con la participación

en el gobierno de representantes de la alianza entre la burguesía local y los trabajadores, mayoritaria en términos electorales. Por eso, su participación se acrecentó con gobiernos autoritarios, aportando apoyo político-ideológico y un importante número de funcionarios para cubrir puestos jerárquicos en el aparato estatal. El avance del peronismo hacia 1973 generó tensiones y rupturas en el interior de la UIA, expresión de los industriales liberales. Finalmente, la incorporación de la CGE al gobierno, sumado a la ausencia de canales de comunicación con las nuevas autoridades así como las tensiones internas no resueltas, forzaron la integración de la UIA a la CGE. A pesar de su peso económico, la ex UIA padecía la hegemonía política de la burguesía local. No mucho tiempo después, el fracaso del plan económico, sumado a la crisis política creciente y al aumento de la violencia política que afectaba particularmente a los empresarios, incrementaron las tensiones internas dentro de la CGE. Particularmente, comenzó a escucharse el reclamo de mayor independencia frente al gobierno, encabezado por los ex UIA, organizados ya como línea interna de la CGE. En el mismo período, FAA se desafilía de la CGE planteando disidencias similares. Con la agudización de la crisis surge APEGE (que incluía a SRA, CRA, Cámara Argentina de Comercio, Bolsa de Comercio, y a la que luego se integra Asociación de Bancos Argentinos, entre otras). Esta corporación surgió con el objetivo de oponerse al gobierno constitucional y enfrentar a la CGE. La acción de esta nueva entidad, y la profundización de la crisis, minaron las bases de la CGE. En febrero de 1976, gran parte de su base empresarial se plegó al lock out decretado por APEGE. El golpe del '76 fue impulsado y apoyado por los miembros de APEGE y por los ex UIA desde dentro de la CGE. Luego del golpe, la CGE y sus federaciones fueron intervenidas. Por el contrario, los actores colectivos y asociaciones ligadas al gran capital dieron su apoyo

activo a la dictadura.

El trabajo de Acuña es útil como aproximación general a los alineamientos políticos de las corporaciones industriales, y sustancialmente correcto. Sin embargo, un análisis tan general no permite ver cómo se fue conformando y cómo actuó la alianza que impulsó el golpe. Por otro lado, tiende a tomar a las corporaciones como organizaciones homogéneas, sin atender a su heterogeneidad interna y a las tensiones derivadas de ello. A su vez, la superficialidad con la que se aborda la coyuntura 1969-1976, le impide ver que no solo los antiguos miembros de la UIA terminaron sumándose a la alianza golpista, sino buena parte de las bases de la CGE. Como señala O'Donnell, el grado de amenaza que pendía sobre las bases de la sociedad capitalista, terminaron alineando a todas las fracciones de la burguesía detrás de la salida golpista. Se desdibujan, a su vez, los enfrentamientos interburgueses que precedieron a este alineamiento.

Jorge Niosi,¹⁸ por su parte, abarca un período anterior al golpe de 1976, pero que comparte ciertos rasgos en común, en especial el intento de la burguesía de cerrar la crisis de acumulación. El autor caracteriza que la dictadura de 1966 constituyó la oportunidad de los grandes empresarios de hacerse con el poder político, que sólo era posible de la mano de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el gobierno habría representado los intereses de la UIA, al intentar desarrollar una política sobre la base de la dependencia económica de los países imperialistas bajo la dirección de esta fracción del capital. El fracaso de la dictadura en 1969, con el Cordobazo, expresa para el autor el fracaso de este programa económico asentado en bases dictatoriales y el retorno de la clase obrera y de la burguesía nacional al poder.

18 Niosi, Jorge: *Los empresarios y el Estado Argentino (1955-1969)*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1974.

La supuesta contradicción nacional-dependiente encarnada en los programas de las alianzas en pugna también es señalada por Dardo Cúneo.¹⁹ Él caracteriza que ACIEL, y en consecuencia las entidades que la conformaron, entre ellas la UIA y SRA, se guiaban por criterios tradicionalistas, entre los cuales el libre comercio y el rechazo a la ingerencia del Estado serían sus pilares.

Jorge Schvarzer,²⁰ en el trabajo más extenso sobre la UIA que se haya realizado, sostiene que a lo largo de su historia la UIA hizo poco hincapié en defender políticas pro-industriales. La razón, a su criterio, es que la UIA estuvo dirigida por exponentes de la burguesía diversificada, asentada en varias ramas y con una fuerte impronta financiera. Esto determinó que la UIA no haya defendido ni los intereses de la industria en su totalidad, y ni siquiera los de algunas empresas en particular. Como ejemplo plantea que muchas de las empresas administradas por sus dirigentes se fundieron, como Tamet, Campomar y Selsa. La razón que esgrime es que estos empresarios buscarían rentabilidad rápida mediante el control del mercado, con grandes empresas que al poco tiempo resultaban obsoletas. Los empresarios que seguían esta lógica sólo esperaban exprimir la planta instalada sin reinvertir en nueva tecnología y luego cerrar la fábrica sin más para girar su capital hacia otra rama de la producción. No obstante, señala que esta línea general fue interrumpida durante la gestión de Elvio Coelho desde 1967, cuando la preeminencia de la CGE obligó a la UIA a inclinarse por políticas pro-pyme. En efecto, esta línea derivó en la fusión de ambas entidades en 1974. Las crisis internas que acompañaron la agitación de la época se reflejó en la posición adoptada por cada una de las entidades ante el golpe, intervención y disolución para

19 Cúneo, Dardo: *Comportamiento y crisis de la clase empresaria*, Editorial Pleamar, Buenos Aires, 1967.

20 Schvarzer, op. cit.

la CGE e intervención y acuerdo condicionado con Martínez de Hoz para la UIA.

Los trabajos citados asientan sus hipótesis en la contradicción nacional-dependiente e industrial-financiero que expresaría el programa y acción de la UIA. La entidad, a su juicio, representaría los intereses de grandes capitales anti-nacionales y anti-industriales. Consideramos que dicha posición no permite explicar la estrategia de la UIA durante la etapa. Se asienta en prejuicios que no se verifican en el estudio de las declaraciones y acciones así como tampoco en la composición social de la entidad. El análisis de dicho aspecto da por resultado que la dirigencia de la UIA reunía en el período a un pequeño grupo de grandes capitales a escala nacional y un amplio número de capitales menores, lo que contradice los postulados de estos autores.

La bibliografía específica sobre la burguesía rural se ha ocupado del enfrentamiento con el gobierno peronista y su apoyo al régimen surgido del golpe de marzo del '76. Sin embargo, al quedarse en el plano discursivo, no pueden ver las diferencias tácticas existentes entre las diferentes corporaciones de la burguesía. Un ejemplo claro son los casos de CARBAP y SRA, analizados en los trabajos de Mirta Palomino.²¹ Analizando solamente sus pronunciamientos nos encontramos con dos corporaciones que se enfrentan al gobierno peronista en los mismos términos y con los mismos reclamos: el intervencionismo estatal, el monopolio de la comercialización y los bajos precios pagados a los productores agrarios. Ambas corporaciones, asumiendo posiciones claramente liberales, se oponen a un gobierno que perciben como "estatista". Ambas apoyaron al gobierno surgido del golpe, ya que su "filosofía" coincidía con la de estas entidades. Si cabe alguna diferencia entre

21 Palomino, *Tradición y Poder...*, op. cit.; Palomino, *Organizaciones corporativas...*, op. cit.

ellas, es apenas de grado y no de fondo. Sin embargo, cuando superamos el nivel discursivo y nos adentramos en las acciones emprendidas por estas organizaciones vemos diferencias más profundas que no llegan a percibirse en el discurso. Por otro lado, este plano discursivo no permite entrever diferencias sustanciales entre la oposición a todos los gobiernos “estatistas” del período 1955-1973 y el apoyo a los gobiernos “liberales”, que se expresaron en mayor o menor medida con cada golpe de estado. Así, no habría ningún tipo de diferencia entre el impulso a los golpes del '62, del '66 o del '76. Sin embargo, cuando hacemos foco más allá del discurso, nos encontramos con que la acción político-gremial de estas corporaciones en el período 1973-1976 supera ampliamente todo lo visto anteriormente. El recurso a la acción directa y los intentos de desestabilizar al gobierno mediante la movilización de los productores agrarios aparecen como un elemento novedoso, que podría explicarse porque a diferencia de coyunturas anteriores, aquí estaba en juego la continuidad de las relaciones sociales capitalistas.

A su vez, el derivar el apoyo al golpe del '76 de la posición “liberal” que caracterizaría a ambas corporaciones, y que puede seguirse a partir de los discursos y posicionamientos públicos de las corporaciones, no se explican las posiciones asumidas por otras corporaciones rurales, como FAA o CONINAGRO. De hecho, y nuevamente tomando como objeto de estudio el discurso de las corporaciones, se establece una oposición entre corporaciones “democráticas” (FAA) y “golpistas” (SRA y CARBAP) que resulta problemático. Como veremos, hacia 1975 FAA trazó una alianza con CARBAP y se convirtió en una de las corporaciones que, a través de su impulso a los paros agrarios, participó destacadamente de la ofensiva golpista. Si atendemos exclusivamente al nivel discursivo, FAA llamó en múltiples oportunidades a “defender las

instituciones”. Y sin embargo, actuó en alianza con los golpistas impulsando los paros. Esta contradicción no puede salvarse en el plano de análisis que elige Palomino, y quizás por ello la actuación de FAA durante el período aún este esperando un estudio profundo y definitivo.

Sidicaro²² también se ocupa de analizar los conflictos del gobierno peronista con la burguesía agraria. En una línea similar a la de Palomino, señala que el principal problema fue la política del gobierno hacia el sector. La política agraria peronista atribuyó a la estructura y dinámica del sector agrario el carácter de obstáculo para alcanzar un mayor desarrollo económico. En función de ello se establecieron una serie de medidas para corregir la situación: impuesto a la renta normal potencial de la tierra, suspensión de los juicios por desalojo de arrendatarios, creciente intervención del Estado en el comercio de granos y carnes, establecimiento de precios máximos. Este tipo de medidas fueron sistemáticamente criticadas por las principales organizaciones empresarias del sector, concentrándose el autor en las posiciones de SRA. Luego de la renuncia de Gelbard y de su equipo económico se abandonaron los proyectos de reformas estructurales, pero, sin embargo, la política de ingresos siguió perjudicando al sector agrario. Por eso la oposición de la burguesía agraria al gobierno no cedió: salvo con el Plan Rodrigo, las críticas de la SRA se hicieron sentir contra todos los equipos económicos. La profundización de los enfrentamientos con el gobierno llevó a la adopción de medidas de fuerza durante todo el año 1975, que movilizaron conjuntamente a la SRA y al resto de las corporaciones agrarias. Estas movilizaciones fueron adquiriendo un carácter abiertamente golpista, como señala el autor.

22 Sidicaro, Ricardo: *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2002.

A su vez, el creciente peso de las corporaciones sindicales luego del alejamiento de Gelbard (y en particular, la movilización que derrotó al Plan Rodrigo) mostraron a las corporaciones empresariales que ya no había más solución que el golpe. Sidicaro describe y demuestra aquí cómo las corporaciones empresarias fueron gestando el clima golpista. Analiza un importante número de fuentes que demuestran el impulso que le dio la burguesía a la salida dictatorial. Sin embargo, no se tiene en cuenta que el golpe del 76 tiene un carácter distinto a los golpes anteriores, ya que se propone liquidar físicamente a la vanguardia política revolucionaria. Al eliminar de la explicación a los partidos de izquierda, a las organizaciones armadas y a los obreros organizados que escapaban al control de la burocracia sindical (que casi ni aparecen en la explicación del período), se elimina un actor central para explicar el proceso. Sidicaro explica el golpe por el lugar que ganó la burocracia sindical al interior del gobierno, sin ver la confluencia en las acciones entre la burocracia sindical y la burguesía, y sin encontrar un elemento que permita explicar por qué el carácter del golpe que impulsó la burguesía es completamente diferente a los golpes anteriores. Creemos que ese elemento se encuentra en la apertura de un proceso revolucionario en 1969 y en la conformación de una Fuerza Social Revolucionaria. Otro problema presente en Sidicaro, compartido a su vez por el conjunto de los estudios sobre la etapa, es que al explicar el impulso de la burguesía al golpe, centra la mirada en aquellas corporaciones que se identifica vulgarmente con los intereses más concentrados (SRA, Bolsa de Comercio, UIA). Partiendo de una suposición similar a la de Basualdo, posa la mira en estas corporaciones por las características que asumió el programa económico implementado por la dictadura, y deja de lado la actuación de las corporaciones de las capas más débiles de la burguesía (CGE y FAA).

Hasta aquí una presentación escueta de las hipótesis sostenidas en la bibliografía sobre el comportamiento de las distintas fracciones de la burguesía ante el golpe de 1976. En términos generales, aquellos que trabajan el período ubican correctamente los alineamientos de buena parte de las corporaciones y sus posiciones frente al golpe. Sin embargo, hay una serie de deficiencias y omisiones que creemos correcto señalar. En primer lugar que, partiendo de prejuicios, no se analiza la actuación y las disputas internas en las corporaciones que expresaban los intereses de las capas más débiles de la clase dominante (CGE y FAA). Sin estudiar su comportamiento durante el período, o tomando elementos parciales, se las ubica en el “campo democrático”. Sin embargo, como veremos, la FAA y buena parte de la CGE, terminarán alineándose con los golpistas.

Otra crítica pertinente es que la acción política de la burguesía se ha abordado siempre en términos generales, perdiendo de vista los cambios cualitativos que presentan los enfrentamientos político-militares de la etapa y lo que estaba en juego. En ese sentido, se destaca una oposición entre corporaciones liberales o estatistas (que también aparece como contradicción nacional-trasnacional, productiva-financiera o democrática-golpista), y se derivan de allí los posicionamientos asumidos frente a los regimenes dictatoriales y democráticos. Creemos que analizando las posiciones de las corporaciones a la luz de la crisis hegemónica y de la apertura de un proceso revolucionario a fines de los '60, esta oposición pierde peso. Una muestra de ello es la forma en que se definen los alineamientos en los meses previos al golpe del '76, cuando el conjunto de la burguesía (liberal y estatista) se alinea detrás de la salida golpista.

A su vez, la producción académica sobre el tema no se ha ocupado de elaborar una reconstrucción sistemática de los alineamientos

y de las acciones de las distintas corporaciones a lo largo de período. Predominan trabajos parciales (o demasiado generales), que pierden de vista ejes importantes del problema. También son abundantes los trabajos que, sin reconstruir los hechos, deducen las posiciones de las distintas capas y fracciones de la burguesía, o bien de la estructura económica, o de los resultados del proceso (a quién benefició el plan económico implementado por la dictadura). Más allá de las discusiones puntuales con cada uno de estos autores, el problema general que los atraviesa es que ninguno se ha ocupado de reconstruir empíricamente la actuación de las distintas fracciones y capas de la burguesía durante el período. En este trabajo pretendemos profundizar en las acciones y los alineamientos de las diferentes capas de la burguesía industrial y agraria, tomando como observable las corporaciones empresarias que representaban sus intereses. Esperamos contribuir de esta manera a la reconstrucción de los enfrentamientos de la década del '70, y en particular, a la reconstrucción de la génesis, el desarrollo y las batallas emprendidas por la alianza de clases que impulsó el golpe de estado de 1976 como salida a la crisis hegemónica abierta en los '50. La Fuerza Social Contrarrevolucionaria.

El retorno del peronismo al gobierno: 1973-1974

El retorno del peronismo al gobierno, el 25 de mayo de 1973, constituyó un intento, encabezado por ciertas fracciones de la burguesía, para descomprimir la situación política explosiva que vivía en esos momentos el país. La clausura del régimen militar instaurado en 1966 y el desarrollo de unas elecciones sin la proscripción del peronismo, por primera vez en casi 20 años, permitieron canalizar el descontento de las masas por la vía institucional. Frente a la coyuntura electoral, la Fuerza Social Revolucionaria se quebró, y buena parte de quienes venían enfrentando al régimen militar abandonaron el combate esperanzados en el retorno del viejo líder reformista. Sin embargo, Perón no tardó mucho en demostrar que no volvía para llevar adelante la “revolución nacional” que anhelaba el ala izquierda de su movimiento. A poco de andar comenzaron los ataques contra la izquierda peronista y no peronista, avalados por el propio líder. Primero fue la masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973. Le siguieron los golpes contra las gobernaciones afines a la “Tendencia Revolucionaria”, y la creación de una fuerza paramilitar destinada a eliminar a los dirigentes de la izquierda peronista y no peronista: la Triple A.

La represión puesta en marcha bajo el régimen democrático fue a su vez consecuencia y prueba de que el proceso revolucionario abierto en 1969 no se había cerrado. El refloreCIMIENTO de las ilusiones reformistas y la apertura de canales institucionales que permitieron reencauzar parte del descontento hicieron mella en la alianza revolucionaria, pero no la desestructuraron por completo. Esas tendencias seguían vivas en aquellos que no sucumbieron al encanto reformista, en particular en los partidos de la izquierda revolucionaria. Pero sobre todo, el proceso seguía

abierto porque el reformismo no podía ofrecer una salida a la crisis de acumulación. Es decir, aquellas contradicciones que habían abonado el terreno para que los planteos revolucionarios encarnen en ciertas fracciones de los explotados, seguían pendientes de resolución. La acción represiva (legal e ilegal) desplegada por el nuevo gobierno, y la necesidad de un golpe militar altamente represivo en 1976, es muestra de ello. También lo son los conatos de insurrección en Santa Fe (Villa Constitución) y la organización obrera para enfrentar los planes de ajuste de Rodrigo y Mondelli (las Coordinadores Interfabriles dirigidas por los partidos de izquierda).

En términos económicos el peronismo impulsó un plan de cuño claramente reformista, elaborado por la Confederación General Económica (CGE), que fue llevado adelante por José Ber Gelbard, histórico dirigente de la entidad que asumió como ministro de Economía. El principal problema de la economía argentina, las crisis cíclicas que estallaban periódicamente como crisis de balanza de pagos por el saldo negativo de las exportaciones con respecto a las importaciones, intentó ser resuelto, nuevamente, transfiriendo ingresos del agro a la industria. El principal mecanismo de transferencia de renta fue la intervención estatal en el comercio exterior e interior de productos agropecuarios. A través de la centralización de la producción y su venta mediante organismos oficiales, el Estado captaba una porción de la renta pagando precios menores a la cotización internacional de los productos. A su vez, se intentó estimular la producción agraria para aumentar los excedentes exportables, sancionando impositivamente la desinversión. El subsidio a las exportaciones industriales fue la principal vía en que la renta captada por el Estado iba a para al ineficiente entramado industrial.²³

23 Acuña, op. cit.

Pero la iniciativa más importante encarada por Gelbard fue el acuerdo entre una fracción del empresariado y las cúpulas sindicales, destinado a contener la inflación. El acuerdo, denominado “Pacto Social”, fue suscripto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), y fue aprobado por el conjunto de la burguesía industrial. A partir de la firma del “Pacto Social”, los empresarios se comprometieron a no aumentar los precios y los dirigentes sindicales a no encarar luchas por aumentos salariales. Sin embargo, este acuerdo tenía implicancias que trascendían los objetivos económicos: el cerrojo que se imponía sobre los conflictos salariales apuntaba no solo a contener la inflación, sino a aquietar las aguas de la conflictividad obrera.

La Confederación General Económica (CGE) y la Unión Industrial Argentina (UIA) conformaban en el período abordado las principales representaciones de la industria nacional. Ambas constituyeron una fuerte base de apoyo al tercer gobierno peronista, siendo la primera de ellas proveedora de funcionarios, cuyo principal exponente fue José Ber Gelbard. El recorrido de ambas confluyó en su unificación en una gran central empresaria cuyo eje articulador fue la defensa del programa económico-social peronista.

En los meses previos a las elecciones presidenciales de marzo de 1973, la CGE intervino en favor de una apertura democrática irrestricta, que objetivamente implicaba el retorno del peronismo al gobierno. Participó durante ese período en actividades conjuntas con la CGT y los partidos reunidos en la “Hora del Pueblo”, denominación que recibió el espacio que nucleaba a peronistas y radicales que agitaban en favor de una apertura democrática sin proscripciones, en oposición a la iniciativa impulsada por el

régimen militar, denominada “Gran Acuerdo Nacional”.²⁴ Como señalábamos, el triunfo electoral colocó al frente del Ministerio de Economía a José Ber Gelbard, histórico dirigente de la entidad, que se mantuvo en el cargo bajo la presidencia de Héctor Cámpora, de Juan Domingo Perón y de María Estela Martínez de Perón. A pesar de los virajes políticos en la conducción del Ejecutivo Nacional, Gelbard siguió en funciones hasta el 21 de octubre de 1974, una muestra cabal de que la CGE constituyó el principal sostén empresario a la política peronista.

La UIA también expresó su apoyo a la pactada transición a la democracia. En el marco de la Asamblea Nacional Empresaria organizada por la Federación Gremial de Comercio e Industria de Rosario, los empresarios aprobaron una declaración conjunta en la que se hacía referencia a las elecciones nacionales próximas:

“Los empresarios argentinos, representantes de la industria, el comercio y servicios, conscientes de su papel y de la particular significación del proceso histórico que se inicia en nuestra patria, juzgan pertinente definir el carácter y los objetivos de su participación en la tarea de reconstrucción nacional, para lograr el bienestar general.

“Los movimientos políticos más significativos han expresado su convicción de que dicha tarea corresponde a todo el pueblo.

“Esta madurez política determina que el acto comicial del 11 de marzo sea la expresión de una clara y ferviente voluntad de unidad nacional, de cambio social y económico y de convivencia pacífica y democrática entre todos los habitantes de nuestro suelo.”²⁵

La citada declaración constituyó una expresión de apoyo general al proceso político en andas antes que la inclinación por una fuerza particular. Finalizados los comicios, las posiciones comenzaron a definirse con mayor precisión. Una vez que el triunfo camporista

24 Ídem.

25 *La Prensa*, 25/3/73.

resultó un hecho, Elvio Coelho, presidente de la UIA, elevó una nota al presidente electo a propósito de sus dichos en un discurso público. La entidad resaltaba el rol que el mandatario adjudicó a los empresarios:

“En mi carácter de presidente de la UIA, institución que aglutina al empresariado industrial del país, tengo el honor de dirigirme al señor presidente electo, a fin de hacerle llegar las reflexiones que sugiere su mensaje a la Nación irradiado desde Mendoza, en los párrafos destinados a la responsabilidad de las fuerzas empresarias en el actual momento argentino. Su alocución, en el aspecto antes referido, contiene dos partes claramente diferenciadas. Una, relativa al sentido de justicia que debe imperar en la política del sector empresario con respecto a la distribución del fruto del trabajo conjunto de todos los integrantes de la empresa. La otra, atinente a la capacidad de nuestro sector para acrecentar la riqueza de la Nación. Con respecto a la primera, creo trasuntar fielmente el espíritu que hoy anima al mundo industrial, al reafirmarle nuestra posición acerca de que la empresa es una institución que solo puede funcionar satisfactoriamente si todos sus integrantes se sienten partícipes de una labor común con fines comunes [...]

“En lo que hace al papel del empresariado en el objetivo de acrecentar la riqueza de la Nación, la experiencia de todos estos últimos años demuestra que tiene una real capacidad creadora y de trabajo, apenas las circunstancias permiten el desenvolvimiento de esas facultades. Estoy absolutamente seguro, doctor Cámpora, de que en un clima de estabilidad política, de orden y con una conducción económica apropiada, el empresariado argentino demostrará ampliamente al país y al gobierno constitucional que usted presidirá, sus condiciones para contribuir al aumento de la riqueza de la Nación y de su pueblo. Pocos sectores como el nuestro comparten la verdad de su afirmación de que ‘nadie se realiza en un país que no se realice’, porque hemos sido uno de los protagonistas del proceso social que se han visto más frustrados en su ambición de realización, por políticas equivocadas que se nutrían de prejuicios y falsas ideas”.²⁶

Héctor Cámpora respondió a las apreciaciones de la corporación en forma positiva. Resaltó su acuerdo con la consideración de la UIA acerca del rol del sector industrial en los campos de la

²⁶ *La Prensa*, 13/4/73.

economía y sociedad. Asimismo, distinguió que su labor se ceñiría al programa con el que ganó las elecciones, cuyos puntos centrales eran la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y para su cumplimiento, era condición la colaboración de todos los sectores del país.²⁷

El presidente de la UIA precisó posteriormente los puntos programáticos que la alinearon al nuevo gobierno: “mayor desarrollo industrial, la mejor protección y su adecuada distribución espacial, son objetivos que comparto por considerarlo como primera y auténtica necesidad nacional”.²⁸ Inclusive, en ocasión del 52º aniversario de la Federación Gremial del Comercio e Industria de Rosario, Coelho resaltó que era condición para el desarrollo industrial un gobierno surgido del sufragio y el respeto por la Constitución Nacional, “olvidando” el apoyo de la entidad al golpe de Juan Carlos Onganía.²⁹

El derrotero que culminó en el apoyo de la UIA al gobierno peronista no estuvo exento de contradicciones y de disputas internas. Pero creemos que no se trató de mero oportunismo (económico o político), como se desprende de posiciones como las de Schvarzer, O’Donnell o Acuña. El Cordobazo marcó un quiebre en la relación de la UIA con el gobierno militar. Viró del apoyo total durante la gestión de Krieger Vasena a un enfrentamiento abierto. El problema radicó en las medidas ensayadas por el gobierno para paliar la crisis. La UIA se opuso a las concesiones del gobierno hacia la clase obrera, consistentes en otorgar aumentos salariales y otras reivindicaciones laborales. Se opuso a la devaluación decretada y solicitó rebajas arancelarias para poder importar maquinarias. Todavía era momento, para la capa de la burguesía

²⁷ *La Prensa*, 19/5/73.

²⁸ *La Prensa*, 26/5/73.

²⁹ *La Nación*, 1/6/73.

industrial que encabezaba la UIA, de importar maquinarias y abaratar los costos de los insumos importados.

Sin embargo, esa línea no era asumida por el conjunto de los capitales pertenecientes a la UIA. Contradiendo esta demanda, también se abogaba por mantener y expandir la protección de la industria nacional. Esta línea no necesariamente debería resultar contradictoria para la dirección de la UIA, que además de demandar insumos y maquinarias importadas a bajos precios, necesitaba mantener la protección hacia las ramas en las que competía. Pero sin duda esa demanda resultaba más imperiosa para los capitales más pequeños que convivían en la UIA con los grandes que la dirigían. Estas contradicciones internas llevarán, durante este período, a una crisis en el interior de la entidad industrial, que la obligó a dar un giro en su línea político-económica y a un reacomodamiento en las alianzas trazadas con otras fracciones de la burguesía. Un sector importante de la UIA nucleado en diferentes entidades provinciales se unificó en disputa con la dirección nacional. Reclamaban se rechace el financiamiento al capital extranjero dictaminado por el gobierno nacional, que se otorgue mayor representatividad a las provincias en los organismos de gobierno de la UIA y se rompa la alianza con la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio en ACIEL.

A la vez que la entidad rompía por “derecha” con el nuevo gobierno de las Fuerzas Armadas, se gestaba en el interior de la UIA un movimiento alineado con la estrategia reformista. El desarrollo del Gran Acuerdo Nacional que abría las puertas al peronismo como táctica para reencauzar la crisis revolucionaria, y el incremento de la renta de tierra obraron como polo de atracción. Un sector de la UIA parece haber visto en dicha coyuntura una posibilidad de intervención política, alineándose con la CGE en función de captar una porción de las riquezas en alza.

En ese contexto, la dirección de la UIA tuvo que ceder ante la inminente ruptura de un sector importante de su base social que amenazaba con alinearse a la CGE. Este riesgo obligó asimismo a quebrar la alianza liberal con ACIEL. Así, la fuerza de atracción de la estrategia reformista en un contexto aparentemente propicio para su desarrollo, sumada a la posibilidad de neutralizar la amenaza revolucionaria constriñeron a la dirección de la UIA a tomar, aunque sea momentáneamente, el rumbo del peronismo. La heterogeneidad interna de la UIA se expresaba así en dos estrategias contrapuestas en su seno: la liberal y la reformista. En efecto, antes que una estrategia de pendulación en búsqueda de ganancias a corto plazo, el viraje de una estrategia a otra parece responder a condiciones socioeconómicas que habilitaban la primacía de la estrategia de los pequeños capitales sobre los grandes.

Frente a la firma del “Pacto Social”, el 6 de junio de 1973, la UIA se pronunció a favor del acuerdo, condenando la “desastrosa política salarial que comenzó durante 1970”:

“Esa política, si es que merece llamarse tal a la ausencia de ella, es la causante principal del pavoroso déficit fiscal, de las perniciosas expectativas inflacionarias que tanta responsabilidad tienen en nuestra lamentable tasa de aumento de las crisis en las empresas que provocan continuamente conflictos sociales y del incremento pernicioso en la desocupación. [...] La justicia y el equilibrio presiden esta nueva concepción salarial y por lo mismo puede constituirse en un instrumento fundamental que haga posible un restablecimiento de la solidez y el dinamismo de nuestra economía”.³⁰

Como segundo paso, la entidad tomó cartas en el asunto. La UIA llamó a una reunión a las 100 empresas principales de cada rama de la industria para acordar una disminución de los precios con el fin de contribuir al cumplimiento de la política de estabilización

³⁰ *La Nación*, 10/1/73.

emprendida por el nuevo gobierno. En efecto, 180 empresas asociadas a la UIA dispusieron rebajas en sus precios para prestar ayuda al plan. A la reunión asistieron representantes de las ramas de la alimentación, textiles, metalúrgicos, licoristas, cerveza, vidrio, plásticos, indumentaria, yerba mate, fibras sintéticas, química, papel, tabaco, perfumería, pintura, caucho, jabón, artículos de limpieza, petróleo, maderas y cerámica. Las rebajas discutidas por las empresas de las distintas ramas oscilaron entre un 7 y un 14%.³¹ Al poco tiempo, la UIA decidió ingresar a las Comisiones Sectoriales de Precios. Las mismas fueron creadas por la Comisión Nacional Asesora de Precios, Ingresos y Nivel de Vida, integrada por el Estado, la CGE y la CGT, cuyo objeto era mantener la estabilidad de precios y salarios.

A la par de las medidas encaminadas a la contención de la lucha salarial, la UIA emprendió su campaña contra los “elementos desestabilizadores”, es decir, las organizaciones políticas de izquierda. En primera instancia, desde su tribuna. En el discurso de cierre del Día de la Industria de 1973, Coelho expresó claras definiciones políticas:

“Algunos resisten el cambio procurando aferrarse desesperadamente a los restos de un tiempo que no volverá. La ultraderecha que resiste el cambio sueña con un pasado al que en el fondo idealiza cayendo en una utopía de retrospección. La ultraizquierda comete una utopía de anticipación, al suponer dogmáticamente que todo futuro es mejor que el presente y que toda tradición debe quemarse ante el altar de la revolución [...] El cambio nos impone la noble misión de luchar contra la pobreza, por la creación de nuevas fuentes de trabajo, por el ascenso social, por la creciente creación de bienes que satisfagan las necesidades de la población, luchar por la grandeza argentina...”³²

Sin embargo, como se aprecia en la declaración, la condena a

³¹ *La Nación*, 14/6/73.

³² *La Nación*, 4/9/73.

la “ultraizquierda” se hacía desde el propio campo reformista, ya que se condenaba también a las añoranzas golpistas de la “ultraderecha”.

El apoyo al gobierno llevó a la UIA a plantearse, poco tiempo después, la unificación con la CGE. Una vez asumida la presidencia por Juan Domingo Perón, en octubre de 1973, las ideas de unidad comenzaron a tomar cuerpo. La fusión tuvo como precedente el acta firmada en el verano de 1974, donde la UIA y la CGE manifestaron “su coincidencia con los objetivos generales enunciados en materia económica por el superior gobierno y con los propósitos que han originado el acta de Compromiso Nacional”.³³ El 29 de abril de ese año quedó ratificada la vocación de unificación empresarial al elegirse como miembros del consejo superior de la CGE a tres dirigentes de la UIA, entre ellos a Martín Noel como secretario. El 3 de julio de 1974 la UIA y la CGI (Confederación General Industrial, integrada a la CGE) quedaron fusionadas en la Confederación Industrial Argentina (CINA), nueva “pata industrial” de la CGE. En su discurso, el presidente de la nueva entidad, Carlos Coquegniot, justificó la unión como un acto que tenía presentes “los superiores intereses de la Nación, que necesita alcanzar su plena independencia, de integración, de auténtica representatividad y de solidaridad social”.³⁴

En el primer plenario luego de la unificación de las entidades empresariales, o mejor dicho de la incorporación de la UIA a la CGE, se acordó un documento en defensa del gobierno de Perón, llamando al conjunto de los empresarios a apoyarlo, con los siguientes puntos:

“El plenario

³³ *La Nación*, 23/2/74.

³⁴ *La Nación*, 3/8/74.

“1) Apoya incondicionalmente el proceso de institucionalización que vive el país y que continuará bregando por el mantenimiento de la unidad nacional.

“2) Reconoce en la actual política económica que ha tenido su origen en las Coincidencias Programáticas de diciembre de 1972 y que fuera votada por el pueblo argentino como el verdadero camino para obtener la reconstrucción y la liberación nacional.

“3) El empresariado tiene conciencia de la difícil tarea que han tenido que afrontar las autoridades y del largo camino que aún resta por recorrer. El ataque de los enemigos es por los aciertos de este proceso de vigencia. Ello debe llevarnos a defender celosamente lo realizado, para considerarlo definitivamente y seguir avanzando en forma resuelta hacia los grandes objetivos fijados. Por su parte, el Gobierno ha dado pruebas suficientes de su disposición al diálogo constructivo que posibilita la rectificación cuando corresponde.”³⁵

La muerte de Perón y la asunción de Isabel Martínez, su esposa, no alejó a la CGE del gobierno. Su presidente, Julio Broner, expresó a la flamante presidenta el apoyo de la entidad al Poder Ejecutivo Nacional.³⁶ A su vez, escucharon atentos en la celebración del Día de la Industria las referencias de Isabel al enemigo común: “[los] apóstoles de la violencia, que buscan desorganizar al país, deteniendo sus fábricas y convulsionando a sus trabajadores”.³⁷ Más allá de ciertas divergencias en cuanto a la aplicación de políticas específicas, como el acuerdo de precios, el sector industrial se encolumnó tras el proyecto peronista iniciado por Cámpora en 1973, continuado por el propio Perón hasta su muerte, y luego asumido por Isabel y sus brujos.

El gobierno peronista también intentó conseguir el apoyo de algunas fracciones de la burguesía rural. En particular, se buscó el respaldo de la Federación Agraria Argentina (FAA), que se había incorporado recientemente a la CGE. Desde la Secretaría de Agricultura, a cargo del Ingeniero Horacio Giberti, se impulsaron

³⁵ *La Nación*, 20/8/74.

³⁶ *La Nación*, 31/8/74.

³⁷ *La Nación*, 3/9/74.

algunas medidas históricamente reclamadas por esta corporación, y otras que coincidían con sus posiciones político-económicas. Entre las medidas más importantes se encontraban las leyes sobre la comercialización de granos y carnes (Nº 20.573 y 20.535). En el caso de las carnes se regulaba el comercio exterior, estableciendo precios máximos inferiores a su cotización internacional. En el caso de los granos, se establecía el monopolio estatal y la fijación de precios para el comercio interior y exterior. Estas leyes fueron rápidamente sancionadas por el Poder Legislativo y estuvieron vigentes hasta 1976. Distinto fue el caso de la Ley Nº 20.538, que establecía un impuesto a la renta normal potencial de la tierra, ya que fue sancionada pero no llegó a aplicarse. Ese impuesto implicaba una carga impositiva mayor a las tierras que fueran explotadas por debajo de su productividad media, y buscaba sancionar a la “oligarquía terrateniente” que supuestamente poseía tierras incultas o mal explotadas. Otra medida muy cuestionada fue la Ley Agraria impulsada desde la Secretaría de Agricultura, que nunca llegó a promulgarse. Este proyecto de ley contemplaba la expropiación de tierras improductivas por parte del Estado.³⁸ Mientras que CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) y Sociedad Rural Argentina (SRA) objetaron las medidas impulsadas por el gobierno, a las que calificaron de socializantes, estatizantes o de inspiración marxista, la FAA apoyó la gestión críticamente. Sin ir más lejos, el primer Secretario de Agricultura de Cámpora fue un cuadro proveniente de la FAA, Avelino Strólogo. Este funcionario impulsó la sanción de la ley Nº 20.518, que suspendía los desalojos de arrendatarios. Un viejo reclamo de FAA, que fue vivido como un triunfo propio

38 Makler, C.: “Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista (1973-1974)”, en Graciano y Gutiérrez (dir.): *El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000*, Prometeo, Buenos Aires, 2006.

según reconocieron en su *Memoria y Balance 1973/1974*.³⁹ Sin embargo, ya para mediados de 1974 se encontraban reclamando por la ausencia de acción colonizadora y de los créditos previstos en la ley para sostener a los arrendatarios en crisis. En cuanto a las leyes de comercialización de granos y carnes, FAA saludó la estatización del comercio como una expresión de “soberanía económica”. Pero ya desde 1974 comenzaron a objetar los precios pagados por la Junta Nacional de Granos (JNG) y la Junta Nacional de Carnes (JNC), que implicaban para esta corporación un “desaliento” a la producción.⁴⁰ FAA también apoyó otras medidas cuestionadas por el resto de las corporaciones agrarias: la sanción del Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra y el proyecto de Ley Agraria. Estas posiciones la llevaron a un enfrentamiento con SRA y CARBAP, a las que criticó por su oposición a la política agraria del gobierno.⁴¹

El romance con el gobierno peronista no se extendería más allá de 1974. La profundización de la crisis económica, social y política, y el crecimiento de la amenaza revolucionaria pusieron a la FAA a la cabeza de una ofensiva de importantes magnitudes de la burguesía agraria contra el gobierno, como veremos en el próximo acápite. A diferencia de FAA, otras corporaciones pasaron de la crítica moderada al ataque abierto. A pesar de la conflictiva relación entre la Sociedad Rural Argentina y el peronismo en los años previos a su retorno al gobierno en 1973, la entidad se mostró diplomática hacia las nuevas autoridades. En septiembre del '73 la SRA firmó un acta de compromiso entre los productores agropecuarios y la Secretaría de Agricultura, que suscribía la creación de una comisión en donde se discutirían las medidas para el sector. Entre quienes firmaron

39 Ídem, p. 187.

40 Ídem, pp. 193-194.

41 Ídem, pp. 203-205.

el acta con el gobierno se encontraban la Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Sin embargo, ese apoyo no fue brindado sin reservas:

“Reafirmamos nuestra permanente vocación al diálogo constructivo; no obstante, queremos dejar establecido que la respuesta a nuestra actitud de sacrificio fue continuar una política negativa con el hombre de campo, continuándose con la depresión de los precios, interviniéndose todos los organismos de política en los que ha tenido participación el sector agropecuario -Junta Nacional de Carnes (JNC), Junta Nacional de Granos (JNG) y Consejo Agrario Nacional-; los proyectos de leyes impositivas que aumentan gravemente la carga fiscal sobre el sector. La SRA entiende que la colaboración requerida impone el deber de expresar la cruda realidad del momento que vivimos y que hace necesaria una rectificación de la política seguida”.⁴²

A diferencia de SRA, CARBAP fue una de las primeras entidades en activar contra la política agraria del gobierno, y claramente fue la que se mostró más belicosa. En septiembre del '73, sus dirigentes se negaron a firmar el acta de compromiso, que, además de SRA y FAA, había suscripto Confederaciones Rurales Argentinas, entidad de tercer grado a la que CARBAP pertenecía. En un comunicado oficial, CARBAP justificó su rechazo al acuerdo:

“Preocupa a CARBAP la implementación final de los enunciados del documento, puesto que, sobre la base de sus generalidades, se facilita la aplicación de cualquier tipo de planteo, donde no se define cuál será la participación efectiva de los productores, ni tampoco se han informado con la debida anticipación cuáles han de ser finalmente los precios de las cosechas, con lo que, en este caso, y en el supuesto de que no se compartieran los puntos de vista oficiales para la fijación de esos valores de comercialización, CARBAP, daría su aprobación a una política que posteriormente, debería enjuiciar.”⁴³

42 Sociedad Rural Argentina: *Memoria y Balance*, 1973.

43 Agudo, Jorge: *Cuatro años de acción gremial*, CARBAP, Buenos Aires, 1977, pp. 24-25.

El motivo de fondo, como explicitó Jorge Aguado (prosecretario y futuro presidente de la entidad) en el discurso de apertura de la exposición rural de Realicó, era el rechazo a la política agraria peronista, en particular, la política de precios:

“El gobierno se olvida de nuestros reclamos y pretende que nuestra entidad también los olvide y suscriba un acta de compromiso, como si no hubiera nada pendiente y todo estuviera por hacerse. Creo que no debemos suscribir ningún acta mientras no se rectifiquen las medidas que han provocado el desaliento vigente en el campo.”⁴⁴

Ya desde los meses previos habían comenzado con los ataques al gobierno peronista. En el discurso pronunciado como cierre del XXIII Congreso Anual de CARBAP, en agosto de 1973, Jorge Aguado señaló que se encontraban frente a “una larga y dura batalla a librar [...] en defensa de la producción agropecuaria”.⁴⁵ Una verdadera declaración de guerra. Las críticas pronto comenzaron a profundizarse, a medida que Giberti fue desplegando su programa de reformas. Entre 1973 y 1974, SRA y CARBAP emitieron protestas contra la regulación del comercio de granos y carnes y contra la instauración del Impuesto a la Renta Normal Potencial de la Tierra. Sin embargo, la medida más cuestionada fue la Ley Agraria, percibida como una amenaza a la propiedad de la tierra y como un intento indirecto de introducir una reforma agraria. A menos de un año de asumir las nuevas autoridades, las críticas de SRA abarcaban el conjunto de la política para el sector:

“La conducción agropecuaria hizo poco caso a la opinión de los productores, persiguiendo una política no compartida por las entidades del sector. Se asignó especial importancia a la renta neta potencial. Se han quitado alicientes al agro, se han comprimido sus ingresos y se los ha amenazado en su base jurídica a

⁴⁴ Ídem, p. 26.

⁴⁵ Ídem, p. 12.

través de proyectos que cuestionan el derecho de propiedad”.⁴⁶

Al igual que CARBAP en ese mismo período, comenzaron a vincular a los funcionarios de la Secretaría de Agricultura con “intereses ajenos al sentir nacional” y con la “subversión”:

“Quienes tienen a su cargo la conducción del país [deben] proceder con prudencia, sin dejarse llevar por programas extraños a la realidad, que acaban por prostrar el progreso económico, como lo prueban los ejemplos de algunos países que adoptaron regímenes socialistas para explotar la tierra. Hay imperialismos que para adueñarse del poder quieren destruir las bases de nuestra economía; contra ellos debemos reaccionar con la máxima energía, y esto se logrará con la unión de todos los argentinos, detrás de un ideal común”.⁴⁷

La misma tónica se repitió al darse a conocer el texto del anteproyecto de Ley Agraria que se estaba preparando en la secretaría dirigida por Giberti:

“[La Ley Agraria supone] un ataque directo a la propiedad [...] Condiciona a los productores a una situación de temor en detrimento de la productividad [...] Introduce ideas ajenas al sentir nacional y violatorias de la Constitución. [Tiene] un fuerte contenido colectivista, que crea bases jurídicas para la reforma agraria”.⁴⁸

Desde fines de 1973, la dirigencia de CARBAP se ocupó de denunciar, en cada oportunidad que tuvo, “las amenazas contra la propiedad”, el creciente “intervencionismo estatal” y sus “tendencias monopólicas”. Así lo expresó Aguado en el discurso pronunciado en el Primer Congreso Rural de La Pampa, celebrado en mayo de 1974 en la ciudad de Santa Rosa:

⁴⁶ Sociedad Rural Argentina: *Memoria y Balance*, 1973.

⁴⁷ Ídem.

⁴⁸ Sociedad Rural Argentina: *Memoria y Balance*, 1974.

“Los precios políticos, los impuestos exorbitantes, la amenaza a la propiedad y a la libre disponibilidad de las explotaciones, el intervencionismo estatal y la incongruente conducción de la economía en lo rural han llevado a los productores agropecuarios a una profunda desorientación que les impide mantener y sobre todo acrecentar el nivel de producción.”⁴⁹

En el mismo sentido, en agosto de 1974, calificaron a la política de fijación de precios como producto de un “intervencionismo estatal socializante”: “Nos encontramos actualmente soportando las consecuencias de un período influido profundamente por una política de precios negativa para el sector agropecuario y por un intervencionismo estatal socializante, más negativo todavía.”⁵⁰ Al conflicto por la fijación de precios se agregaba en ese momento el reclamo por el Anteproyecto de Ley Agraria, que contemplaba la expropiación de las “tierras ociosas”. En septiembre de 1974 caracterizaron un proyecto de Ley Agraria del gobierno de La Pampa, que respondía al espíritu del impulsado por Giberti, como “colectivizante” y “socializante”, producto de “ideologías extrañas al ser nacional”:

“Nos preocupa que el Gobierno de la Provincia de La Pampa esté considerando o por considerar un anteproyecto de Ley de Transformación Fundiaria elaborado en organismos de la Capital Federal y que no es ni más ni menos que una reproducción en términos generales del proyecto de Ley Agraria Nacional. Se expresa en el anteproyecto que la finalidad de la política agraria a cumplirse es la extinción de los latifundios y de los minifundios imperantes en la estructura agraria de la provincia [...] Teniendo el proyecto un objetivo claro y concreto como el de suprimir las deficiencias estructurales del agro pampeano no se admite más solución que la expropiación [...] Sobre la premisa sentada de que los adjudicatarios de las parcelas deberán compartir la actividad productiva con sus iguales, con sentido comunitario, se prevé la formación de Centros Agrarios Planificados en los que se realizará una agricultura asociativa, nucleada al-

49 Aguado, op. cit., p. 51.

50 Ídem, p. 60.

rededor de la escuela, la cooperativa y aun del centro comunal o recreativo o de esparcimiento. El Centro Agrario será el embrión de la futura comuna rural y servirá de aprendizaje y capacitación de los productores para el futuro gobierno comunal agrario. O sea un programa colectivizante.”⁵¹

La descripción es clara: CARBAP buscaba asimilar estos proyectos a la colectivización forzosa implementada por el stalinismo a fines de los ‘20. Esta referencia se hace explícita sobre el final del discurso, cuando compara la política agraria peronista con la de “los países líderes del marxismo, Rusia y China”. Que no sólo habría fracasado, sino que sería responsable, a su vez, de la escasez de alimentos que había en el mundo.⁵² El 13 de octubre volvieron a calificar a la Ley Agraria como “antiargentina” y “de tendencia marxista”:

“[El] anteproyecto de ley agraria [...] no ha hecho más que introducir una tremenda inquietud en el ánimo de los productores. Estamos en contra de ese anteproyecto. Y para manifestar nuestra oposición no necesitamos recurrir a la expresión de que sea esencialmente o de tendencia marxista, sino que lo hacemos porque creemos que es realmente un proyecto antiargentino ya que no responde a la realidad de lo que es nuestro campo y de lo que somos los productores.”⁵³

La acusación de “infiltrados marxistas” que se dejaba caer sobre el equipo económico de Gelbard no siempre era velada. En un telegrama remitido al presidente Perón, el 14 de junio de 1974, fueron bien explícitos:

“Denunciamos la grave infiltración ultra-izquierdista existente a nivel de la Secretaría de Agricultura y Ganadería [...] Denunciamos el proyecto de ley agraria que deliberadamente lesiona los legítimos intereses de todo productor

⁵¹ Ídem, p. 92.

⁵² Ídem., p. 93.

⁵³ Ídem, p. 114.

agropecuario [...] promoviendo con irresponsabilidad la desunión y quizás la violencia en la comunidad nacional.”⁵⁴

Además de acusarlo de responder a “ideologías extrañas”, Giberti fue acusado en reiteradas ocasiones de “desconocer la problemática del agro”. Por esta razón, SRA y CARBAP saludaron su alejamiento del cargo en octubre de 1974. Sin embargo, y a pesar de notorios cambios en los lineamientos políticos para el área, con la paralización de las medidas más controvertidas de la etapa Giberti, la tregua de la burguesía agraria duró poco. A comienzos del año 1975, SRA caracterizaba la situación en los siguientes términos:

“La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe claridad de objetivos. Un sistema económico equivocado basado en un creciente intervencionismo estatal ha demostrado su fracaso, ha llevado al empobrecimiento general y a una inflación nunca vivida, que llevan a la descomposición económico-social. Continuamos en el camino de la desorientación, inseguridad y desorden.”⁵⁵

Vemos aquí que los ejes de la crítica al gobierno en la nueva etapa han cambiado. Ya no se pone énfasis en las amenazas a la propiedad de la tierra y ahora el problema pasó a ser, por un lado, la política de precios agrarios, regulados por el estado a través de la JNC y de la JNG. A eso se refieren cuando critican el “intervencionismo estatal”. Por otro lado, comienza a aparecer una preocupación que excede los reclamos económicos: la crítica a la situación de “inseguridad y desorden”, provocada por la “subversión”. Este cambio en el eje de su discurso contra el gobierno fue de la mano con el paso a la acción, que se expresó en las movilizaciones,

⁵⁴ CARBAP: *Memoria y Balance 1973-1974* (Citado en Makler, op. cit.)

⁵⁵ Sociedad Rural Argentina: *Memoria y Balance*, 1975.

paros comerciales y lock outs de 1975 y 1976. Esta movilización, impulsada por diferentes fracciones de la burguesía, comenzó a trascender el reclamo meramente económico develando un interés político: provocar un golpe militar que “restituya el orden”.

Es que el “Pacto Social” comenzaba a enfrentar serios problemas, que se profundizaron hacia 1975. Por un lado, la situación internacional empeoró por el cierre de tradicionales mercados para los productos agropecuarios argentinos (particularmente, la Comunidad Económica Europea), y por la inflación de los precios internacionales causada por la “crisis del petróleo”. En el plano local, los controles de precios redundaron en el desabastecimiento y la creación de un mercado negro con precios más altos a los oficiales. A su vez, esta situación comenzó a dificultar la contención de los conflictos salariales, que potenciaban una crisis hegemónica que nunca se logró cerrar.

La ofensiva de la burguesía rural: enero-junio de 1975

La profundización de la crisis económica, política y social durante 1975 se vivió con gran agitación en el seno de la clase dominante. Durante ese año asistimos a una ofensiva del conjunto de la burguesía, y en particular de la burguesía agraria. Ya en los primeros meses vamos a presenciar una disposición al enfrentamiento con el gobierno, tanto en las bases como en las direcciones de las corporaciones. A fines de 1974 se constituyó el Comité de Acción Agropecuaria (CAA), un frente que agrupaba a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO). Durante enero y febrero el CAA expresó su descontento con la regulación de precios a través de las Juntas de Granos y Carnes. En un contexto inflacionario, las corporaciones reclamaban por precios que se desactualizaban día a día.

Los reclamos de la burguesía agraria encontraron expresión en la reunión que el ministro de Economía concedió a los integrantes del Comité de Acción Agropecuaria el martes 7 de enero. Como resultado de la reunión se informó que el gobierno reajustaría “a la brevedad” los precios de la hacienda “a fin de dar mayor productividad a los productores”. También se informó que ese año no se aplicaría el impuesto a la renta normal potencial de la tierra, que sería reemplazado por el “impuesto de emergencia” que rigió el año anterior.⁵⁶ Sin embargo, como lo hicieron saber en un comunicado, los miembros del CAA no salieron conformes. Destacaron que se valoraba la disposición del gobierno para dialogar, pero manifestaron su preocupación por “cuestiones fundamentales que quedan sin resolver”: “Las medidas anunciadas o prometidas no alcanzan a dar respuesta a las expectativas

⁵⁶ *La Nación*, 8/1/75.

y necesidades de los productores. Los precios bajísimos que recibe el agro constituyen la cuestión vital que se debe encarar de inmediato”. Se señaló además que, de no mediar solución a los problemas, el agro argentino entraría en un proceso de descapitalización y retroceso de la producción.⁵⁷

En ese contexto, la dirigencia de CARBAP intentó ir creando un clima en favor del paro nacional agropecuario. Luego de la reunión con las autoridades, emitió un comunicado dirigido a sus afiliados que sostenía:

“Sobre la base de promesas, se pretende consolidar la enorme frustración que soporta el campo y que pronto gravitará en todo el país. Sepan entonces los productores agropecuarios que sólo les esperan más trabajo, más sacrificios económicos y una intensa campaña de esclarecimiento y de acción gremial en defensa de sus justos derechos y en busca de la justicia económica que el campo merece”.⁵⁸

A comienzos de 1975 también presenciamos una gran conflictividad en diferentes provincias, que se expresó en una importante cantidad de medidas de fuerza, desde paros comerciales hasta movilizaciones o cortes de rutas. El 13 de enero los productores frutícolas de Neuquén fueron al paro comercial disconformes con los precios de las manzanas. La medida se garantizó recurriendo a bloqueos en las rutas. El 21 de enero productores de manzanas de Mendoza también reclamaron que el gobierno garantice la rentabilidad de sus explotaciones, y se movilaron realizando cortes de ruta.

La inquietud de los productores agrarios también alcanzó a la Federación Agraria, que incluso apoyó algunas de las medidas de fuerza de alcance regional o provincial que se realizaron.

⁵⁷ *La Nación*, 10/1/75.

⁵⁸ *La Nación*, 11/1/75.

Durante la segunda semana de enero la entidad realizó una serie de reuniones zonales, en las que se discutió un paro ganadero por 15 días, reclamando que se mejoren los precios, que apenas llegaban a cubrir, según denunciaron, un 50 ó 60% de los costos.⁵⁹ Finalmente, el consejo directivo de FAA decidió no convocar a la medida, aunque posteriormente apoyó el paro dispuesto por una de sus entidades de base.

Atento a los reclamos, el gobierno dio a conocer nuevos precios para la carne el 15 de enero. Sin embargo, la medida no fue bien recibida por los patrones: tanto el CAA como la FAA señalaron mediante comunicados que el aumento era insuficiente. El sábado 18 de enero CARBAP realizó seis asambleas zonales para discutir el plan de acción frente a la situación del agro. La asamblea de Bahía Blanca fue presidida por Jorge Aguado, quien señaló que los productores debían ser más categóricos en la defensa de sus intereses y que correspondía aplicar el estado de alerta económico agropecuario en todo el país. La asamblea expresó su apoyo al plan de acción determinado por CARBAP y CRA. Al término de la reunión la entidad dio a conocer una declaración que disponía la movilización a las municipalidades de la zona sudoeste para solicitar que no se modifiquen los montos impositivos del año anterior, y en el caso de la producción lanera, que los montos disminuyan “sustancialmente”.⁶⁰

El precio de la carne fue el principal reclamo que llevó el presidente de la Federación Agraria, Humberto Volando, a la reunión que mantuvo con el ministro de Economía el 23 de enero. Al finalizar el encuentro, Volando expresó su disconformidad: “en general no salimos satisfechos de la reunión y ahora nos mantendremos

⁵⁹ *La Nación*, 12/3/75.

⁶⁰ *La Nación*, 19 y 20/1/75.

a la expectativa de los resultados que puedan surgir”.⁶¹ Pocos días después comenzaron a circular rumores sobre la realización de un paro comercial ganadero entre el 1º y el 16 de febrero. El Ministerio de Economía difundió un comunicado en donde advertía que se aplicaría, de concretarse el paro, la Ley de Abastecimiento y la Ley de Seguridad Nacional. FAA sostuvo que no había convocado el paro, pero que eso “no implica que las entidades que coordinaron la medida de fuerza no cuenten con su amplio apoyo y solidaridad”. En un comunicado difundido el miércoles 29, FAA reconoció que la decisión de ir al paro había sido tomada por algunas de sus entidades de base y con autonomía de la dirección de FAA (entre ellas, Agricultores Federados Argentinos). Las entidades que conformaban el CAA señalaron que a pesar de los momentos difíciles que sufrían los productores, ellos no avalaban ni participaban de la medida. En esa línea, el presidente de CARBAP señaló que la convocatoria respondía a “los intereses de sectores no institucionalizados que tratan de obtener un crédito político gremial aprovechando la real inquietud existente entre los productores de todas las actividades agropecuarias”.⁶² Como veremos, las diferencias no obedecían a apreciaciones distintas de la situación o sobre el curso de acción a tomar, sino que parecen responder a una disputa por la dirección del movimiento agrario opositor que se estaba gestando.

El sábado primero de febrero se realizó una asamblea general de Agricultores Federados Argentinos (AFA), a la cual asistió el presidente de FAA. Allí se confirmó el paro comercial ganadero por 15 días motivado en la falta de respuesta a los reclamos y en la “desastrosa situación de las pequeñas y medianas explotaciones de todo el país”. En la asamblea, el presidente de AFA reclamó

⁶¹ *La Nación*, 24/1/75.

⁶² *La Nación*, 31/1 y 1/2/75.

precios justos para todas las producciones agrarias, especialmente para carnes y lanas. En su discurso, el presidente de Federación Agraria sostuvo que ciertas cooperativas habían equivocado el rumbo al intentar tomar por su cuenta medidas de acción gremial, y que de persistir en esa línea se corría el riesgo de quedarse sin cooperativas. Esta advertencia parece una condena a las entidades que convocaron al paro, pero también fue crítico hacia el gobierno peronista. Sostuvo que a pesar de las expectativas favorables que se abrieron con el nuevo gobierno, y a pesar de que el agro realizó los esfuerzos solicitados, luego de 20 meses:

“Descubrimos que el colchón no tiene lana. Con los aumentos que nos han dado para la carne consideran que ya estamos servidos por cinco o seis meses, pero al primero de febrero ya estamos en la misma situación que lo estábamos en diciembre pasado. Si para marzo no tenemos nuevas mejoras no podremos mantenernos.”⁶³

Luego afirmó, avalando la medida tomada por sus representados, que estaban en un “momento de lucha”, donde no cabían “las dudas ni la cobardía”, donde no se podía mirar hacia atrás para ver cuantos eran los que seguían a los “abanderados”, sino que había que marchar aún siendo pocos. “Luego vendrán los otros, y con el tiempo, el país agradecerá esta actitud. Es hora de pocas palabras y muchos hechos”. En un comunicado del lunes 3, FAA explicitaba su apoyo “firme y solidario” a la medida, y reafirmaba su continuidad a pesar de la oposición del CAA:

“Pese a las interferencias provocadas por entidades vinculadas a la ganadería, interesadas en frenar y confundir las iniciativas de los pequeños y medianos productores, y de las advertencias oficiales, la suspensión de envíos de hacienda a mercado continuará tal como estaba previsto”.⁶⁴

63 *La Nación*, 2/2/75.

64 *La Nación*, 4/2/75.

Un comunicado de FAA del miércoles 5 señaló que se habían registrado disminuciones en las entradas de animales de aproximadamente un 90% en Chaco, un 75% en Córdoba y Santa Fe, y de un 40% en Buenos Aires y La Pampa.⁶⁵ Los últimos días del paro se registraron amenazas para que los productores no boicoteen la medida llevando sus animales al mercado y la policía realizó operativos para evitar la “violencia”.⁶⁶ Un balance hecho por *La Nación* señaló que “si bien [el paro] no adquirió relevancia, provocó algunas perturbaciones en algunos partidos de Córdoba y Santa Fe”.⁶⁷

La Federación Agraria también participó de un paro comercial que afectó a Chaco y Santa Fe. El sábado 18 de enero una asamblea de productores resolvió no entregar girasol a la JNG, en reclamo por la fijación de precios supuestamente inferiores al precio de producción. De la reunión participaron delegados de Unión de Cooperativas Agrícolas Limitadas (UCAL), Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA), pertenecientes a CONINAGRO, junto a delegados de la FAA, Federación Económica y las Ligas Agrarias de Chaco y Formosa.⁶⁸ Durante esa semana la medida de fuerza se garantizó recurriendo a la acción directa:

⁶⁵ *La Nación*, 6/2/75.

⁶⁶ *La Nación*, 18/2/75.

⁶⁷ *La Nación*, 27/2/75.

⁶⁸ *La Nación*, 19 y 21/1/75. FACA, integrada a CONINAGRO, es una cooperativa que surge como desprendimiento de la FAA, en una división de las tareas cooperativas y gremiales. Por esa razón, se considera que la representación gremial de FACA la ejercía en la época FAA. La relación ha sido tan estrecha que hasta los '70, los presidentes de ambas entidades siempre fueron la misma persona (Ver Makler, op. cit.)

“Las rutas están desiertas y los camiones detenidos y vacíos no solamente en los pueblos y en las chacras, sino en la vera de las rutas, ante el temor de que hayan arrojado clavos ‘miguelitos’ o que haya represalias [...] En la localidad de Tres Isletas, un camión Fiat 619 [...] cargado con girasol, fue incendiado y las pérdidas se estimaron en la suma de 240.000 pesos. Versiones de distintas fuentes indican que por lo menos otros tres vehículos sufrieron daños [...]”⁶⁹

Luego de las gestiones de las autoridades provinciales, el ministro de Economía de la Nación anunció que los precios serían reajustados. A pesar de la respuesta favorable al reclamo, el Comité Regional de Defensa del Precio del Girasol se negó a terminar con la medida de fuerza, al considerar las declaraciones del funcionario nacional como “anodinas y sin contenido”. En apoyo al paro, los comerciantes de la región realizaron un apagón.

La FAA también aparece vinculada al paro comercial por 24 horas y la movilización dispuesta por los productores frutícolas de Río Negro y Neuquén el 18 de febrero. Entre otras entidades, convocaron la FACA y la Confederación General Económica (CGE) de Río Negro y Neuquén.⁷⁰ Como hemos visto, FACA estuvo históricamente ligada a la Federación Agraria, quien a su vez formaba parte de la CGE.

Mientras tanto, las corporaciones nucleadas en el Comité de Acción Agropecuaria mantuvieron una presión permanente sobre las autoridades nacionales. El 31 de enero el CAA reclamó medidas de apoyo para los productores de peras y manzanas, y señaló que de no mejorar el precio había posibilidades de que no se levante la cosecha. También reclamó mejoras en los precios de las lanas, frente a la crisis del sector. El 4 de febrero CARCLO (Confederación de Asociaciones Rurales del Centro y Litoral Oeste) se pronunció contra la política de precios para carnes, granos y lanas, y declaró

⁶⁹ *La Nación*, 25/1/75.

⁷⁰ *La Nación*, 18/2/75.

el “estado de alerta económico”, recomendando no comprar más insumos que los imprescindibles y no solicitar créditos bancarios. El viernes 7 el CAA envió una nota al Ministerio de Economía en el que se reclama el reajuste de los precios de todos los granos para la cosecha gruesa 74/75. El sábado 8 CARBAP envió notas a los gobernadores de Buenos Aires y La Pampa solicitando su apoyo en los reclamos frente al gobierno nacional. Una solicitada firmada por el Comité de Defensa de la Producción Lechera (CODEPROLE), que apareció el domingo 9, reclamó por la homologación del convenio firmado entre tamberos e industriales que disponía el aumento del precio de la leche, frenado desde hacía más de un mes por el impacto que tendría sobre los precios al consumidor. También se pronunció la Confederación de Asociaciones Rurales de la Zona Rosario (CARZOR), reclamando la adecuación paulatina de los precios de los cereales a los internacionales, la liberación del precio de la hacienda vacuna, la homologación del convenio por el precio de la leche, el congelamiento de los impuestos municipales y provinciales, a los que consideraron “arbitrarios”, y la derogación del impuesto de emergencia a la tierra, al que proponían cambiar por un impuesto sobre las ganancias.⁷¹

El gobierno respondió a las presiones concediendo algunos de los reclamos. El 31 de enero el Ministerio de Economía fijó un nuevo precio para el girasol, en un intento por destrabar el conflicto en Chaco y Santa Fe. El martes 4 de febrero el gobierno anunció el aumento de los montos destinados a créditos para el sector rural y la baja de los intereses.

Sin embargo, los conflictos seguían estallando por todos lados. El lunes 10 de febrero la Federación de Instituciones Agropecuarias

⁷¹ CARCLO y CARZOR son entidades de segundo grado integradas a CRA, y por lo tanto, miembros del CAA. El CODEPROLE estaba constituido, entre otras organizaciones, por SRA y CRA.

de Santa Cruz realizó una asamblea extraordinaria para tratar la crisis del sector lanero. Allí se señaló que “se agotó el diálogo”, y se votaron una serie de medidas de fuerza, como el no pago de impuestos nacionales, provinciales y municipales. También se aprobaron otras medidas, a tomarse “si las circunstancias lo indican”: “cierre de la ruta N° 3, con la clausura de los puentes sobre los ríos Deseado, Santa Cruz y Gallegos; cierre de comercios, toma de aeródromos y hasta el gasoducto que conduce el fluido al norte del país.”⁷² El lunes 17 los productores laneros de Santa Cruz hicieron efectiva la amenaza con un paro de actividades por 24 horas, y dispusieron el bloqueo de la ruta nacional N° 3 y del aeropuerto de Santa Cruz, entre otras medidas. Se llegó al paro, según explicaron: “como consecuencia del hermetismo y absoluto desinterés de las autoridades nacionales ante la tremenda crisis económica que vive el agro patagónico”. Las cooperativas agrarias y la Cámara de Comercio manifestaron su apoyo. Se realizaron bloqueos en varios puntos de la ruta 3, y como consecuencia de ellos se detuvo a seis manifestantes en un corte sobre el Puente Piedrabuena. El martes 18 continuaron las detenciones: 27 personas fueron arrestadas, casi todas en sus domicilios, por los cortes de la ruta 3 y de la ruta provincial 521 del día anterior. Entre ellos se encontraban el presidente y el vicepresidente de la Federación de Instituciones Agrarias de Santa Cruz, y el presidente y vicepresidente de la Sociedad Rural de Puerto San Julián.⁷³ Un día después, el gobierno anunciaba el aumento temporal de los reembolsos a la exportación de lanas. Mientras tanto, seguían detenidos los manifestantes y la UCR emitía un comunicado mostrando preocupación por la situación.

El sábado 22 de febrero se reunió en Coronel Brandsen la

⁷² *La Nación*, 11/2/75.

⁷³ *La Nación*, 19/2/75.

asamblea nacional convocada por el CODEPROLE. Fue presidida por el delegado de la SRA, Guillermo Alchourron, y asistieron representantes de CRA, Unión General de Tamberos, Asociación de Criadores de Holando Argentino (ACHA) y Sociedad Rural de Coronel Brandsen. Se decidió suspender las entregas de leche del 12 al 17 de marzo. Exigieron un nuevo precio para el producto y denunciaron el convenio firmado en diciembre (hasta ese momento reclamaban su homologación), porque el valor acordado ya estaba atrasado. Ese mismo día se realizó una reunión de productores pertenecientes a la Federación de Centros Tamberos de Santa Fe. Pidieron el ajuste del precio al nivel establecido en el convenio firmado en diciembre, y convocaron a un paro para el 26 y el 27 de febrero ante la falta de respuestas. La medida fue impulsada también por la Coordinadora Nacional de Ligas y Movimientos Agrarios, y afectó a las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Formosa. En Córdoba la organización convocante fue la Federación de Ligas Tamberas, y allí las principales plantas procesadoras no recibieron el producto. En esa provincia se produjo la detención de cinco personas que interceptaron un camión que se disponía a ingresar a la planta de Sancor, y volcaron su contenido en la ruta. La Federación de Centros Tamberos de Santa Fe, que había llamado al paro, levantó su convocatoria a última hora del martes frente al anuncio oficial de homologación del convenio de diciembre.⁷⁴ El paro fue sin embargo sostenido, como vimos, por otras organizaciones. Por su parte, el CODEPROLE también anunció la suspensión del paro programado para el 12 de marzo. No se explicitaron los motivos, pero sí que continuarían con las gestiones para lograr un aumento del precio de la leche y la convocatoria a una asamblea para el 5 de abril.⁷⁵

⁷⁴ *La Nación*, 23 y 27/2/75.

⁷⁵ *La Nación*, 8/3/75.

Como podemos observar, se vivía un alto grado de agitación en las filas de la burguesía agraria. Los dirigentes nacionales de las corporaciones agrarias, nucleados en el CAA, se expresaron en comunicados y discursos que denunciaban la política oficial, y en varias asambleas en las que las bases hicieron sentir su descontento. La falta de respuestas que conformaran a las corporaciones llevó a una escalada discursiva que terminó en la realización de un paro comercial agrario por 24 horas, el 3 de marzo. Este hecho marcó un quiebre en el ciclo de protestas, ya que a partir de ese momento empezaron a declinar las medidas de alcance regional y el descontento de los productores comenzó a expresarse en un ciclo de paros nacionales.

El paro nacional se preparó desde la semana previa. El 28 de febrero se realizaron cinco asambleas convocadas por el CAA, con una presencia “multitudinaria de productores de todos los puntos del país”. Allí se dispuso, “por aclamación”, realizar un paro general de actividades comerciales agropecuarias el 3 de marzo. La FAA, que no participó de la medida de protesta, emitió una declaración que objetó la política agropecuaria del gobierno y llamó a “una rápida ejecución de los objetivos contenidos en el Acta de Compromiso del Estado y los Productores” firmada en 1973.

El gobierno respondió a la convocatoria, en primer lugar, advirtiendo a CONINAGRO con sancionarla si participaba del paro, ya que ese tipo de convocatoria “excede su objetivo social”. CARBAP respondió algunos días más tarde señalando que la advertencia constituía una “limitación a su libertad para exponer y defender” sus derechos.⁷⁶ Según los organizadores, la actividad comercial durante la jornada de protesta fue “casi nula”, y estimaron la adhesión en un 90%. En Buenos Aires se registraron incidentes que afectaron la existencia de leche, ya que

⁷⁶ *La Nación*, 24/3/75.

“aún cuando la policía no confirmó los hechos, se supo que fueron volcados por individuos desconocidos varios camiones lecheros y en otros casos se impidió que los vehículos alzaran tarros con el producto en granjas de la zona sur”. En Santa Rosa, La Pampa, cerraron durante todo el día “algo más de 30 comercios”, y casi todos realizaron un paro de actividades entre las 18 y las 20 horas, adhiriendo a la medida en solidaridad convocada por la Federación Económica Pampeana y por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Rosa. En General Pico la industria ligada al agro también adhirió al paro, al igual que la UCR provincial, el Movimiento Federalista Pampeano y Fuerza Federalista Popular.⁷⁷

El jueves 6 de marzo el Ministerio de Economía anunció nuevos precios para la cosecha gruesa. En el discurso, el ministro se refirió a la protesta agraria: declaró que en la política gubernamental “no hay lugar para los egoísmos sectoriales” e indicó que las corporaciones agrarias habían roto el diálogo. Los nuevos precios no conformaron las aspiraciones de los productores: la crónica informó que distintas entidades señalaron que los ajustes de precios no devolvían la rentabilidad de octubre de 1973. Un dirigente de CARBAP expresó: “El Estado quiere demostrar que es bueno, pero no logra convencer a nadie”. El tiempo no aflojó la tensión existente entre el gobierno y las entidades. A la semana de concretado el paro nacional, el secretario de Comercio acusó a los productores de subvertir el orden:

“El país está en guerra. Está siendo castigado por una ola subversiva en la cual están comprendidas actitudes o métodos del sector agropecuario. Se magnifican los pedidos y hay gente que está siendo llevada erróneamente; gente que está completamente engañada”.⁷⁸

⁷⁷ *La Nación*, 8/3/75.

⁷⁸ *La Nación*, 15/3/75.

Por otro lado, en una entrevista de dirigentes del CAA con el secretario de Agricultura, el funcionario expresó su rechazo al paro del 3 de marzo y señaló que “algunos sectores” no se movían “en un plano exclusivamente gremial” y que actuaban “con fines políticos”. Los dirigentes del CAA respondieron que el paro “no importó una actitud disociadora o subversiva, ni fue producto de la irritación del momento”. Algunos días después SRA respondió a las objeciones de distintos funcionarios públicos señalando que el paro fue “una manera ordenada y respetuosa de expresarse, ya que los productores agropecuarios y sus entidades representativas son elementos de orden, de trabajo y de respeto por las instituciones nacionales”. La nota recalcó a su vez que, por la modalidad del paro, el conjunto de la población no se vio afectada, ya que no hubo desabastecimiento. Sobre la “subversión” apuntó: “Nuestra entidad está tan preocupada como el Gobierno por la necesidad de terminar con ideologías y actitudes contrarias al sentir argentino y a la esencia nacional”.⁷⁹ Una semana después Jorge Aguado pronunció un discurso en la cena por el día de la Agronomía Rural en el que volvió sobre el tema. Allí señaló que la acción gremial de su entidad estaba guiada por una sincera actitud de defensa de los derechos y reclamos del campo, y no por “intereses ocultos ni oscuros designios disociadores o subversivos”.⁸⁰

El CAA intentó seguir con sus reclamos por vía institucional. Exigieron una reunión con el secretario de Agricultura, pero el pedido de audiencia nunca fue contestado. Posteriormente enviaron al funcionario un memorial con los reclamos que pensaban presentar en la audiencia que solicitaron. Además de los reclamos que se venían realizando, el CAA protestó por haber

⁷⁹ *La Nación*, 21/3/75.

⁸⁰ *La Nación*, 24/3/75.

sido “relegados” en la consulta de las medidas que los afectan.⁸¹ La ausencia de respuestas concretas del gobierno fue tensando la situación. Durante el mes de abril asistimos a una presión fuerte de parte de algunas entidades, en particular de CARBAP y algunos sectores dentro de CRA, para convocar a un nuevo paro. El 18 de abril se dio a conocer un comunicado de CRA sobre la crisis económica y la situación del campo. Señalaba que:

“Desde largos años atrás se ha seguido una línea económica basada en prejuicios, divorciada de la realidad, que pretende desconocer la verdadera fuente de recursos del país [...] Esta política tomó especial énfasis durante los últimos dos años, al suprimirse la existencia del mercado e impulsar un acelerado proceso de estatización de las actividades [...]

“Los valores de la producción fueron distribuidos entre el Estado y los productores, quedándose el primero con la gran parte. De modo que a través de cambios diferenciales, retención a las exportaciones, impuestos, etc., el capital nacional va siendo rápidamente transferido al Estado [...] La actividad privada se va quedando sin recursos económicos ni financieros. Hay dos caminos para llevarnos a la socialización: la anulación del régimen de propiedad o el apoderamiento paulatino de todos los recursos financieros por parte del Estado [...]

“Las consecuencias de esta política errónea están claramente a la vista: desabastecimiento extremo de insumos para la producción e industria y bienes de consumo familiar; consolidación de ‘mercado negro’ [...]; agotamiento de divisas; déficit presupuestario exorbitante, emisión monetaria sin freno y, como corolario: clima de inseguridad económica, política, social y personal, provocada por la angustia general, que no beneficia a nadie, sino a los intereses disolventes.”⁸²

Señalaba también que las entidades agrarias habían reclamado y solicitado audiencias sin recibir respuestas. Que el paro del 3 de marzo debió funcionar como un llamado de atención y no lo hizo. A los pocos días se difundió la noticia de que CRA estaría dispuesta a convocar a un nuevo paro en mayo. CARTEZ (Confederación

⁸¹ *La Nación*, 27/3/75.

⁸² *La Nación*, 18/4/75.

de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y la Comisión de Enlace de Sociedades Rurales de La Pampa salieron a respaldar la decisión de CRA.⁸³

A comienzos de abril el CAA remitió un telegrama a la presidenta reclamando una audiencia para discutir la “grave situación que atraviesa el agro”, buscando un canal oficial para expresar su descontento.⁸⁴ Días después la presidenta respondió negativamente por encontrarse con la “agenda completa”.⁸⁵ La expectativa recayó entonces sobre el Comité, esperando su respuesta al desaire presidencial. Pero la negativa de algunas de las organizaciones que lo conformaba a responder con un nuevo paro, hizo estallar las contradicciones internas del CAA. El martes 22, Jorge Aguado renunció al Comité de Acción Agropecuario, donde era representante por CRA. Los motivos aducidos fueron el no sentirse “integrado en este momento” y no compartir “modos de acción que no siento”. Hizo referencia a “la falta de solidaridad de las restantes entidades [...] con el plan de acción propuesto” por CRA, es decir, a la negativa de estas a acompañar un nuevo paro. Manifestó que esa falta de solidaridad implicaba una “intención de demorar la toma de decisiones y llevar a la larga la acción del Comité”. En referencia a los motivos esgrimidos por SRA y CONINAGRO para no ir a un nuevo paro, señaló:

“¿Por qué no es el momento oportuno? ¿Para quién no es el momento oportuno: para el productor, para las entidades o para los dirigentes? ¿Los otros problemas que existen en el país se dejan afectar por la oportunidad? Creo que cuando la acción gremial es clara nunca se la debe realizar por oportunidad sino por necesidad y, por lo tanto, el momento ‘oportuno’ de la acción en defensa del campo surge de una necesidad originada en la situación de crisis que sufre

⁸³ *La Nación*, 21 y 22/4/75.

⁸⁴ *La Nación*, 4/4/75.

⁸⁵ *La Nación*, 19/4/75.

el sector agropecuario y de la cual todos somos concientes.”⁸⁶

Inmediatamente la dirigencia de SRA se pronunció sobre la renuncia de Aguado al CAA. Sostuvo que se debía a un problema interno de CRA, y aclaró que su entidad no descartaba “ningún medio de acción en defensa de los productores, pero entiende que ello se debe considerar teniendo en cuenta la coincidencia de las tres entidades que forman el Comité, cuestión vital para el éxito de cualquier resolución que se adopte”. Criticó a su vez “la intolerancia, el apresuramiento y el afán de notoriedad”, a una obvia referencia a Aguado, que son “malos consejeros para el entendimiento entre las entidades”.⁸⁷

Durante los primeros días de mayo se produjo un acercamiento entre CRA y FAA, que determinó la convocatoria conjunta a un paro comercial ganadero por 3 días para el 19 de mayo. Este hecho terminó de sellar la liquidación del CAA, no sólo por la negativa de SRA y CONINAGRO a acompañar a CRA en un nuevo paro, sino también por el acercamiento de esta última a una entidad que había apoyado la gestión gubernamental hasta pocos meses antes. Sin embargo, la negativa a impulsar el paro no implicó que los dirigentes de SRA se bajaran de sus reclamos. Así lo testimonia un documento de la entidad difundido pocos días antes del comienzo de la nueva medida de fuerza:

“La gestión económica llevada a cabo desde 1973 hasta octubre de 1974, en función de una estrategia determinada, orquestó medidas que tarde o temprano llevarían a la postración total del sector agropecuario. Un proyecto de ley agraria de neto corte marxista, una presión impositiva agobiante, una política de precios equivocada y sistemas de comercialización totalmente ineficaces impidieron que el agro y el país pudiera aprovechar las extraordinarias posi-

⁸⁶ *La Nación*, 23/4/75.

⁸⁷ *La Nación*, 24/4/75.

bilidades que se presentaron durante los años 1973 y 1974 en los mercados exteriores. Conscientemente se crearon las condiciones para que, al deterioro de uno de los factores básicos de la economía, sucediera el deterioro de todas las manifestaciones de la vida del país [...] El cambio de equipo económico provocó una expectativa favorable, dándose algunos pasos positivos para corregir errores cometidos. Pero lamentamos tener que señalar que, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por las entidades para informar ampliamente sobre la grave situación actual del sector, la política que se siguió aplicando no conformó las expectativas creadas y no fue suficiente y rápida respuesta a las necesidades que el agro tiene para poder modificar su grave panorama económico.”⁸⁸

La actitud fue valorada por los dirigentes de CARBAP como un respaldo a la medida de fuerza adoptada, diferenciándola de la posición asumida por CONINAGRO.⁸⁹ Sobre los motivos para no concurrir al paro, Celedonio Pereda, titular de SRA, señaló:

“CRA, una de las entidades miembros del Comité de Acción Agropecuaria decidió decretar un paro de actividades, al que no se adhirió ni la Sociedad Rural Argentina ni CONINAGRO. Nuestra entidad considera que en las difícilísimas circunstancias sociales, políticas y económicas por las cuales atraviesa el país es oportuno que los dirigentes, en este caso los agropecuarios, consideren con toda prudencia y profundidad la política por seguir. Nosotros no estamos contra un paro, pero creemos que este debe ser realizado en oportunidad y ciertas condiciones que todavía no se han presentado, según nuestro entender.”⁹⁰

Evidentemente, SRA consideraba que continuar con un ciclo de paros nacionales agrarios llevaría a una desestabilización del gobierno obligando a un recambio político. Aunque, a la vista de lo sucedido en los meses siguientes, el golpe militar aparece como el objetivo estratégico de la acción de esta corporación, se impuso una diferencia táctica que la alejó de CARBAP: todavía no

⁸⁸ *La Nación*, 15/5/75.

⁸⁹ *La Nación*, 19/5/75.

⁹⁰ *La Nación*, 17/5/75.

era el momento. Las tareas que recaerían sobre el futuro gobierno militar demandaban, por lo menos, el apoyo del conjunto de la clase dominante, y el respaldo de buena parte de la pequeña burguesía. Para eso era necesario profundizar el desgaste del gobierno, esperando que se produjera el alejamiento paulatino de las fracciones de la clase dominante que aún lo apoyaban.

Un día antes del inicio del paro convocado por CRA y FAA se realizaron asambleas en varias localidades ratificando el apoyo a la medida. Una asamblea en Darregueira, que contó con la presencia de 600 productores, resolvió que, en esa región, la modalidad del paro sería total, es decir, no sólo comercial sino también tranqueras adentro. La asamblea tuvo como orador destacado a Jorge Aguado, quien en su discurso criticó cierto estilo de dirigencia: “Más que a decir, venimos a oír al productor agropecuario. Ha terminado la época en que los dirigentes, encerrados en Buenos Aires, decían representar a los productores”. Sobre su alejamiento del CAA señaló: “había pasado mucho tiempo de diálogo de sordos sin que se tomaran medidas concretas.” Sin embargo, diferenció las actitudes de CONINAGRO y de SRA. “La Sociedad Rural Argentina no apoya el paro, pero publica solicitadas y declaraciones exponiendo razones, que son las que al fin lo justifican.” En cambio, CONINAGRO publicó una solicitada explicitando que no apoyaría el paro y deslizado veladas acusaciones sobre quienes lo impulsaban. En referencia a dicha solicitada, Aguado afirmó: “estamos alejados de todo tipo de ideologías extrañas. Como argentinos solo nos limitamos a defender al país [...] Es fácil hacer gremialismo presentando notas y no cuando hay que arriesgar hasta lo que tenemos en los bolsillos”. La asamblea emitió un documento apoyando la actuación de CARBAP. También se otorgó mandato a la mesa directiva de CARBAP para que proponga extender el paro por 10 días de mantenerse el gobierno en la misma

posición. Por último, criticó la actitud “rayana en la cobardía” de las instituciones ligadas al agro que no apoyaron el paro.⁹¹

La medida de fuerza finalmente se cumplió con un alto nivel de acatamiento, disminuyendo notablemente la entrada de hacienda en los mercados. Adhirieron en varias localidades las firmas martilleras, los consignatarios de hacienda y acopiadores de grano, y en algunos lugares el comercio cerró sus puertas en solidaridad.⁹²

A pesar de su cautela, SRA se sumó pocos días después a un nuevo paro comercial decretado por el Comité de Defensa de la Producción Lechera (CODEPROLE), que integraba junto a CRA. El paro comercial se realizó entre el 4 y el 6 de junio, con un alto acatamiento, y el reclamo pasó por la homologación de los nuevos precios acordados entre industriales y tamberos.⁹³ Se sumaron a la medida de fuerza FAA y algunas cooperativas.⁹⁴

⁹¹ *La Nación*, 16/5/75.

⁹² *La Nación*, 21 y 22/5/75.

⁹³ *La Nación*, 25/5/75, 27/5/75 y 5/6/75.

⁹⁴ *La Nación*, 5/6/75.

El Rodrigazo como punto de inflexión

El gobierno de María Estela Martínez de Perón realizó un violento giro en materia económica con el nombramiento de Celestino Rodrigo como ministro, que asumió el 2 de junio de 1975. El programa que Rodrigo intentó aplicar consistía en un brusco descenso de los salarios reales, que se constituiría en la base de un relanzamiento de la acumulación de capital por la vía de un gigantesco aumento de la explotación. En términos generales, el plan se basó en una importante devaluación de la moneda y un fuerte aumento de precios y tarifas, que no serían acompañados por aumentos salariales, a los que el gobierno fijó un tope menor al aumento de precios. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar paros parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaron la conducción de la burocracia sindical, en una escalada que amenazaba las propias bases de la dominación social.⁹⁵

El rechazo inmediato de las nuevas medidas por parte de la CGT no encontró igual actitud en la CGE. La misma se mostró reservada ante el proceso en marcha, aunque mantenía reuniones con las autoridades económicas y gremiales. Su argumento para tal silencio era que aguardaban a que se terminaran de definir y difundir todos los puntos del programa económico para pronunciar su opinión. Sin embargo, de los sucesos posteriores se deduce que

⁹⁵ Lobbe, Héctor: *La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976)*, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009; Kandel, Pablo y Mario Monteverde: *Entorno y caída*, Editorial Planeta, Buenos Aires, 1976.

la conducción de la CGE temía las reacciones internas que podría desatar cualquier pronunciamiento.

Recién un mes después de los anuncios de Rodrigo, la CGE reclamó la necesidad de implementar medidas financieras que permitieran a las empresas enfrentar la elevación de costos y la recesión. Su presidente, Julio Broner, salió a discutir, a su vez, el “diagnóstico” oficial que justificaba el plan de shock. Declaró en conferencia de prensa que la situación no tenía los tintes dramáticos que se esgrimían desde la conducción económica. Señaló que la situación no era peor que la de 1973, y sostuvo que el diagnóstico dramático efectuado por Celestino Rodrigo tenía por objetivo justificar el “antipopular” plan económico puesto en marcha.⁹⁶ La ofensiva de la CGE contra Rodrigo suscitó la reacción de los antiguos miembros de la UIA que dominaban la CINA. Así describía la situación *Cronista Comercial*:

“Se dirime hoy el nuevo pleito surgido al interior de la CINA entre sectores vinculados a la UIA y otros a la CGE. Es en relación a los dichos vertidos por el titular de la CGE. Los empresarios no comparten las opiniones de Broner y piden ser consultados antes de expedirse sobre cuestiones económicas. Sus diferencias quedaron plasmadas en un borrador de documento, surgido de una reunión presidida por el vicepresidente de CINA, Eduardo Braun Cantilo”.⁹⁷

Ese documento, citado por el periódico, señalaría que:

“Los sectores que confluyeron en CINA no lo hicieron para ponerse al servicio de ideologías o de hombres. No aceptamos estar al servicio de nadie y exigimos que esas instituciones representativas hagan oír sus reclamos. La unidad sólo podrá mantenerse si la conducción de la institución es fiel voz representativa de las aspiraciones comunes y legítimos derechos empresarios”.⁹⁸

⁹⁶ *Cronista Comercial*, 15 de julio de 1975.

⁹⁷ Ídem.

⁹⁸ Ídem.

Por su parte, los sectores vinculados a la ex CGI acusaron a los ex UIA de ir “en desmedro de los postulados históricos de la entidad [la política concertada] para de ese modo, apoyar el plan Rodrigo”. En medio de la polémica, el ex ministro Gelbard salió a respaldar las declaraciones de Julio Broner: “Nos quieren vender un caos que no existe”.⁹⁹

Un comunicado de la CINA reiteraba su posición “catastrofista”, afín al diagnóstico de Rodrigo, que constituía un claro desafío a la dirección nacional de la CGE. Allí calificaron de “gravísima” la situación de la industria, con una virtual cesación de pagos, paralización de inversiones y caída en la productividad global del país.

“La elevación de los costos laborales en un 160%, la de los insumos en un orden similar, han colocado a la industria en una situación financiera dramática. Sin acceso al crédito internacional, no encuentra medios alternativos para evitar la cesación de pagos. Frente ante esta situación y en la medida en que no se tomen acciones de gobierno para subsanarla el resultado será inexorable [...] Las industrias no podrán pagar sueldos y jornales con las consiguientes perturbaciones sociales de las cuáles, desde ya, el sector deslinda toda responsabilidad [Es necesaria una] política de precios [...] para resolver los problemas de fondo, ya que otras soluciones serán meros paliativos que prolongarán indefinidamente la situación.”¹⁰⁰

Un dirigente de esta entidad, José Beltrán, iba aún más lejos, al plantear claramente la responsabilidad de la dirección de la CGE por la situación caótica que se vivía:

“No se puede dejar de señalar el fracaso de la política de concertación ante el peligro de seguir con el desabastecimiento, el mercado negro, la presión impositiva, el deterioro del salario real y la falta de producción que desde hace

99 Ídem.

100 *Cronista Comercial*, 17/7/75.

dos años impuso la cúpula de la CGE”.¹⁰¹

Para la misma fecha, representantes de la CINA se reunieron con Celestino Rodrigo. Exigieron ayuda financiera para el sector privado y se pronunciaron por la “necesidad de aplicar la anunciada política de shock con cierto gradualismo, en el marco de un proceso de concertación con los sectores económicos representativos”.¹⁰² Es decir, consideraron necesarios los ajustes introducidos por la nueva gestión económica, pero se mostraron preocupados por la oposición que habían suscitado las medidas en la clase obrera. Estos sectores expresaban así la necesidad de un cambio de rumbo ante el fracaso del Pacto Social, pronunciándose abiertamente en favor del “Rodrigazo” y claramente en oposición a la política liderada en su momento por Gelbard. Sin embargo, su embate contra la dirección nacional de la CGE no prosperó, ya que iba a contramano de un repudio cada vez más generalizado contra las medidas aplicadas por Rodrigo, que terminó renunciando al poco tiempo.¹⁰³

Antes de la renuncia del ministro, la dirección nacional de la CGE reclamó que se convoque urgentemente a una reunión multisectorial para impulsar medidas que permitiesen corregir la difícil situación económica que atravesaba el país, apoyándose en que las “instituciones más representativas” se habrían pronunciado en contra de las medidas económicas de Rodrigo, afirmación que pasaba por alto el hecho de que una porción de la CINA apoyó la gestión del ministro saliente. Finalmente, con la dimisión de Rodrigo el 17 de julio, la CGE expresó sin tapujos su oposición al plan económico: “Estos conflictos serían provocados por una

¹⁰¹ *La Nación*, 15/7/75.

¹⁰² *Ídem*.

¹⁰³ *Cronista Comercial*, 16/7/75.

política económica que se aplicó sin consulta alguna con los obreros ni con los empresarios”.¹⁰⁴

El “Rodrigazo”, como vimos, generó una crisis en el interior de la CGE, que se profundizó en los meses siguientes. La unificación con la UIA no resultó tan sólida como exaltaban sus protagonistas. En el mes de abril ya se habían expuesto indicios de la crisis cuando Roberto Blanco y Martín Noel presentaron sus renunciaciones como directivos de la CGE. Días antes se habían reunido con el Ministro del Interior, aparentemente para discutir cuestiones relacionadas con la CGE y la representatividad del empresariado. Aunque ellos se defendieron argumentando que iban en representación de la CINA, su anterior afiliación a la UIA parece haber generado suspicacias sobre los verdaderos motivos del encuentro. Finalmente la dirección de la CGE rechazó las renunciaciones de los dirigentes, aunque no frenó la crisis.

En agosto, una vez superado el temporal generado por la renuncia de Rodrigo, el marco de una reunión del consejo superior de la CGE en Tucumán, se preparó un plan de medidas con el fin de enfrentar la crisis económica que incluían la creación de un Consejo Económico de Emergencia, integrado por representantes del Gobierno, de las Fuerzas Armadas, del Parlamento, de la CGT y de la CGE; se propiciaba la fijación de precios concertados mediante acuerdos con empresas líderes en cada sector; la renegociación de la deuda externa argentina, adecuación del tipo de cambio exportador, un sistema selectivo de cambios para las importaciones, entre otras. El documento incluyó medidas propuestas por el Instituto de Investigaciones Económicas de la CGE, la CINA y por los representantes de las provincias del NOA, que habían expuesto críticas a la conducción nacional de la entidad. Según *Cronista Comercial*, las medidas presentadas serían el

104 *La Nación*, 21/7/75.

producto de una negociación, en la que se intentó conciliar las posiciones encontradas al interior de la corporación.¹⁰⁵ Presentaron también un documento, el Acta de Tucumán, en la cual se llamó la atención al gobierno nacional, destacándose que:

“el país ha sido llevado a una profunda y compleja crisis. La recesión avanza, la desocupación aumenta día a día, hay una virtual cesación de pago en los sectores productivos, cunde la desorientación y se extiende un manto de desaliento y escepticismo respecto de la posibilidad de una salida”.¹⁰⁶

Evidentemente, la situación política y la crisis interna obligaron a la dirección de la CGE a endurecer sus posiciones y profundizar su crítica al gobierno. La reunión del Consejo Superior finalizó con un aplauso cerrado, solicitado por el tesorero de la CGE, José Shaw, a las Fuerzas Armadas, que actuaban en Tucumán contra la guerrilla en el marco del Operativo Independencia.¹⁰⁷

Algunos días más tarde, el 9 de agosto, la CINA publicó una solicitada relacionada con la situación de la industria. Expresaba que “continúa alertando a las autoridades y al país sobre los niveles de producción y empleo por la falta de adecuadas políticas en los fundamentales campos del quehacer productivo nacional. Se ofreció no sólo una construcción colaborativa, sino también propuestas concretas y viables de solución, las que sólo serán posibles en el marco de la concertación que el país respalda”.¹⁰⁸

El 14 de agosto, luego de la breve y abortada gestión de Pedro Bonani, asumió Antonio Caffero como Ministro de Economía. El flamante funcionario negó que tuviera prevista una devaluación importante; puntualizó que el déficit presupuestario, la balanza de

¹⁰⁵ *Cronista Comercial*, 26/7/75.

¹⁰⁶ *La Nación*, 4/8/75.

¹⁰⁷ Ídem.

¹⁰⁸ *La Nación*, 9/8/75.

pagos y la inflación eran cuestiones a las que se asignaría prioridad. Comentó que la economía había dejado de ser un coto para especialistas, debido a que muchos de sus aspectos se convirtieron en hechos de conocimiento popular y que todos eran conscientes de la gravedad del momento que se atravesaba.¹⁰⁹ Su política económica consistiría en una pequeña devaluación, refinanciación, expansión del crédito y duplicación del salario familiar.

La CGE declaró que los lineamientos de la política anunciada por el ministro de Economía coincidían en lo fundamental con el programa de emergencia aprobado por el Consejo Superior de la entidad. Resaltaron las declaraciones del ministro al respecto de la vuelta a la política económica que lideró Perón, con diálogo y concertación, y que ésta “representa las aspiraciones de los empresarios nacionales”.¹¹⁰

Estas apreciaciones no fueron compartidas por un sector importante de la CGE, nucleado en la CINA. El titular de los industriales, Carlos Coqueugnot, en las celebraciones del Día de la Industria, el 2 de septiembre, prefirió resaltar las dificultades económicas del momento antes que las coincidencias con el flamante ministro de Economía. Expuso que no sólo la industria, sino todo el país estaba atravesando por un nivel de iliquidez que restaba poder de compra al mercado interno y agravaba la situación financiera de las empresas, por el incremento de los costos. Para revertir el proceso, el presidente de la CINA sostuvo que deberían adoptarse medidas en relación a la adecuación de los créditos a las empresas según los nuevos costos. A su vez, volvía un viejo reclamo de los industriales: “adaptar los salarios” para hacer competitiva la industrial nacional. Obviamente se trataba de un eufemismo por el cual se pedía una reducción salarial, en

109 *La Nación*, 16/8/75.

110 *La Nación*, 30/8/75.

sintonía con las medidas adoptadas en su momento por Celestino Rodrigo.¹¹¹

Una reunión del Consejo Superior de la CGE en Chaco, volvió a reflejar las disputas internas. En la crónica se reseña un enfrentamiento solapado entre los dirigentes porteños y los de las federaciones del interior. La tensión surgió por la relación con el gobierno nacional y la oposición a su política económica. En la fuente se señala que la dureza de los discursos de los dirigentes de las federaciones provinciales fue atenuada por la prudencia de los dirigentes porteños. Un dirigente provincial señaló que

“como fruto de esta candente realidad, se presenta una instancia nueva para la institución empresaria que como lo calificó su titular, el Ing. Broner, resulta histórica. Y es la alternativa de su afianzamiento a través de una acción desvinculada e independiente de la conducción económica, o del debilitamiento de su poder político a causa de cesiones y paralelismos que sólo benefician a otros sectores.”¹¹²

Se trataba de un claro mensaje hacia la dirección de la CGE, que seguía sosteniendo al gobierno nacional, cada vez con más oposición interna.

Uno de los discursos más críticos en la reunión de Chaco fue el del titular de la CINA, Carlos Coqueugniot, quien señaló que luego de una leve detención de la pendiente económica en que estaba el país, “parece regresarse a un estancamiento”.¹¹³ Afirmó que “son imprescindibles la seguridad jurídica, la paz social y el ajuste a la realidad”, y que las medidas adoptadas por el ministro de Economía están “fallando en su implementación y, de continuarse con ellas, caeremos en una recesión todavía mayor”. Señaló como

¹¹¹ *Clarín*, 15/9/75.

¹¹² *La Nación*, 13/10/75.

¹¹³ *La Nación*, 12/10/75.

problema destacado la “violencia”, “que destruye todo el esfuerzo hecho para mantener abiertas las fábricas”. Expresó también que “es absurdo distribuir una riqueza que sigue siendo potencial”, en una crítica al intento de Cafiero de reflotar el programa reformista. Uno de los elementos que generó mayor crispación en la dirigencia empresaria fueron los anuncios de aumentos salariales realizados por Cafiero fueron rechazados tanto por la CINA como por la dirección nacional de la CGE.¹¹⁴ Sin embargo, y a pesar de las críticas a la política económica de Cafiero, la CGE terminó apoyando el llamado a una nueva concertación obrero patronal del ministro.

Ante la suscripción por parte de la CGE de una nueva Acta de Concertación con el Ministerio de Economía, direccionada a contener la inflación y obtener disciplina social, los conflictos internos se profundizaron. Emergió el descontento de seccionales provinciales de la CGE ante un nuevo intento de reflotar el reformismo. Una de las filiales descontentas era la de Tucumán, que esgrimió que no se había consultado con las provincias, ni con los representantes del interior en el Consejo Superior de la CGE, antes de la firma del acta. El titular de la Federación Económica Tucumana, antes de partir hacia una reunión de emergencia en Buenos Aires con la cúpula de la Confederación, señaló que no permitiría un manejo personalista y sectario de la CGE. Contaba asimismo con el apoyo de los delegados del nordeste, que se iban a reunir previamente para unificar criterios de cara a la reunión con el resto de la CGE.¹¹⁵

El periódico *Cronista Comercial* da cuenta también de las discrepancias y destaca que, a pesar de la ausencia de unanimidad, se aprobó igualmente lo actuado por la dirección nacional:

¹¹⁴ Ídem.

¹¹⁵ *La Nación*, 24/10/75.

“El debate empresario iniciado en la antevíspera por dirigentes de la CGE concluyó ayer con discrepancias por parte de dirigentes del NOA y San Juan. Sin embargo, la mayoría de los empresarios se inclinaron por aprobar lo actuado por la comisión directiva y reiterar su adhesión a la política de concertación como único instrumento idóneo para sacar al país de la crisis económica en que cayó luego del abandono del diálogo”.¹¹⁶

El Acta suscripta entre la CGE, la CGT y el gobierno también fue condenada por otros sectores industriales. Uno de ellos fue el Movimiento de Unidad Industrial (MUI), que señaló en un comunicado que “se insiste en responsabilizar al empresariado de situaciones que competen en exclusividad al propio gobierno, aun en los casos que compartió esa responsabilidad con representaciones empresarias impuestas, no auténticas, y mucho menos mayoritarias”. Rechazó a su vez un acta que reviviría experiencias agotadas, que serían las causantes de los problemas que se pretende superar, en una clara crítica al Pacto Social de Gelbard y a la dirección de la CGE. Lo interesante del caso es que el MUI estaba integrado, entre otras cámaras industriales, por la ADIC (Asociación de Industriales de Córdoba), que no sólo era miembro de la UIA, sino la cámara de la que provenía quien en ese entonces era presidente de la CINA.¹¹⁷

En un contexto en el que ya se ventilaban abiertamente los planes golpistas, las declaraciones de apoyo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la subversión no resultaban inocentes. Podemos destacar un comunicado de la CINA, que en el marco de la disputa con la dirección de la CGE por su respaldo al gobierno, puede leerse como un saludo a los planes golpistas:

¹¹⁶ *Cronista Comercial*, 30/10/75.

¹¹⁷ *La Nación*, 1/11/75.

“Junto a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad somos los empresarios, todos nuestros colaboradores y los dirigentes sindicales los más duramente atacados por la subversión, tanto en los establecimientos industriales como en nuestros hogares. Somos víctimas indefensas de una acción de reducidos grupos que, pretendiendo autocalificarse de laborales, utilizando todo tipo de agresión, tendiendo a la destrucción de todo el aparato productivo nacional, para que el caos político y social –corolario del caos económico–, favorezca la imposición de su ideología y el logro de sus inconfesables objetivos.

“[...] Las empresas carecen de la mínima seguridad para elaborar planes, sostener y elevar la producción y la productividad, organizar los medios de trabajo y mantener la indispensable disciplina en los establecimientos fabriles.

“[...] Esta situación no sólo no se ha revertido sino que se ha visto agravada por recientes acontecimientos que son de dominio público. Importantisimas empresas industriales han paralizado su producción por conflictos artificiosos y, ante la falta de las mínimas garantías constitucionales de seguridad personal para sus directivos, su personal de supervisión y sus propios obreros.

“[...] En todos los casos, la intervención del Ministerio de Trabajo ha sido tardía, insuficiente y parcial, permitiendo que estos conflictos se generalizaran y llegasen a situaciones extremas.”

A contramano del tono más conciliador de la dirección nacional de la CGE, la CINA iba endureciendo su discurso, acicateada por la intensa campaña que habían emprendido los empresarios golpistas nucleados en APEGE contra el gobierno y la Confederación General Económica (que retomaremos en el siguiente acápite). A fines de noviembre, el vicepresidente de la CINA, Edmundo Paul (uno de los dirigentes provenientes de la UIA), se refirió a la situación del empresariado, en una reunión organizada por IDEA. Señaló que el estado de ánimo de los empresarios oscilaba entre “la perplejidad, la frustración y el desmayo”, enfrentando el crecimiento de la inflación, ahogos financieros, “leyes laborales que inducen el rendimiento decreciente”, dificultades de abastecimiento, variación de normas y otros problemas.¹¹⁸ Criticó la intervención

118 *La Nación*, 27/11/75.

del Estado, tanto por su intensidad como por “las formas que ha adoptado en nuestro país”, que en lugar de ordenar, generaba caos. Señaló, como ejemplo de la errada intervención estatal, que “se unifican salarios en la República, impulsando así a la concentración industrial en las grandes ciudades, y luego se dictan leyes y se dan subsidios para lograr la descentralización industrial, creando indirectamente un desequilibrio en sentido inverso por vía del impuesto.” “Se sobreprotege a la mujer, con lo cual se le hace más difícil encontrar empleo; se disminuyen horas o días de trabajo, se tolera la disminución de la eficiencia, etc.” Señaló que se ha ido erosionando la economía de mercado, criticando la política de fijación y concertación de precios. Por último, tomando clara distancia de las posiciones reformistas y confluyendo con la estrategia reaccionaria, señaló: “el que no es eficiente tiene que dar lugar a otros que lo son”.¹¹⁹

A fines de diciembre, la CINA emitió una declaración pública en la que formulaba severos juicios sobre la situación nacional, que sirve como un claro ejemplo de una crítica cada vez más dura, y más lejana a su vez, de las posiciones asumidas por la CGE.

“El grave deterioro económico, la exacerbación de los conflictos sociales, la carencia generalizada de las garantías legales y la violencia son signos de un país que contra todas sus reales posibilidades ha seguido un camino descendente en el contexto mundial de las naciones.”

Reiteraban que el gobierno ha ignorado que “para repartir hay que producir”, y criticaron el incremento de las cargas sociales “sin atender al costo que significa generarlas y administrarlas”. Se ha hecho “un verdadero culto de la improductividad, confundiéndola con una conquista social”, señalaron. Según la CINA, el gobierno parecía haber olvidado que “el generador más dinámico y eficiente

119 Ídem.

del crecimiento y de los empleos ha sido siempre el sector empresario privado”. Criticaron a su vez la política de concertación, atacando a los sindicatos y la política laboral emprendida por el Ministerio de Trabajo:

“En el diálogo trabajo-empresa el sindicalismo abandonó su función auténtica. Los representantes de las organizaciones sindicales ocupan lugares de decisión en el Ministerio de Trabajo que convierte a una de las partes en juez. Los efectos de esta parcialidad y los de la subversión fabril han minado la autoridad del empresariado en su propia empresa creando un permanente clima de inseguridad. Simultáneamente, la rentabilidad empresaria ha sido objeto de una sistemática persecución, tal como si se tratara de un vicio social.”

Los resultados de esta política “están a la vista”: “una lucha desenfrenada por el reparto provoca una inflación sin precedentes”; “se ha cortado de cuajo toda idea de inversión y de crecimiento. No se generan empleos nuevos. La infraestructura, en vez de crecer, se deteriora.” El descenso de la inversión llevó a la necesidad de importar productos que antes se producían localmente, aumentando la necesidad de divisas, mientras se desincentivó la exportación. El resultado sería la crisis de balanza de pagos. Mientras se descapitalizarían las empresas privadas, el Estado absorbería más y más actividades improductivas, aumentando su ineficiencia.¹²⁰

Dichas ideas confluían con el reclamo de los empresarios opositores, reunidos ya en APEGE, que pedían el restablecimiento del orden a toda costa y bregaban más o menos abiertamente por la consumación del golpe de estado. La campaña de APEGE, que tenía como uno de sus blancos a la CGE y su política de concertación con el gobierno nacional, tuvo eco dentro de la propia Confederación, que comenzó un largo proceso de

¹²⁰ *La Nación*, 1/11/75.

desmembramiento en el que varias de sus fracciones se fueron sumando a la alianza contrarrevolucionaria, que se expresaba en la construcción de una salida golpista. Los empresarios de la CINA se agruparon en cuatro movimientos, que en distinta medida eran expresión de lo mismo: la crisis de la alianza reformista y de la política de concertación, la oposición a la dirección nacional de la CGE, a la que responsabilizaban por la crisis económica que estaban atravesando, y un acercamiento al polo de los empresarios golpistas encabezado por APEGE. Fueron apareciendo, entre agosto de 1975 y marzo de 1976, distintos reagrupamientos, dentro y fuera de la CGE, que expresaban su crisis: MEDI, MUI, MIA y COPAL. El MEDI (Movimiento Empresario del Interior) se originó en las críticas de los empresarios del Noroeste Argentino a la conducción de la CGE. Se organizó como una línea interna de la CGE, agrupando a diez seccionales provinciales, que actuaron como polo opositor y que, hacia 1976, terminaron confluyendo con APEGE y exigiendo la renuncia de Julio Broner y sus aliados a la dirección de la entidad. El MUI (Movimiento de Unidad Industrial) nucleaba al FEBA (Federación de Empresarios de Buenos Aires), que se había alejado de la CGE en 1973, y a la ADIC, que también confluyeron en APEGE, integrando su dirección. El MIA (Movimiento Industrial Argentino), conformada por antiguos dirigentes de la UIA, continuadores de su línea en el interior de la CINA, que desde adentro de la CGE se fueron constituyendo en uno de los polos de oposición a la dirección nacional. La última organización, COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios), de la rama agroindustrial, cuyos miembros, cámara y socios individuales provenían de la UIA y terminaron integrándose también a APEGE.¹²¹ Todos estos nucleamientos terminaron convergiendo con los postulados de

¹²¹ Schvazer, J.: *Empresarios...*, op. cit., pp. 214-217.

APEGE o ingresando directamente a sus filas.

El “Rodrigazo” tampoco pasó desapercibido en el seno de la burguesía rural. Las diferencias tácticas en el campo de esta fracción también se acentuaron frente al nuevo escenario político-económico. El frente integrado por CRA y FAA expresó en diferentes comunicados su desconfianza ante los primeros anuncios de Celestino Rodrigo, declarando el estado de alerta frente al desconocimiento de la política a seguir para el agro y negándose a asistir a las reuniones que convocaron los funcionarios del área económica. Aunque reconocieron como positivo el cambio de orientación, se mostraron cautelosos por la desconfianza que les producía el gobierno que impulsaba las medidas.¹²² En cambio, SRA y CONINAGRO saludaron abiertamente el cambio de orientación y brindaron su respaldo, concurriendo a las reuniones para discutir la política agraria y aprobando las medidas parciales, como los aumentos de precios de los productos agrarios y la liberación de los precios de la carne.¹²³

Ya en el ocaso de la gestión Rodrigo, pocos días después de un paro por 48 horas convocado por una CGT a la que sus bases estaban desbordando, y pocos días antes de que la movilización popular fuerce la salida del ministro de Economía, SRA emitió un extenso documento en el que se ofrecía un balance de la situación.¹²⁴ Allí se refirieron, en primer lugar, a las gestiones económicas previas:

“Desgraciadamente el gobierno no reaccionó a tiempo y el país entero tiene que pagar ahora un alto precio por ello. En lugar de ocuparse de promover una mayor producción agropecuaria, especialmente en aquellos rubros que alimentan nuestras exportaciones, la nefasta conducción económica encabezada por el señor Gelbard, responsable de las decisiones agropecuarias hasta octubre del

¹²² *La Nación*, 5, 12 y 14/6//75.

¹²³ *La Nación*, 9 y 13/6//75.

¹²⁴ *La Nación*, 16/7/75.

año pasado, se ocupó de cuestiones ideológicas, como el proyecto de ley agraria, de aumentar la carga impositiva y de deprimir los precios reales del campo. “Posteriormente, en un marco de mejor entendimiento con nuestro sector, se dejó pasar el tiempo sin adoptar medidas de fondo a pesar de los esfuerzos de algunos funcionarios importantes, y sólo últimamente, ante una crisis que ya no puede ocultarse, se manifestó la iniciación de un cambio de rumbo.”

Admitían los efectos recesivos y el “esfuerzo económico” que implicaba el plan para la clase obrera, pero sostenían que los problemas serían menos graves si la crisis se enfrentaba con “realismo”:

“El pueblo tiene que pagar ahora errores que se cometieron anteriormente en la conducción de la economía nacional, donde con palabras altaneras se desfiguró la realidad y se pretendió violar principios económicos elementales, sacrificando la Argentina a fantasías ideológicas que fracasaron en todos los países que se sometieron a ellas.”

Durante los años previos, señalaron, se perdió una oportunidad de mejorar la situación del país incentivando las exportaciones agropecuarias, a pesar de las advertencias de las entidades del sector. El gobierno habría desoído estas advertencias influenciado por la “izquierda marxista”: “La oportunidad se ha desperdiciado en forma irresponsable, a pesar de nuestras advertencias y quizás porque quienes advertimos a las autoridades éramos nosotros y no la extrema izquierda marxista, que con sus aliados ideológicos aplaudía esa política que llevó al país al desastre.” El balance era claro: el plan Rodrigo implicaba un ajuste duro pero necesario. Fueron los errores de las gestiones económicas anteriores los que habían llevado la situación a ese punto, y la única forma de salir era mantener el rumbo elegido e, incluso, profundizarlo. La declaración no era sólo un respaldo al plan, fuertemente cuestionado, sino una advertencia: no se podía volver atrás, la

reedición del reformismo era insostenible.

El 11 de julio se conoció un documento conjunto de CRA y FAA, en el que se pronunciaron sobre las “circunstancias que vive el país”, o sea, sobre las reacciones al Plan Rodrigo. El documento comenzaba expresando: “su más profunda ansiedad ante los acontecimientos de los últimos días que aún siguen sin solución.”

A su vez, señalaba que:

“La difícil situación a la que ha sido llevado el país es el desenlace lógico de acumulados y sucesivos fracasos originados en improvisados planes económicos, que advirtiéramos con sobrada anticipación, lo que es ahora reconocido por las autoridades económicas de turno; autocritica del gobierno que debe ser seguida rápidamente por inmediatas disposiciones que hagan realidad efectiva las promesas de rectificación anunciadas.”

Al igual que SRA, ambas entidades saludaron la “rectificación del rumbo” y reclamaron su profundización. Siguiendo esta línea, señalaron que mantenían “profundas discrepancias con toda la política aplicada hasta la fecha para el sector agropecuario”, y agregaron que las medidas implementadas no alcanzaban resolver “el deterioro causado en estos dos últimos al productor”.¹²⁵

Como veremos, el fracaso del plan terminó poniendo a la burguesía agraria, y al conjunto de la burguesía, nuevamente a la ofensiva. La derrota sufrida con la salida de Rodrigo, y la forma en que se produjo, empujada por una movilización de masas dirigida por la izquierda revolucionaria, que desbordó a los burócratas peronistas, marcó un punto de inflexión. Desde este momento la burguesía agraria relanzó su ofensiva con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno. A ella se sumaron, paulatinamente, las corporaciones que expresaban los intereses de la burguesía comercial y financiera, y más tardíamente, la burguesía industrial.

¹²⁵ *La Nación*, 12/7/75.

La ofensiva se observó, por un lado, en la radicalización de los discursos. Comenzaron a reiterarse con insistencia una serie de elementos: en primer lugar, la caracterización de la situación como una crisis general, económica, política y social, producto de los errores del gobierno. A su vez, aumentaron las referencias al problema de la “subversión”, en la que englobaban ya no sólo a las organizaciones armadas, sino también al activismo fabril que actuaba bajo la dirección de la izquierda. La “guerrilla fabril”. Por último, se insistió una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al “restablecimiento del orden”, con claras connotaciones golpistas. El discurso del presidente de la SRA en la inauguración de la tradicional muestra de Palermo, el 27 de julio de 1975, es un ejemplo de ello:

“Como argentinos y hombres de campo, nos causa enorme preocupación e inquietud la situación por la que atraviesa nuestra Patria. Queremos que de una vez por todas se encuentre el camino apropiado para la recuperación de la República. Estamos viviendo una crisis que abarca lo económico, lo social y lo político, pero que además tiene profundas raíces morales [...] Es indispensable que todos los sectores del país hagan un gran esfuerzo para superarla y para ello es fundamental asegurar el orden en todos los aspectos, para que renazca la confianza y tenga sentido el trabajo creador.”¹²⁶

A su vez, señalaba que la escasez de divisas que afectaba al país habría sido producida por la equivocada política agraria, de corte “colectivista”, que desalentó la producción:

“La responsabilidad hay que atribuirla al enfoque global con que se encaró la conducción de los asuntos económicos y a la postergación que en ese enfoque sufrió el campo [...] El país no debe ni puede volver a equivocarse. No debe continuar con estas lamentables experiencias colectivistas que sólo nos llevan

¹²⁶ *La Nación*, 28/7/75.

al empobrecimiento general [...] Debe ponerse en funcionamiento la economía a través de la libre iniciativa de los hombres, respetando la propiedad y los incentivos individuales [...] Intentar hacerlo mediante controles asfixiantes y con una excesiva participación del Estado lleva irremediablemente al fracaso y a la pérdida de la libertad y de las garantías personales.”

El copamiento del Regimiento 29 de Infantería de Monte de Formosa por parte de Montoneros, el 5 de octubre de 1975, fue aprovechado por SRA para condenar las acciones armadas emprendidas por organizaciones de izquierda y respaldar el accionar contrainsurgente de las Fuerzas Armadas. El comunicado emitido señalaba que:

“El operativo terrorista constituye el nuevo acto de un proceso que persigue crear el caos y agravar la situación que vive el país, para lograr el poder e imponer un régimen contrario a la tradición histórica y a las instituciones que rigen a los argentinos, quebrando la paz interna, para negar el derecho y la libertad que hacen a nuestro estilo de vida. [La] Sociedad Rural Argentina se solidariza con las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la decidida y patriótica acción en que están empeñadas.”¹²⁷

El giro también podía percibirse en el discurso pronunciado por Jorge Aguado en el acto por el 43º aniversario de CARBAP, el 24 de julio de 1975. Allí se refirió negativamente a la situación nacional y responsabilizó por ella al gobierno, al que atacaba con una virulencia inédita. Caracterizó que la Nación se encontraba ante “una crisis general”, que comprometía la existencia misma del poder del Estado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre los argentinos y la estabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país, ya que “fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de

¹²⁷ *La Nación*, 11/10/75.

la República a poco que la ciudadanía no se defienda”. La alusión al fantasma de la subversión, que reavivó la reacción popular al Rodrigazo, era clara. A continuación realizó un llamamiento a enfrentar la amenaza:

“Reclamamos coraje cívico. Exigimos decisión cívica. Porque ha llegado el momento irrenunciable en que cada uno de nosotros piense, diga y haga lo que su propio espíritu le indique por encima de las razones materiales que le sugieran prudencias o silencios; y debemos entender que si el silencio es cómplice de nuestras derrotas, la protesta y la acción, serena y razonada, pero altiva, son los aliados naturales para la victoria de la verdad y la justicia.”

Reclamó que los productores agrarios se pusieran a la cabeza de la ofensiva, porque si la situación había llegado a tales extremos, se debía a su falta de decisión para intervenir activamente en la vida política:

“Esta demagogia y este despotismo seudo democrático que se traduce hoy en día en prebendas y falsedades, en falta de comunicación, crímenes sin castigo, injusticias económicas, [...] sólo es posible por nuestra propia falta de decisión para participar activamente en la vida gremial, en la vida política y para hacer oír con fuerza la justicia de los reclamos que, por supuesto, deben respetar los derechos ajenos. Y ello es producto del terrible defecto de acomodarse a las circunstancias en vez de luchar y de inclinarse ante el poder material de turno que cínicamente cree que todo tiene su precio y lo practica.”

Finalmente cerró su discurso señalando que estaban dispuestos a luchar por devolver al país “tres factores fundamentales”: autoridad, seguridad y confianza. Por lo visto, el fracaso del Plan Rodrigo frente a la reacción obrera aparecía como un claro punto de inflexión. Y como vemos en el alegato final de Aguado, lo que se esconde detrás de ese reclamo por “autoridad” y “seguridad”, parece ser una invocación al golpe militar.¹²⁸

¹²⁸ *La Nación*, 25/7/75.

El 8 de agosto CRA y FAA emitieron una nueva declaración que iba en el mismo sentido, en la que se manifestaron preocupados ante “los graves acontecimientos políticos, económicos y sociales que conmueven al país.” Allí advirtieron que era imperativo “restaurar el pleno ejercicio de la autoridad”. Sobre la actitud del gobierno sostuvieron:

“Ante esto el gobierno aparece hasta ahora inoperante y vacilante, demostrando carencia de planes concretos, y se limita sólo al reconocimiento de la situación, sin encontrar los cauces que permitan afrontar con toda urgencia la corrección del proceso, que se agrava día tras día.”¹²⁹

El 12 de agosto la mesa ejecutiva de CARBAP dio a conocer un documento en el que exigía una serie de medidas “mínimas, imprescindibles y no negociables” para solucionar la situación del campo. Estos eran los problemas enumerados y sus causas:

“Podemos señalar muchos hechos negativos que demuestran la suicida acción llevada a cabo contra el sector agropecuario, agresión que no sólo afecta al productor sino que termina afectando seriamente las posibilidades económicas del país todo. La fijación y el mantenimiento de tipos de cambio artificiales y totalmente alejados de la realidad; el aumento de la carga impositiva sobre el campo y su producción a través de impuestos directos o de injustas y arbitrarias retenciones a la exportación; el monopolio del Estado en la comercialización de los principales granos y la fijación de precios con criterio político y con valores insuficientes; el avance intervencionista del Estado en la comercialización de carnes; la fijación de precios máximos para la hacienda vacuna, hoy suprimidos, pero con una pérdida causada de gran magnitud ya irrecuperable; la despojante reglamentación de compra de cosecha última; la falta de decisiones para encarar eficazmente soluciones que permitieran exportar a su debido tiempo lanas y cueros; el deterioro de la política sanitaria agropecuaria; los problemas sin solución en las distintas producciones regionales y especiales y, en fin, todos los problemas que afectan a los demás rubros de la actividad rural a lo largo y ancho del país no hacen más que demostrar la incapacidad y la

129 *La Nación*, 9/8/75.

ineficiencia del [...] Estado y [de la] burocracia para atender a las necesidades del desarrollo nacional.”

En consonancia con esta caracterización, se exigía la desgravación impositiva para el sector, eliminación de las retenciones, eliminación de los tipos de cambio diferenciales, créditos amplios, eliminación de las cuotas de faena, desgravación de la retención de vientres, modificación de la reglamentación de compra de la JNG para que pague al contado el 90% del precio, actualización inmediata del precio de la leche, y atención urgente de los reclamos de las producciones regionales.¹³⁰

La FAA también se pronunció sobre la situación de crisis y responsabilizó por ella al gobierno. En un documento se manifestó preocupada por la “espiral de empobrecimiento” que afectaba al campo y al país, y advirtió que de no revertirse la situación peligraba la estabilidad institucional:

“De persistir esta situación enervante nadie puede ignorar las potenciales derivaciones de la crisis ni el clima de escepticismo propicios para la ruptura del proceso institucional.

“Este deterioro, que se intensificara durante los últimos cincuenta días ha desconcertado a los argentinos y conducido al país a situaciones límites; el Estado nacional, que pareciera haber perdido las posibilidades de viabilizar soluciones eficaces, que morigeren la crisis y la desconfianza, debe acudir nuevamente a las fuentes sociales del poder real.”

Proponía, para afrontar la crisis, el llamado a una confluencia multisectorial. A su vez, exhortó a los sectores en lucha a hacer una tregua y reclamó que todos asumieran su responsabilidad en

¹³⁰ *La Nación*, 13/8/75.

la búsqueda de una convergencia sobre puntos esenciales.¹³¹ La entidad se mostró preocupada por “salvar el proceso institucional” y evitar el golpe:

“El momento que vive el país es de extrema responsabilidad para todos los sectores, porque el margen de maniobra para salvar el proceso institucional del país es sumamente escaso. Cualquier error en lo social, político o económico, puede producir el derrumbe constitucional que no queremos.”¹³²

A diferencia de sus aliados de CRA y CARBAP, FAA no aparecía jugándose decididamente en favor del golpe de estado. Sin embargo, sus acciones políticas previas y posteriores los colocaban en el terreno de la alianza que impulsaba la salida golpista. Esa misma semana el Comité de Acción Gremial de la Federación Agraria recomendó la desafiliación de la CGE. El motivo aducido era la necesidad de intensificar la acción gremial, para lo cual, la relación con la CGE era una traba:

“Es imprescindible intensificar la acción gremial para ubicar al sector agropecuario en posición gravitante dentro del concierto nacional, como paso ineludible para alcanzar su recuperación económica y la del país, contribuyendo así al afianzamiento de la paz social y el orden institucional; que es necesario un replanteo de las actitudes de las entidades gremiales del sector para obtener la máxima autenticidad, eficacia y capacidad de convocatoria, a fin de estar en condiciones de exigir el reconocimiento del derecho a participar, que en justicia le corresponde; [...] la Confederación de la Producción de la República Argentina no ha podido superar sus carencias estructurales a pesar de los esfuerzos realizados en ese sentido.”¹³³

En esa dirección presionaban sus aliados de CRA, cuyo presidente

¹³¹ *La Nación*, 25/7/75.

¹³² *La Nación*, 15/7/75.

¹³³ Ídem. La FAA estaba adherida a la Confederación General de la Producción, que a su vez era miembro de la CGE.

expresó públicamente que la Federación Agraria debería desafiliarse de la CGE, ya que sólo de esa manera podría actuar con “absoluta independencia”.¹³⁴ Finalmente, el Consejo Directivo Central terminó votando la desafiliación el 14 de julio de 1975.¹³⁵ Mientras todavía estaba por definirse la orientación económica que asumiría el gobierno luego de la salida de Rodrigo, Jorge Aguado llamó a profundizar el giro que se había dado y no volver atrás: “Volver al control de precios, al congelamiento, al monopolio estatal en la comercialización es no haber sacado ninguna experiencia positiva de los fracasos anteriores.” A su vez, señaló que los productores agropecuarios deberían pasar a la acción en el corto plazo, no sólo para luchar por sus demandas sectoriales, sino para empezar a incidir en cuestiones de política general:

“Entiendo que se está llegando a un momento en que las entidades agropecuarias realmente representativas deben reforzar su acción gremial y que esa acción no debe limitarse a luchar por los intereses del sector, sino que tiene que abarcar un aspecto más amplio como el de pedir la participación no sólo en las cuestiones agropecuarias, sino en las decisiones de orden nacional.”¹³⁶

El discurso del presidente de la SRA en la inauguración de la muestra de Palermo tuvo un tono similar. Allí se mostró nuevamente preocupado por la situación del país, y llamó a la restitución del orden:

“Como argentinos y hombres de campo, nos causa enorme preocupación e inquietud la situación por la que atraviesa nuestra Patria. Queremos que de una vez por todas se encuentre el camino apropiado para la recuperación de la República. Estamos viviendo una crisis que abarca lo económico, lo social y lo político, pero que además tiene profundas raíces morales.

¹³⁴ *La Nación*, 21/6/75.

¹³⁵ *La Nación*, 15/7/75.

¹³⁶ *La Nación*, 26/7/75.

“Es indispensable que todos los sectores del país hagan un gran esfuerzo para superarla y para ello es fundamental asegurar el orden en todos los aspectos, para que renazca la confianza y tenga sentido el trabajo creador.”¹³⁷

El endurecimiento de las posiciones precedió a la convocatoria a nuevas medidas de fuerza encaradas por la burguesía agraria. A fines de agosto, el frente conformado por CRA y FAA convocó a un paro comercial ganadero de 11 días, que se realizaría entre el 19 y el 29 de septiembre. Estas entidades asumieron las posiciones más duras, negándose a asistir a reuniones que pudieran destrabar el conflicto. La SRA, por el contrario, mantuvo su posición cauta, asistiendo a las reuniones convocadas por el ministro de Economía, aunque sin obtener resultado alguno. Luego del fracaso de las negociaciones, SRA decidió sumarse, a última hora, al paro convocado por CRA y FAA.

El paro del 19 comenzó con una “multitudinaria” asamblea realizada en Santa Rosa, La Pampa, presidida por Jorge Aguado. Allí se resolvió solicitar a CARBAP, CRA y FAA extender la medida durante 10 días más. El paro se cumplió con un acatamiento casi total. Contó con la adhesión de las cámaras de comercio en diferentes localidades, y el apoyo de diputados de la UCR y otras fuerzas políticas. Se realizaron actos, concentraciones de productores y cortes de ruta en diferentes lugares del país. El viernes 26 de septiembre, por ejemplo, se declaró “día de protesta” en Córdoba, realizándose una concentración en Gijena de 1.500 productores y 300 tractores, que cortaron la ruta a intervalos de media hora. También se realizaron actos en Elena y Berrostarán, donde se congregaron 300 tractores por cada localidad y centenares de manifestantes. Durante ese viernes se cerraron todos los comercios e industrias de la zona, y las escuelas cerraron

¹³⁷ *La Nación*, 27/7/75.

temprano para permitir la concurrencia a los actos.¹³⁸ Al finalizar el paro, CARBAP anunció que se mantenía en estado de alerta y decidió abrir un paréntesis de 10 días antes de decidir nuevas medidas de fuerza.¹³⁹

El 5 de octubre, Jorge Aguado pronunció un duro discurso en la inauguración de la exposición rural de Bahía Blanca.

“Luchemos por las grandes rectificaciones, pues el país no resiste tantos desaciertos en su conducción ni tanto asesoramiento equivocado, ni tanto vacío de autoridad ni tanta desobediencia terrorista. Digamos nuestras verdades sin temor a la represión material ni a la compulsión ideológica, ejerciendo nuestros derechos cívicos, pues no es ni será la primera ni la última vez que la verdad perforará la coraza dura, pero negativa, de la demagogia.”

Como cierre, llamó nuevamente a los productores a intervenir activamente en la vida política del país:

“Creo que esta demostración de coherencia en la acción gremial que no abandonaremos permite exigirnos ahora algo más. Creo que ha llegado el momento de decir que todos los productores debemos [pensar] en la necesidad de ir tomando participación en todas las manifestaciones de la vida pública argentina. Que somos productores agropecuarios pero antes somos ciudadanos argentinos y que formar parte sustancial de esta sociedad común que es nuestra Nación, nuestro pensamiento debe tener importancia en la vida política del país [...] “Deseo dejar expresamente aclarado que no estoy propiciando la introducción de la política cívica o electoral en el movimiento rural confederado [...] Mi pensamiento se orienta hacia la indispensable y obligatoria claridad de criterio de cada productor, para discernir con la máxima conciencia, la posición que deberá adoptar cuando sea llamado a expresarse políticamente. Si luchamos por la libertad de comercializar nuestra producción, si nos oponemos a la agremiación compulsiva, si queremos que se respete nuestra libre iniciativa en nuestros campos sin mandato del Estado o de la burocracia oficial, si defendemos el derecho de propiedad y la libre disponibilidad de nuestros bienes, comenzando por la tierra, que queremos trabajar con asesoramiento

¹³⁸ *La Nación*, 26/9/75.

¹³⁹ *La Nación*, 30/9/75.

si es necesario, pero según nuestra propia determinación, si reclamamos un sistema de libre contratación de personal, de transportes, de servicios, etc.; si todo esto y mucho más, forma nuestra plataforma de principios con los que hemos levantado toda la estructura de CARBAP y de Confederaciones Rurales Argentinas, no es posible que, llegado el momento de tomar decisiones políticas, lo hagamos sosteniendo a quienes pretenden mantener los controles de la economía, el monopolio de la Junta de Granos, los cupos de faena, los precios máximos para la carne, los tipos de cambio irreales o precios únicos, tardíos e insuficientes para la cosecha.”¹⁴⁰

Este último párrafo del discurso no puede leerse más que como un llamado a apoyar el futuro golpe que ya se estaba discutiendo: para defender sus exigencias no podrían sostener al gobierno en el momento en que las circunstancias lo exijan.

El 21 de octubre FAA y CRA decretaron un nuevo paro comercial ganadero “ante la falta de respuestas por parte del Gobierno a los reclamos del sector agropecuario”. Un día después SRA anticipaba su decisión de sumarse al paro con un duro comunicado contra el gobierno.¹⁴¹ Sobre la situación general del país, señalaba:

“La dramática situación que vive la Nación obliga a analizar situaciones, fijar posiciones y asumir responsabilidades [...] La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza en los habitantes que enerva toda actividad constructiva. No se percibe claridad de objetivos en la conducción política y económica, ni una acción definida, en todos los niveles, en contra del extremismo.”

Sobre la economía agregaba:

“Un sistema equivocado basado en un creciente intervencionismo estatal, que en las últimas décadas ha demostrado repetidamente su fracaso, ha llevado a los extremos actuales de empobrecimiento general y de una inflación nunca vivida, con su secuela de especulación e inmoralidad que lleva a la descom-

¹⁴⁰ *La Nación*, 6/10/75.

¹⁴¹ *La Nación*, 23/10/75.

posición económico-social, y a gravísimas situaciones en el sector externo.”

También se referían a la situación del agro:

“Una profunda y prolongada crisis ha llevado a los productores a una desastrosa situación. La persistencia del Estado en apropiarse de la mayor parte del precio internacional de los productos agropecuarios a través de diferencias cambiarias, ha determinado una arbitraria y nefasta reducción de los ingresos de los productores, la pérdida de los mercados, el desequilibrio de la balanza internacional de pagos, caída en la producción y graves consecuencias en todo el resto de la economía [...] Nada se observa hasta hoy para revertir esa situación. Se continúan utilizando los ‘slogans’ que han llevado a la misma. No se revén las políticas ni se intenta encausar los factores en el sentido de la corrección necesaria. Continuamos en el camino de desorientación, inseguridad y desorden.”

El paro comenzó el 24 de octubre, y tuvo una duración de 18 días. El comunicado de CRA y FAA amenazaba que la medida podría extenderse si las circunstancias lo indicaban, y se invitaba a todas las entidades agrarias a adherirse.¹⁴² Nuevamente contó con la adhesión de numerosas cámaras comerciales, y durante su desarrollo se realizaron manifestaciones de productores en varios puntos del país. El anuncio repentino de la medida y su extensión tomó por sorpresa al gobierno, que no pudo acumular stocks de hacienda. El masivo acatamiento tuvo entonces importantes consecuencias: su resultado fue un pronunciado desabastecimiento y el aumento en los precios de la carne y sus substitutos, que en un contexto inflacionario trajo graves problemas para el gobierno. Frente a los aumentos, el Ministerio de Economía fijó precios máximos para todos los cortes de carne y amenazó nuevamente con aplicar la ley de abastecimiento expropiando hacienda. Sin embargo las medidas tomadas no pudieron evitar las consecuencias

¹⁴² *La Nación*, 22/10/75.

del paro comercial: los dueños de carnicerías salieron a denunciar que el producto no les llegaba a los precios fijados por el gobierno, y declararon un lock out hasta que se garantice el abastecimiento a los precios oficiales.¹⁴³

Se solidarizaron con la medida firmas consignatarias, empresas de transporte, la Corporación Argentina de Invernadores, la Corporación de Productores de Frutas de Río Negro y Neuquén, la Federación Económica de Buenos Aires, la Cámara de Sociedades Anónimas y la Unión Comercial Argentina. Ante el inicio del paro el bloque de diputados de la UCR pidió la interpelación del ministro de Economía y del secretario de agricultura. A su vez, el titular de la bancada se solidarizó con la medida, reconociendo “la legitimidad del reclamo porque el sector agropecuario no ha encontrado desde hace mucho tiempo cómo canalizar razonablemente sus propios problemas de coyuntura”.¹⁴⁴ Un diputado del MID y otro del FREJULI también se pronunciaron en favor de la interpelación, y un diputado del Partido Autonomista Liberal de Corrientes apoyó la medida de fuerza.¹⁴⁵ El paro fue respaldado también por el Partido Intransigente de Buenos Aires y por una resolución de la Cámara de Diputados de La Pampa.

La medida se cumplió, nuevamente, con un acatamiento casi total y un ingreso mínimo de hacienda a los mercados. Fue acompañado, como los anteriores, por manifestaciones y cierres de comercio. El Centro Comercial de Río Cuarto dispuso un cierre total de actividades (comercio e industria) el jueves 30 de octubre. También dispuso la concentración simultánea de tractores y maquinaria agrícola sobre rutas nacionales, en varios puntos. La medida contó con la adhesión de las 31 cámaras integrantes del Centro y, según

¹⁴³ *La Nación*, 31/10/75, 1/11/75 y 5/11/75.

¹⁴⁴ *La Nación*, 25/10/75.

¹⁴⁵ *La Nación*, 28/10/75.

la crónica, fue apoyada en todo el sur de Córdoba. Se movilizaron unos 400 tractores, maquinaria agrícola y camiones que tras concentrarse en las rutas, ingresaron a la ciudad. Los vehículos, luego de dar vueltas a la plaza principal, se estacionaron en el lugar “hasta cubrir la totalidad de su perímetro”. El espectáculo fue seguido por centenares de empleados de comercio que ocuparon las calles adyacentes por haber cumplido la disposición de la CGT de presentarse en sus lugares de trabajo, aunque ninguno abrió sus puertas. En San Luis 200 automóviles conducidos por productores recorrieron “pacíficamente las rutas para controlar el cumplimiento del paro”.¹⁴⁶ La Secretaría de Comercio denunció la “comisión de actos subversivos” para intimidar a los productores y que no concurrieran a vender hacienda. Según el funcionario, se produjo la “quema de sembrados, corte de alambrados, dispersión de hacienda lista para ser enviada a la Capital Federal, piquetes de activistas entregados a la acción directa [...] y la publicación de solicitadas intimidatorias [...]”¹⁴⁷ Más adelante denunció que también se efectuaron disparos contra los camiones que transportaban hacienda.¹⁴⁸

En medio del paro, el presidente de CARBAP pronunció un discurso en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde defendió las medidas tomadas por los productores agropecuarios. Allí explicó que no se trataba sólo de una defensa de intereses sectoriales, ya que lo que estaba en juego era la “destrucción de la nacionalidad y del ser argentino”, puesto en riesgo por la incapacidad del gobierno.¹⁴⁹ También sostuvo que estaba surgiendo “el verdadero espíritu nacional que permitirá eliminar las antinomias entre

¹⁴⁶ *La Nación*, 30 y 31/10/75.

¹⁴⁷ *La Nación*, 6/11/75.

¹⁴⁸ *La Nación*, 8/11/75.

¹⁴⁹ Aguado, op. cit., pp. 209-210.

argentinos”. Ese “espíritu” enfrentaría a las “filosofías políticas y económicas extrañas [...] que prometen la felicidad sin trabajo y a costa de los demás”. “La hora de la verdad es inexorable”, dijo al cerrar, haciendo pública su esperanza en un cambio de régimen frente a la debacle peronista.¹⁵⁰

Una vez concluido el paro, la ofensiva de la burguesía no cesó. Las declaraciones y los pronunciamientos fueron aumentando su virulencia a medida que la crisis se profundizaba. Las amenazas de nuevos paros eran casi diarias y ya se hablaba abiertamente del golpe de estado en todos los ámbitos. Poco tiempo después de concluido el paro, en el XXV Congreso Anual de CARBAP, celebrado en Junín, el presidente de esa entidad insistió con veladas referencias al inminente golpe de estado:

“Tengamos entonces la profunda convicción de que el futuro se construye hoy, que la agitación que hoy vivimos debe dar lugar a la paz civilizada de mañana y que el tiempo que hoy dediquemos a esta árida lucha gremial en defensa de los derechos e intereses generales nos permitirá vivir una realidad, no lejana, plena de justicia y libertad.

“El país vive una situación de crisis, pero también tiene suficientes reservas en hombres de todos los sectores para remontar la negativa situación que nos abruma; sólo es necesario que estos hombres emerjan a la acción cívica y no se dejen sumergir bajo el peso de las conveniencias materiales.”¹⁵¹

Luego de comparar la situación nacional con la “anarquía de 1820”, se refirió al problema de la “subversión”, a la que no se privó de relacionar abiertamente con el gobierno:

“Tiempos estos donde el campo del delito avanza en terrenos que nuestros codificadores no pudieron prever en su tiempo. En delitos que erosionan patrimonios bien habidos, cuestan vidas siempre valiosas, destrozan empresas y comunidades, rompen el cristal de la conducta y aniquilan el ahorro, la pre-

¹⁵⁰ Ídem, p. 211.

¹⁵¹ Ídem, p. 216.

visión y la seguridad de la familia. Y entre estos delitos el principal lo comete el propio Estado quien por la vía de las emisiones monetarias sin precedentes, no tiene otro límite que la velocidad de las máquinas impresoras de billetes. Dinero falso que degrada el dinero verdadero. Dinero falso que pretende confundir a los que trabajan. Dinero falso con el cual nos pagan las cosechas. Dinero falso que recibimos por nuestras carnes [...] Tiempos de dinero falso, de conductos equívocos, de declaraciones vacías, de aventuras y de incompetencias.”¹⁵²

La solución propuesta a la crisis era, claramente, el golpe de estado, como se desprende del reportaje concedido por Aguado a *Correo de la Semana*:

“No hay forma de solucionar los problemas sectoriales si no hay solución a los problemas generales del país [...] La acción cívica excede el marco de los intereses sectoriales para abarcar el conjunto de los intereses del país. La falta de participación y de acción en los grandes problemas nacionales, es la peor culpa que tenemos los argentinos. Hoy todavía podemos subsanarlo. Espero que no sigamos dejando el camino libre a los activos enemigos de la nacionalidad y que recuperemos el poder de iniciativa tan necesario para desarrollar a la Nación con autoridad, seguridad, confianza y orden por lógica consecuencia. Pero que sea el orden de la civilización en libertad y no el que pretenden imponer las ideas comunizantes. Creo que ésta es la cuestión. Ojalá que los argentinos actuemos como hombres, si no queremos terminar siendo nada.”¹⁵³

En la misma dirección apuntaba un discurso pronunciado por el presidente de la SRA a mediados de diciembre. Allí señaló que se estaba frente a una guerra, que enfrentaba de un lado a los defensores del status quo, y por otro a la “subversión”. La política del gobierno, responsable del caos, sólo servía para allanar el camino al “marxismo”, que se preparaba para asaltar el poder. Es decir, que sus acciones ponían al gobierno, objetivamente, en el bando enemigo. El discurso comenzó señalando que “la Sociedad

¹⁵² Ídem, p. 217.

¹⁵³ *Correo de la semana*, 28/11/75, citado en Aguado, op. cit., p. 229-230.

Rural Argentina no puede estar de fiesta ante la dramática situación por la que atraviesa el sector y todo el país”. Era necesario que el gobierno revea:

“De inmediato el esquema económico, político, social e ideológico que lo ha llevado a esta situación, pues, si no lo hace, sólo él será responsable del caos político y de la crisis que el marxismo, con sutileza, sigue preparando, en acechanza del poder [...] Debemos resguardar las libertades, los derechos y las garantías establecidas por la Constitución Nacional. Debemos restaurar el orden y la autoridad necesarios para la convivencia. Debemos asumir plenamente el hecho de que se está librando una guerra decisiva y de que no somos ni podemos ser ajenos a ella, y que esa guerra se libra en muchos frentes, unos visibles, que son regados por la sangre de nuestras heroicas Fuerzas Armadas, otros disimulados y más peligrosos aún, como la infiltración en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, como así también en la Administración Nacional.

“Por ello es que los convoco para que desde hoy tomemos la más firme determinación de luchar en todos los frentes. Debemos apoyar la acción gremial de todas las entidades representativas de cualquier sector sano del empresariado nacional que se identifiquen con nosotros en sus ideologías y coincidan en la defensa del principio de la libre empresa. Con esta intención es que integramos la Asamblea Empresaria [APEGE].”

Finalmente, cerró exhortando a los productores a continuar en la lucha:

“Deberemos apelar a todas nuestras reservas, porque ya nadie deja de percibir que lo que está aquí en juego no es un triunfo electoral o el predominio de un grupo sobre otro, sino toda una manera de concebir la vida, que determinará el mundo sombrío o brillante en el que deberán crecer nuestros hijos: el del colectivismo o el de la libertad.”¹⁵⁴

Los peligros que tenían aparecen claros: lo que está en juego son las propias bases de la sociedad capitalista. La lucha se acercaba

¹⁵⁴ *La Nación*, 13/12/75.

a momentos decisivos, y dado que la inoperancia del gobierno jugaba en favor de los “enemigos de la patria”, había que terminar con el gobierno.

El Partido del Orden: la creación de APEGE

En el marco de la ofensiva de la clase dominante contra el gobierno democrático, algunas de sus fracciones conformaron la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que se constituyó en el núcleo del Partido del Orden.¹⁵⁵ Los primeros acercamientos de las organizaciones que la conformaron datan de fines de 1974 y de los primeros meses de 1975. Uno de ellos es el Comité de Acción Agropecuaria, al que ya nos referimos. Otro acercamiento se produjo a mediados de marzo de 1975. El nucleamiento, que se conoció con el nombre de Comité de Acción Empresaria, surgió como respuesta a una medida del gobierno: uno de los puntos del acuerdo denominado “Gran Paritaria Nacional”, que establecía un aporte empresario del 1,5 por mil sobre sueldos, destinado a financiar a la CGT y la CGE. El rechazo a la medida unificó a las corporaciones que no estaban enroladas en la CGE, y más allá de que el eje articulador era la defensa de sus intereses económicos, tenía un cariz político, ya que también implicaba el rechazo al programa político reformista que se expresaba en la coalición CGE-CGT que sostenía al gobierno. Entre las entidades que conformaron este comité se encontraban la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Cámara de Sociedades Anónimas (CAMSOCANON), Cámara de Comercio Automotor, Unión Comercial Argentina (UCA), CRA y SRA. El Comité se limitó a denunciar la medida y a recomendar a los empresarios el inicio de

¹⁵⁵ Retomamos aquí el concepto esgrimido por Marx para denominar al agrupamiento que surge en los momentos decisivos de la lucha de clases expresando los intereses fundamentales de la clase dominante, es decir, eliminar a los revolucionarios y reestablecer el orden social burgués. Ver: Sartelli, Eduardo et al.: “Gramsci, la vida histórica y los partidos. En busca de una teoría marxista de la política”, en *Razón y Revolución*, Nº 4, otoño de 1998.

acciones judiciales frente a cualquier intento de cobrar el aporte. Finalmente, terminó desapareciendo de la escena pública cuando el gobierno descartó la cuestionada medida, aunque la confluencia sirvió de base para un nuevo acercamiento algunos meses más tarde.¹⁵⁶

El origen formal de APEGE se remontaba a agosto del '75, y parece ser un producto directo del fracaso del plan económico de Celestino Rodrigo. Como señalamos, este hecho constituyó un punto de inflexión, que sacudió a la burguesía y la puso en pie de guerra: fue la constatación de que la salida a la crisis de acumulación solo podría alcanzarse si previamente se derrotaba en el plano militar a la clase obrera y a su vanguardia. Como veremos, este va a ser el programa de APEGE.

El punto de partida del agrupamiento fue una reunión mantenida por los dirigentes de CAMARCO, UCA, Cámara Argentina de Comercio (CAC) y CARBAP. Al poco tiempo se sumaron SRA, CAMSOCANON, ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos), COPAL (Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines) y la Bolsa de Comercio. Ya para septiembre las entidades adheridas (de orden nacional, provincial o regional), llegaban casi a un centenar. Las cámaras que la integraban le otorgaron a APEGE, según *La Nación*, la representatividad de casi la totalidad del comercio y el sector agropecuario, aunque no se habían sumado todavía muchos industriales, que continuaban bajo la órbita de la CGE.¹⁵⁷

Según uno de sus dirigentes, los principios que los agrupaban eran: “la libertad de asociación, la defensa de la iniciativa privada, y la dignidad del ser humano”.¹⁵⁸ Otro dirigente declaró que la entidad

¹⁵⁶ *La Nación*, 22/3/75.

¹⁵⁷ *La Nación*, 19/9/75; Acuña, op. cit.

¹⁵⁸ *La Nación*, 15/9/75.

se constituyó “más en contra de algo que a favor de algo”. Hacía referencia a que uno de los puntos de acuerdo era la oposición a la CGE, y por extensión, a la política de concertación obrero-industrial promovida desde el gobierno. Las coincidencias básicas podrían resumirse, según la fuente, en las demandas de estabilidad monetaria, restablecimiento de la “jerarquía y de la moral”, puesta en práctica de un sistema económico “lógico”, y retorno al orden y la seguridad internos.¹⁵⁹

Para mediados de septiembre la entidad ya se había dado una dirección, el Secretariado Ejecutivo. Estaba constituido por representantes de algunas de las cámaras empresarias más importantes del país: Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Cámara Argentina de Comercio, Federación Industrial de la Provincia de Córdoba, Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Sociedades Anónimas y Unión Comercial Argentina.¹⁶⁰

Hacia fines de octubre se realizó una reunión plenaria en donde se votó un programa. El documento comenzaba caracterizando la situación del país, al que consideraban sumergido en una “gravísima crisis”, que no era sólo económica sino también ética, política y social:

“La pérdida del principio de autoridad, la indisciplina, la inmoralidad, la incompetencia y la falta de seguridad para personas y bienes visibles son síntomas de un proceso de descomposición que urge remediar si deseamos sobrevivir como Nación.”¹⁶¹

El intervencionismo estatal, la burocratización creciente y la

¹⁵⁹ *La Nación*, 19/9/75.

¹⁶⁰ Ídem.

¹⁶¹ *La Nación*, 23/10/75.

subversión, que el gobierno apañaría, serían los responsables de esta situación. Sin embargo, el conjunto de las instituciones democráticas debían rendir cuentas:

“La universidad no encuentra formas adecuadas de normalización, [...] el Poder Legislativo se debate infructuosamente alrededor de problemas de pequeña política; el Ejecutivo no acierta a programar una estrategia y el Judicial ha llegado a una lentitud e inoperancia insólitas.”¹⁶²

Finalmente, se exigía una serie de medidas para sacar al país de la crisis, que podrían resumirse en: a) eliminar los factores que impedían aumentar la productividad, tanto jurídicos como sindicales; b) recortar el gasto público para enfrentar la inflación; c) liberación de precios y del comercio exterior.

Este programa fue refrendado por las bases empresarias en tres asambleas simultáneas que se realizaron el 13 de diciembre, en Rosario, Bahía Blanca y Córdoba. Lo que demuestra que, a diferencia de lo que muchos suponen, no estamos frente a organizaciones personalistas o anquilosadas, sino que buscaron y consiguieron el apoyo de sus bases. Las asambleas fueron convocadas bajo las siguientes consignas: “defensa de la empresa privada como fuente de trabajo y progreso”, por “la restauración del orden y la seguridad”, “y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales”. En la asamblea de Bahía Blanca pronunciaron discursos el presidente de FEBA (Félix Villareal), el presidente de CARBAP (Jorge Aguado), Osvaldo Cornide, por la Unión Comercial Argentina, Juan Pirán de la SRA y Federico Peña, presidente de la Cámara de Sociedades Anónimas de Buenos Aires. En Rosario intervino Jorge Zorreguieta, dirigente de SRA y CRA, y en Córdoba asistieron los dirigentes nacionales Jorge Sabaté, presidente de la Unión Comercial Argentina, Celedonio Pereda, titular de la

162 Ídem.

SRA, y César Polledo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Las exposiciones se refirieron negativamente a la situación social y económica. Se pronunciaron en defensa de la empresa privada, criticaron el avance de la violencia y de la subversión, denunciaron el avance del estatismo, la corrupción moral y material, el avance de los grupos sindicales en “expresa contravención de las normas constitucionales” y ostentando “privilegios irritantes”.¹⁶³

Los documentos votados, similares en las tres asambleas, finalizaban con un llamado a la acción en defensa de sus intereses y con la declaración del estado de alerta empresario. También advertían sobre la falta de autoridad del gobierno, la sumisión a los dirigentes sindicales, su incapacidad para revertir la situación y que, de no mediar cambios profundos, el país iba “camino al marxismo”. Citamos *in extenso* la declaración de la Asamblea de Bahía Blanca, que expresa cabalmente el programa de APEGE:

“Visto: 1º.- La gravísima crisis económica, ética, política y social; 2º.- La falta de seguridad física y jurídica; 3º.- El desorden, la indisciplina, la inmoralidad, la incompetencia; 4º.- El intervencionismo estatal y la burocratización creciente; 5º.- La inflación endémica, la especulación y la corrupción; 6º.- Que la iniciativa y la empresa privada están sucumbiendo y que la productividad desciende a niveles alarmantes y que la propiedad se encuentra amenazada; 7º.- Que el país continúa su camino hacia el marxismo; 8º.- Que el país no sólo se estanca sino que retrocede; el nivel de vida de la población en general desciende; los salarios reales de los obreros bajan; las utilidades de las empresas disminuyen, desaparecen o se convierten en quebrantos; 9º.- La necesidad de restaurar el funcionamiento pleno de la justicia y garantizar la actuación de los magistrados; y 10º.- La necesidad de respetar las libertades y derechos que nuestra Constitución garantiza; y, considerando la manifiesta incapacidad del Gobierno para asegurar el derecho constitucional y crear las condiciones que permitan el progreso individual y nacional.

“La sumisión del poder estatal a dirigentes sindicales, con el otorgamiento

¹⁶³ *La Nación*, 14/12/75.

de privilegios en expresiva contradicción con las normas constitucionales.

“La vigencia de un sistema económico que no recompensa con justicia el trabajo y la producción.

“La prostitución de la moneda, que ha dejado de ser un signo objetivo de valor para constituirse en instrumento de designios demagógicos.

“La corrupción avanzando en los más altos niveles [que] compromete la vigencia de las instituciones y contamina el cuerpo social de la República.

“Por todas estas razones esenciales y su influencia en el devenir argentino, la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, reunida en Bahía Blanca, resuelve: 1º.- Convocar a los empresarios a tomar activa participación a través de sus entidades gremiales representativas en la defensa de los principios, derechos y garantías de las personas y del interés nacional; 2º.- Declarar en estado de alerta de los empresarios argentinos ante las graves circunstancias que vive la República.”¹⁶⁴

Mientras APEGE y las corporaciones de la burguesía que la integraban avanzaban en su acción de desgaste del gobierno democrático, encolumnando al conjunto de la burguesía tras su estrategia y buscando neutralizar cualquier atisbo de resistencia al golpe, el “personal técnico” que llevaría a cabo el programa, los militares que encabezaron el golpe, fueron ubicándose en sus posiciones.¹⁶⁵ Por debajo de la mesa, civiles y militares ultimaban detalles. Algunas de estas negociaciones han trascendido, como la reunión que mantuvo el Comandante en Jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, en noviembre de 1975, con dirigentes de SRA. Allí los dirigentes empresariales manifestaron la preocupación por el avance de la “subversión”, a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno: “La baja rentabilidad al productor

¹⁶⁴ Ídem.

¹⁶⁵ Hablamos en este caso de “personal técnico” para diferenciarlo de los “intelectuales” (en el sentido gramsciano) que elaboraron el programa que los militares pusieron en práctica. Intentamos demostrar en este acápite que el programa del Proceso de Reorganización Nacional fue elaborado por las corporaciones de la burguesía que constituyeron APEGE.

[...] constituye un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de concepciones extremistas; existen constancias de penetración subversiva a nivel de los productores medianos y pequeños, a través de entidades que constituyen ramas políticas del extremismo colectivista”.¹⁶⁶ El enemigo mayor, la “subversión”, si no brotaba del propio gobierno, por lo menos no era enfrentado decididamente desde allí: “La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos”.¹⁶⁷ El intento gubernamental de sancionar una nueva reforma impositiva a fines de 1975 constituyó el factor aglutinante que unificó a la burguesía en una acción política común contra el régimen democrático. Fue la gota que rebalsó el vaso. El 20 de diciembre se publicó una solicitada de APEGE en la que denunciaba el paquete de leyes impositivas como un nuevo “avance fiscalista”, que agravaría el deterioro y la desinversión que padecía la economía nacional. Señalaba a su vez, que el fin principal de esos recursos tributarios sería el “mantenimiento de los gastos improductivos ajenos al interés general”. La solicitada finalizaba amenazando con un lock out:

“La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, que ha declarado el estado de alerta de los empresarios, advierte a los Poderes Públicos que la sanción de estas medidas, junto a los desmesurados aumentos impositivos de provincias y municipios, provocará reacciones y medidas que el empresariado no desea pero a las que habrá de recurrir en defensa de su supervivencia.”¹⁶⁸

166 Sociedad Rural Argentina: *Memoria y Balance*, 1976.

167 Ídem.

168 *La Nación*, 20/12/75.

La demanda escondía, como puede verse en otra declaración de APEGE del mismo período, la exigencia de un viraje político y económico que el gobierno no parecía estar en condiciones de realizar:

“Es unánime la posición de todo el empresariado sobre la necesidad de atacar en sus raíces los males que afectan a la Patria. Sólo una acción enérgica y un cambio profundo podrán modificar la actitud de desconfianza, desorientación, falta de autoridad, ausencia de seguridad y orden en que viven los argentinos. “Cumplida esta condición fundamental, deberá encararse una drástica modificación del esquema económico-social que nos está llevando al derrumbe como Nación.”¹⁶⁹

La declaración señalaba que sus reclamos eran “innumerables”, y que se referían a leyes ya votadas y a otras en proceso de sanción: “[hay] iniciativas, disposiciones y decretos que parecen dictados con la voluntad de crear el caos y la catástrofe”.

El reclamo por la reforma fiscal fue el motivo de una reunión de los directivos de APEGE con el ministro de Economía el 9 de enero de 1976. Sin embargo, el encuentro no conformó a los empresarios, que un día después convocaron a una nueva asamblea empresaria para el 28 de enero, en la que se discutiría el plan de acción.¹⁷⁰ La solicitada con la que se convocó a la asamblea señalaba:

“ES UD. CONSCIENTE de que la REFORMA IMPOSITIVA propuesta por el Poder Ejecutivo, el AVANCE SINDICAL provocado y estimulado por una legislación laboral que fomenta la improductividad y la HIPERINFLACIÓN que deteriora en forma incontenible [los ingresos] de trabajadores y empresarios, conducen inexorablemente a la DESTRUCCIÓN DE LA EMPRESA PRIVADA, el CIERRE DE LAS FUENTES DE TRABAJO, a la DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN y a la DECADENCIA MORAL Y MATERIAL DE TODOS LOS

169 Ídem.

170 *La Nación*, 10 y 11/1/76.

HABITANTES DE NUESTRO PAÍS?¹⁷¹

La asamblea reunió a por lo menos 700 empresarios, la gran mayoría en representación de corporaciones de primer y segundo grado. Allí se resolvió, por unanimidad, que si en un plazo breve (entre una semana y un mes), el gobierno no satisfacía los reclamos, “modificando sustancialmente la actual política económica, se dispondrá un paro general patronal, la suspensión del pago de impuestos y la retención de cargas fiscales, aportes sindicales y otros gravámenes”. La resolución de la asamblea facultaba al Secretariado Ejecutivo para disponer las medidas acordadas. APEGE se declaró en “estado de movilización” y, entre otros objetivos, se requirió “el restablecimiento del orden y la seguridad, la supresión de obstáculos legales que afectan a la producción, la productividad y la comercialización, el aliento a las exportaciones, la contención de la inflación y la adopción de medidas impositivas que alivien la presión tributaria”.¹⁷²

Roberto Meoli, secretario de APEGE y dirigente de la Cámara de la Construcción, abrió la asamblea criticando a la CGE, al mismo tiempo que caracterizaba negativamente al gobierno y señalaba la profundidad de la crisis:

“Este nucleamiento [APEGE], sin estructura vertical, sin agremiación compulsiva, sin aportes obligatorios, sin compromisos políticos, ha venido a llenar un prolongado vacío en la expresión empresaria global existente hasta su aparición, tras un largo y penoso período en que la única voz que se escuchaba es la que está comprometida con el esquema colectivista, estatizante y demagógico que padecemos, razón y origen del descalabro económico, político, social y moral que amenaza nuestra propia subsistencia como nación”.¹⁷³

¹⁷¹ *La Nación*, 27/1/76. Las mayúsculas corresponden al original.

¹⁷² *La Nación*, 29/1/76.

¹⁷³ Ídem.

El ataque contra la CGE se expresó violentamente en las declaraciones de otros dirigentes. Osvaldo Cornide, de UCA, sostuvo que la CGE (“los empresarios” que se sentaron en la “mesa de deliberaciones con el gobierno y la CGT”), no era más que “una camarilla de delincuentes, muchos de los cuales ocupan cargos oficiales”. El presidente de FEBA señaló que la situación imperante tenía “una fecha de nacimiento, el 25 de mayo de 1973, y un responsable: José Ber Gelbard y su camarilla. [El ministro de Economía] Cafiero actúa como bombero que arroja nafta en lugar de agua para apagar un incendio”.¹⁷⁴ La virulenta disputa con la CGE expresaba la lucha por ganar a los empresarios que todavía la apoyaban para el programa golpista.

Más allá del enfrentamiento con los empresarios afines al gobierno, la discusión en la asamblea pasó por dos ejes. En primer lugar, la hiperinflación, que se achacaba al excesivo gasto público. Atado a eso iban las críticas a la reforma fiscal impulsada por el gobierno, a la que consideraban una forma de financiar los desmesurados gastos del Estado. El otro tema excluyente fue el “avance sindical”, apañado por una legislación permisiva que sería la causa de la caída de la productividad e incidiría también en el crecimiento de la inflación. Jorge Zorreguieta, dirigente de la SRA y futuro funcionario de Videla, señaló en la asamblea:

“El problema laboral está muy ligado al de la producción [...] Existen dos factores determinantes: instrumentos legales inadecuados, como la Ley de Contrato de Trabajo, y la presión por parte de las comisiones internas y elementos subversivos que impiden que al menos se cumpla con lo que el Gobierno pacta en el más alto nivel”.¹⁷⁵

El temor de los patrones quedó plasmado en la frase de otro

¹⁷⁴ Ídem.

¹⁷⁵ Ídem.

asistente: “nuestro mayor enemigo es la anarquía, que constituye el paso previo al colectivismo comunista”. La asamblea otorgó mandato al Secretariado Ejecutivo para convocar a un lock out, cuya fecha se fijó para el 16 de febrero de 1976.

A lo largo de las dos primeras semanas de febrero fueron llegando adhesiones de distintas cámaras al lock out, votadas en centenares de asambleas a lo largo de todo el país. Muchas de estas cámaras estaban adheridas a la CGE, pero no obedecieron la posición oficial de su dirección de no respaldar la medida. Según los organizadores, las cámaras que adhirieron al paro llegaron finalmente a 1.200, aunque otras fuentes indican un número levemente menor.¹⁷⁶ Lo que nadie discute es el apoyo masivo a la medida, sobre todo en el agro y en el comercio. Según los organizadores, se sumaron el 90% de las cámaras empresarias de todo el país. Las crónicas periodísticas hablan de un acatamiento mayoritario.¹⁷⁷

Desde el gobierno se intentó debilitar el lock out de diferentes maneras. El 14 de febrero se dio a conocer un comunicado oficial en el que se exhortaba al empresariado a levantar el paro, en vista de que podía generar enfrentamientos con los sectores obreros. A su vez, se reservó el derecho de aplicar “todo el rigor de la ley” contra sus instigadores.¹⁷⁸ El domingo 15 de febrero se hizo público un comunicado de la Secretaría de Transporte amenazando con sanciones a las empresas que no prestaran el servicio. Por esa razón, la Federación de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), garantizó el funcionamiento del transporte público y señaló que su adhesión al lock out tendría un carácter simbólico.¹⁷⁹

¹⁷⁶ Kandel y Monteverde hablan de 935 entidades. Kandel, y Monteverde, op. cit.; *La Nación*, 14/2/76.

¹⁷⁷ *La Nación*, 16/2/76.

¹⁷⁸ *La Nación*, 14/2/76.

¹⁷⁹ *La Nación*, 15/2/76.

Algunas de las entidades pertenecientes a la CGE también salieron a atacar el lock out. La Federación de Centros Comerciales de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, por ejemplo, denunció con una nota al ministro del Interior la campaña de APEGE para que los comerciantes se plieguen al paro. La nota pedía que se investigara el origen de los fondos con que se financiaba tal campaña, y que se considerara la posibilidad de iniciar una acción judicial contra la entidad bajo los cargos de sedición y asociación ilícita.¹⁸⁰ Otros grupos políticos se pronunciaron contra la medida de fuerza. El grupo interpartidario denominado Juventudes Políticas (que integraban la Juventud Radical, la Federación Juvenil Comunista y la Juventud Peronista Regional 1, entre otras), calificó al paro de golpista y llamó a los obreros, pequeños comerciantes y campesinos a enfrentarlo.¹⁸¹ También la CGT salió a denunciar el lock out, al que caracterizó como golpista y anti-obrero. En un intento de resistir el paro, la CGT de Mar del Plata anunció que los trabajadores garantizarían el funcionamiento de las actividades “que resulten indispensables”. Llamó a los obreros a presentarse a sus lugares de trabajo, que serían previamente tomados por “brigadas nocturnas”. El comunicado aseguraba que se respetaría la integridad de los bienes, y que la recaudación sería puesta en manos de los empresarios.¹⁸²

Un comunicado de APEGE, dirigido a los trabajadores, salió a discutir la posición de la CGT, señalando que el paro no se hacía contra ellos, sino contra el gobierno y en defensa de los intereses generales. A su vez, señaló que se pagarían los jornales del día de paro, una medida que apuntaba a ganar el respaldo

¹⁸⁰ *La Nación*, 14/2/76.

¹⁸¹ *La Nación*, 16/2/76.

¹⁸² Ídem.

de los obreros.¹⁸³ El domingo 15 los organizadores señalaron, en conferencia de prensa, los motivos que los llevaban al paro:

“Es la reacción ante lo insostenible; algo así como la de un condenado a muerte, que utiliza todos los recursos que le ofrece la ley para salvar su vida.” También se refirieron a las entidades provenientes de la CGE que apoyaron la medida: “Distintos grupos empresarios, sobre todo del interior, no compartieron la política de la central CGE, y así derivaron su descontento hacia APEGE”. Sobre las denuncias de que el paro implicaba un enfrentamiento con los obreros sostuvieron: “No nos enfrentamos con el sector de trabajo; hay que comprender que el empresario también produce y, al defenderse, defiende la fuente de trabajo y el nivel de salario. Por otro lado, con una empresa prospera existe plena ocupación y salarios dignos”.¹⁸⁴

La crónica de *La Nación* señaló que el paro contó con una adhesión casi unánime, y que sólo no se sumaron algunos sectores de la industria.

“Cesaron en su labor todos los establecimientos de comercio, con la excepción previsible de algunos dedicados a la venta de comestibles, farmacias de turno, unas pocas confiterías y bares, estaciones de servicio, negocios de atención turística y las agencias de apuestas. Faltaron funciones de cine y de otros espectáculos hasta las 24 a causa de lo cual, la ciudad careció prácticamente de animación, ya que también cerraron los restaurantes y otros establecimientos con habitual concurrencia nocturna.”¹⁸⁵

La crónica señaló que al promediar la jornada pudo apreciarse que varios establecimientos que no cerraron a la mañana si lo hicieron por la tarde, sobre todo en la zona industrial del oeste y noroeste de la capital, y principalmente, en el Gran Buenos Aires. En Capital Federal, los medios de transporte circularon con una

183 *La Nación*, 15/2/76.

184 *La Nación*, 16/2/76.

185 *La Nación*, 17/2/76.

“notoria merma”. En el cinturón industrial de Buenos Aires “la actividad fue menor a la habitual”. Los grandes establecimientos de firmas extranjeras no participaron del paro, “pero numerosos industriales de pequeñas y medianas empresas en zonas de los partidos de Lanús, Lomas de Zamora, Avellaneda, La Matanza, Morón, San Martín y Tres de Febrero dispusieron el cierre durante la jornada en algunos casos y, en otros, a partir del mediodía”. A media tarde, los establecimientos industriales en Villa Crespo, Chacarita y Colegiales, permanecieron cerrados. En el Gran Buenos Aires los cronistas de *La Nación* estimaban que sólo un 10% de las fábricas trabajaron en forma ininterrumpida. Según FEBA, el paro en el comercio y la industria en la provincia de Buenos Aires superó el 95% de adhesión. En Córdoba los organizadores señalaron que la adhesión osciló entre el 90 y el 100%. Según los cronistas, en la zona céntrica de esa provincia los locales prácticamente no abrieron. Inspectores de la Secretaría de Comercio practicaron más de un centenar de clausuras preventivas en aplicación de la ley de abastecimiento. Uno de los organizadores del paro (del que no se menciona nombre), apuntó que los sucesos “mostraron un hecho insólito: el desborde de las bases empresarias que no acataron los lineamientos impuestos por la CGE nacional”.¹⁸⁶

En el Mercado de Hacienda de Rosario y en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires no se registraron ventas. En el Mercado de Liniers apenas ingresaron 368 animales, que no se pudieron vender por la adhesión de los consignatarios al lock out. Estos números son un indicador de la masividad que alcanzó la medida en el agro, y de que, a pesar de que la Federación Agraria no convocó a la medida, buena parte de sus bases se sumaron a ella.¹⁸⁷

Las cifras de inactividad según APEGE fueron las siguientes:

¹⁸⁶ Ídem.

¹⁸⁷ *La Nación*, 20/2/76.

Capital Federal, Salta, Santa Fe, Chubut, Misiones y Buenos Aires 95%, Catamarca, Río Negro, San Juan, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, San Luis y Córdoba 100%, Corrientes y La Pampa 70%, Formosa y Santa Cruz 90%, Santiago del Estero 80%, Chaco y Jujuy sin información.¹⁸⁸

Durante la jornada de paro se registraron varios atentados con bombas en concesionarias de autos y sedes empresarias. Fueron afectadas cinco concesionarios de FIAT, en donde estallaron bombas en atentados casi simultáneos. Una sexta bomba fue desactivada. También estalló una bomba en la sede central de la SRA, y frente a dos bancos.¹⁸⁹ En los días subsiguientes se denunciaron agresiones físicas a dirigentes empresariales y clausuras en los comercios que se plegaron al lock out.¹⁹⁰

Durante el paro se produjeron dos hechos destacables que expresaron claramente el programa que lo guiaba. En primer lugar, la misa convocada el 16 de febrero por una de las entidades que impulsaron el paro, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Bebidas y Afines (COPAL). La misa estuvo destinada a rendir homenaje a los “empresarios abatidos por la violencia”. El otro hecho fue la decisión de los organizadores de no realizar el paro en la provincia de Tucumán, en donde el Ejército desarrollaba el “Operativo Independencia”:

“Ante la certeza de que la subversión intentaría utilizar este justo acto de protesta para tratar de crear confusión y caos decidimos este renunciamento como aporte al país y contribución al Ejército Argentino en la lucha que mantiene contra la subversión.”¹⁹¹

¹⁸⁸ *La Nación*, 17/2/76.

¹⁸⁹ *Ídem*.

¹⁹⁰ *La Nación*, 21/2/76.

¹⁹¹ *La Nación*, 16/2/76.

El martes 17, un comunicado de la UCA realizaba un balance del paro:

“No se organizó para defender pequeños intereses, sino -y por ello alcanzó tanto eco- para defender las fuentes de trabajo, el poder adquisitivo de la población, el orden, la seguridad y, por encima de todo, la integridad de la Nación misma, seriamente amenazada por la crisis social, la inmoralidad y la subversión.”¹⁹²

A diferencia de los últimos dos paros comerciales agrarios de 1975, impulsados por CRA, FAA y SRA, el lock out de APEGE no tuvo efectos materiales significativos. Los paros agrarios tuvieron una duración tal, 11 y 18 días, que generaron problemas de abastecimiento y el aumento en los precios de la carne, en un contexto económico ya signado por la hiperinflación y el desabastecimiento. No fue el caso del lock out del 16 de febrero. Sin embargo, el impacto político de la medida fue aún más significativo. El apoyo masivo de la burguesía al paro, y por ende, al programa golpista impulsado por APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático había perdido el apoyo de la clase dominante. A su vez, la medida sirvió también para medir el respaldo que aún conservaba el gobierno en la clase obrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el paro golpista ni a respaldar al gobierno, terminó de definir su suerte. El futuro golpe de estado tenía el respaldo de la clase dominante, y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad complaciente de los explotados.

A pesar de que para principios de marzo ya todo estaba dicho, y al golpe de estado solo le faltaba una fecha, APEGE siguió fogueando esa salida, y socavando el poco apoyo que le quedaba al gobierno. A fines de febrero se convocó a un plenario de entidades adheridas, para determinar el rumbo a seguir ante la falta de respuestas

¹⁹² *La Nación*, 18/2/76.

oficiales al lock out del 16. En esa reunión, realizada el 9 de marzo, se dispuso autorizar al Secretariado Ejecutivo para que convoque a un nuevo paro. El discurso pronunciado allí por Armando Braun, de la Cámara Argentina de Comercio, reiteró las demandas:

“Mientras no se restablezca el orden y la seguridad, mientras no se hagan esfuerzos verdaderos para disminuir el déficit fiscal, mientras no se liberen las energías creadoras del pueblo argentino y se remuevan todos los obstáculos que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización; mientras no se ataquen con energía las causas que provocan la inflación, mientras no se tomen disposiciones para asegurar la preservación del salario real de los trabajadores, para alentar y promover el ahorro y la inversión [no habrá] solución posible para los gravísimos problemas económicos que afligen a nuestro país.”¹⁹³

En la declaración votada en la asamblea se señaló que a 24 días del paro no había respuesta a sus reclamos. Que el nuevo programa económico “ha colmado la medida”: “El programa expuesto por el ministro de Economía [Mondelli] constituye un verdadero agravio a quienes hemos clamado por un drástico cambio de actitud”. Señalaron que “ya el país no puede admitir un compás de espera de 180 días, durante los cuales se insiste en medidas que han fracasado estrepitosamente.” Criticaron el control “policial” de precios y el “fiscalismo”. Señalaron que ningún sector del país estaba a salvo del “desgobierno” y que ninguno podía abrigar esperanzas ante esa política.¹⁹⁴ Pero el caos no sería solamente económico:

“Continuarán acentuándose día a día, todos los males que denunciábamos con motivo del paro del 16 de febrero: la corrupción, la inseguridad para las personas y los bienes y el caos social generalizado.

“Por este camino, las acusadas tendencias a la disgregación se hacen cada día

¹⁹³ *La Nación*, 10/3/76.

¹⁹⁴ Ídem.

más fuertes y más difíciles de contener. Es legítimo que nos preocupemos sobre las alternativas posibles de la lucha contra la subversión, pero de poco valen los esfuerzos y el sacrificio de vidas de nuestras Fuerzas Armadas y de seguridad, si deben luchar con el contrapeso de una política que alimenta las causas de la delincuencia subversiva. ¿Será posible seguir combatiendo exitosamente contra la guerrilla en un país azotado por la desocupación, moralmente abatido y hasta con dificultades para el aprovisionamiento de alimentos esenciales?

“Estamos persuadidos de que es momento de definiciones, de comprender, a quienes corresponda, de que hay argentinos que no están dispuestos a permanecer impasibles ante la destrucción de su país y que el rumbo debe ser rectificado de manera clara y definitiva.”¹⁹⁵

Este alegato final parece estar dirigido, más que al gobierno, a las Fuerzas Armadas.

El 20 de marzo CRA, uno de los miembros de APEGE, convocó a un paro nacional ganadero por 9 días, que comenzaría el 27 de ese mes. Unos días después, el presidente de CARBAP, Jorge Aguado, que también impulsaba el paro, señaló:

“Debemos decir que no son las instituciones por sí solas las que van a producir las soluciones para los problemas nacionales, sectoriales o individuales, si quienes las integran no están a la altura de las circunstancias y actúan sólo dominados por minúsculos intereses políticos o materiales. Son los hombres que las integran los que deben salvar a las instituciones para que éstas salven a la República, pero si los hombres no actúan en función del verdadero interés nacional como integrantes de las instituciones, nadie podrá sorprenderse que tanto el gobierno como las instituciones legislativas, políticas, gremiales empresarias o sindicales desaparezcan aplastadas por el peso de su propia incapacidad o inoperancia.”¹⁹⁶

El tono abiertamente golpista de las declaraciones de CARBAP se repitió en un comunicado de FEBA, difundido el 22 de marzo, pocas horas antes de que el golpe encabezado por el General Videla

195 Ídem.

196 Aguado, op. cit., p. 244.

pusiera fin al gobierno de Isabel Perón:

“La crisis que afecta al país llega a su punto límite. La elocuencia de los hechos ha superado todas las previsiones. Nadie espera ya nada de un sistema de poder que no ha tenido ni tiene ninguna respuesta para que los argentinos salgamos de la dramática situación que nos agobia. Hasta quienes hace pocos meses acusaban de agoreros y alarmistas a quienes denunciábamos el carácter y la gravedad de la crisis, hoy pretenden encabezar movimientos de protesta [...] “Corresponde sí, señalar que a esta dramática situación no hemos llegado por casualidad ni como consecuencia de problemas internacionales o designios sobrenaturales. A esta crisis nos condujo la ceguera, la incapacidad y la inmoralidad de una capa dirigente que desde la dirección de entidades empresarias, sindicatos, partidos políticos y organismos públicos elaboró e implementó las medidas que desataron el actual caos.

“Por eso, no es cierto que los problemas argentinos no tengan solución. La tienen si en primer lugar se restablece el orden y la seguridad para las personas y bienes. Si se sanciona a los delincuentes que utilizaron la función pública o el poder gremial para enriquecerse y se devuelve la fe a los argentinos. Si se toman las medidas para que la inversión y el trabajo sean gratificados en lugar de perseguidos. Si se demuestra al país que existe un gobierno y un Estado con las mínimas condiciones de autoridad y seriedad. Si se encaran los problemas de fondo como los del gasto público o de las industrias básicas con realismo y no con palabrerías. Si, en suma, se zafa a la Nación de la varadura en la que la ha introducido la nefasta política económica iniciada en 1973, la actuación de los grupos subversivos y la complicidad conciente o inconciente de un sistema político absolutamente divorciado de las necesidades del país.

“En esta hora de definiciones, el auténtico empresariado nacional sostiene que la situación es dramáticamente grave, pero que el país tiene reservas orgánicas para revertir la situación y encamilarlo a un futuro de grandeza.”¹⁹⁷

De esta manera se cerraba un capítulo de la historia argentina, que había comenzado a escribirse bastante antes. A lo largo de los últimos meses de 1975 y los primeros de 1976 se fueron ubicando en sus puestos los militares que encabezaron el golpe contrarrevolucionario de marzo. El personal técnico que ejecutó

¹⁹⁷ *La Nación*, 22/3/76.

un programa cuya gestación era previa. El programa delineado por APEGE, dirección moral y núcleo del Partido del Orden, en septiembre del '75. Un programa que tenía cuatro ejes claros. En primer lugar, restablecer el orden, eliminando a la subversión. En segundo lugar, y asociado a este, eliminar aquellos elementos que en las fábricas, dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad. Se referían a los instrumentos legales y organizativos de los que se valía la clase obrera para impedir el aumento de la explotación, y en particular, a las comisiones internas dominadas por la izquierda revolucionaria. En tercer lugar, se apuntaba a un recorte de los gastos estatales y eliminar los aumentos de impuestos que servían para financiar el déficit fiscal. Es decir, se oponían a destinar parte de la plusvalía a sostener empresas ineficientes y transferencias hacia la clase obrera. Por último, con un objetivo similar al del punto anterior, se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior. Los mecanismos con los cuales el Estado se apropiaba de la renta, subvencionaba el consumo y protegía a una industria incapaz de competir.

En los meses siguientes el partido se organizó: se sumaron corporaciones, se discutió en asambleas el programa y el plan de lucha, y se enfrentó ideológicamente al programa alternativo sostenido por algunas fracciones de la clase dominante, el reformismo encabezado por el gobierno peronista y la CGE. En ese proceso el Partido del Orden fue creciendo, al calor de las distintas fracciones y capas de la burguesía que sumaban su apoyo. Se tejieron los lazos con el personal técnico que llevaría a cabo las tareas planteadas, los militares. Y cuando todo estaba listo, se emprendió la ofensiva final contra el gobierno: el lock out del 16 de febrero. Esa demostración sirvió además como globo de ensayo: medir el apoyo de la burguesía al programa, y la pasividad de las

clases dominadas que no salieron a enfrentar el paro golpista. Luego todo estaba dicho. Poco menos de un mes después, los militares se alzaron con el poder.

La descomposición de la alianza reformista: el final de la CGE

Acompañando la ofensiva golpista, un considerable número de corporaciones empresarias regionales se fueron desafilando de la CGE entre septiembre y diciembre de 1975, criticando su respaldo al gobierno y sumándose a las filas de APEGE. COPAL, conformada en estos meses con cámaras provenientes de la CINA, confluyó desde la primera hora de APEGE. También el Movimiento de Unidad Industrial (MUI), integrado entre otras cámaras por la ADIC, que pertenecía a la CINA, resolvió en diciembre de 1975 “apoyar las reuniones organizadas por APEGE”.¹⁹⁸ Otro miembro del MUI, FEBA, que se desafiló de la CGE en 1973, participó de las reuniones en las que se conformó APEGE y formó parte de su dirección.

En septiembre de 1975, dos entidades vinculadas con la actividad del sector agropecuario se desafilieron de la Confederación de la Producción de la CGE: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Unión General de Tamberos.¹⁹⁹ De esta forma la CGE perdía a las últimas corporaciones de la burguesía agraria que permanecían bajo su égida. La más importante de ellas, la Federación Agraria Argentina, se había desafilado de la corporación nacional a mediados de julio de ese año. Su desafiliación, como vimos, fue el resultado de un largo proceso de enfrentamiento con el gobierno nacional a raíz de los precios agrarios fijados oficialmente, que la había llevado a confluir con CRA y SRA en cuatro de los cinco paros agrarios nacionales realizados ese año.²⁰⁰

Desatada la ofensiva final de la alianza golpista, la sangría se profundizó. Una de las disidencias más importantes fue la de

¹⁹⁸ *La Nación*, 12/12/75.

¹⁹⁹ *La Nación*, 8/9/75.

²⁰⁰ *La Nación*, 15/7/75.

las confederaciones económicas de las provincias del nordeste argentino, todas ellas regionales provinciales de la CGE, que posteriormente conformarían el MEDI. Como vimos, el movimiento disidente comenzó a gestarse en oposición a la concertación acordada por la CGE con el ministro de Economía Cafiero. La oposición había sido impulsada por la Federación Económica de Tucumán, que buscaba acaudillar la oposición de otras regionales a la dirección nacional de la entidad y a su política de concertación con el gobierno peronista.

En diciembre de 1975, estas federaciones publicaron una solicitada en la que criticaban duramente la política económica del gobierno, y se posicionaron en contra de que la CGE mantuviera su apoyo. Firmaban la nota la Federación Económica de Catamarca, Confederación Económica de Jujuy, Confederación Económica de Misiones, Federación Económica de Mendoza, Federación Económica de San Juan, Confederación General Económica de Salta, Confederación General Económica de Santa Cruz y la Federación Económica de Tucumán.

El objetivo de la solicitada era “plantear, en lenguaje claro, simple y descarnado, el análisis de la realidad económica actual, que es la resultante de la política económica aplicada a partir de mayo de 1973, que ha empobrecido al país, sumiéndolo en la angustia y la desesperanza”. Señalaron que salían a hacer públicas sus posiciones “convencidos de que los plazos están definitivamente vencidos”, ante la falta de una autocritica por parte de los dirigentes de la CGE nucleados en torno a Gelbard y los intentos por reflotar una “filosofía económica” que había fracasado. Según su balance, quienes asumieron el poder en 1973 contaban con un escenario propicio para relanzar la economía, ya que tenían el apoyo de las masas y “un aparato productivo potencialmente apto”. A pesar de la inflación, el país había acumulado reservas y significativos saldos

exportables agrícolas, en un mercado con demanda creciente.

“Es decir, [...] estaban dados todos los elementos para iniciar con adecuadas medidas de Gobierno, el gran despegue hacia la Argentina Potencia [...] Pero en mayo de 1973 comenzó a aplicarse una política económica de neto corte estatizante, que buscando redistribuir una riqueza que no ayudó a generar, condujo al gradual deterioro del aparato productivo. Los resultados están a la vista.”

Entre los “nefastos” resultados de la política económica peronista se señalaba: “lucha de clases, fortalecimiento de la subversión”; “se llevó la política de distribución del ingreso hasta el límite de paralizar el proceso de inversión”; descapitalización de la empresa privada, inflación, “disminución de la eficiencia, de la productividad y del empleo de los recursos disponibles”; “desaliento de la actividad empresarial”; “macrocefalia e hipertrofia del aparato estatal”; “avance de las funciones estatales sobre la iniciativa privada”; “ineficiencia del aparato estatal”. Confrontaban, a su vez, con lo que calificaban como una “filosofía importada, colectivizante y estatizadora, que tiende a anular los valores más trascendentes de la personalidad y el estilo de vida de los argentinos”. Exhortaban a todos los empresarios del país a tomar una participación activa y militante en los organismos de base del Movimiento Confederal (CGE). Es decir, a luchar por la dirección de la CGE, que estaba en manos de aquellos que habían ideado, en 1973, el plan económico que llevó al país al borde de la ruina. Finalizaban señalando:

“Será necesario entonces, que cada hombre asuma en la hora crítica, las responsabilidades constructoras, así como lo están haciendo las Fuerzas Armadas frente a la subversión. PORQUE EL FUSIL POR SI SÓLO NO SERÁ SUFICIENTE, todo argentino, en el marco de sus actividades, ya sea tomando posición, definiendo pensamientos, y superando ese extraño acto de autodestrucción, que tan sutilmente lograron deslizar los extremismos en el pensamiento de los argentinos, deberá ser el protagonista de una auténtica

creación de la Patria que todos, con justicia, aspiramos a realizar.”²⁰¹

Las coincidencias con el programa de APEGE son evidentes. La exhaustiva campaña emprendida por los empresarios golpistas, para horadar las bases de la CGE y arrebatar el apoyo de estas fracciones de la burguesía al gobierno estaba surtiendo efecto. Ante la profundización de la crisis, el reformismo fue perdiendo apoyo entre los empresarios, y su expresión corporativa, la CGE, comenzó a desmembrarse. No fue casual entonces, que fueran estas regionales de la CGE las que, desobedeciendo la línea oficial de la dirección nacional, se sumaron en febrero de 1976 al lock out impulsado por APEGE.

También en diciembre, la Federación de Asociaciones de Bancos Argentinos, que reunía a dos instituciones de la banca privada nacional (ADEBA -Asociación de Bancos Argentinos- y la Asociación de Bancos del Interior), resolvió desafiliarse de la CGE y conformar la Unión de Entidades Financieras Argentinas (UDEFA).²⁰² Como vimos, ADEBA terminó ingresando a APEGE. La decisión de APEGE de pasar a la acción, convocando a un lock out para el 16 de febrero de 1976, terminó de definir la suerte de la CGE. A la crisis interna de la entidad se sumó la atracción que ejercía el polo de los empresarios golpistas, generando una ola de desafiliaciones e indisciplina dentro de la entidad reformista, con decenas de cámaras y federaciones que decidieron sumarse al lock out a pesar de la línea contraria planteada por la dirección nacional de la CGE. Asistimos, de esta manera, a un proceso de descomposición de la entidad, que no es más que una expresión de un proceso más general: la descomposición de la alianza reformista y la polarización social en torno a dos alternativas: la revolución

²⁰¹ *La Nación*, 12/12/75.

²⁰² *La Nación*, 19/12/75.

o el golpe militar contrarrevolucionario.

A principios de febrero de 1976 una asamblea de la filial bonaerense de la CGE realizada en Olavarría, con la presencia de más de 100 delegados, condenó severamente la política económica del gobierno y se dispuso ejecutar “medidas concretas de protesta, incluyendo un paro general de actividades en todo el territorio de la provincia”. A su vez, se dispuso sustentar esa posición crítica en el seno de la conducción nacional de la CGE. En la declaración se caracterizó negativamente la situación económica, siendo expresión de ello la caída de la productividad y de la producción, la iliquidez, la hipertrofia de la burocracia estatal y la “anarquía laboral”, entre otras.²⁰³

Mientras tanto, el Consejo Superior de la CGE debatía para consensuar una declaración sobre la situación política, que dé respuesta a la inquietud de las bases ante el inminente anuncio del paro de APEGE. Sin embargo, las diferencias internas primaron. La reunión se dilató por las discusiones que surgieron en torno al énfasis en la crítica a la política económica oficial y a las propuestas de acción.²⁰⁴ Finalmente, la CGE resolvió declarar el estado de emergencia nacional, en un documento que expresó sus críticas al gobierno y que disponía la posibilidad de convocar a medidas de protesta, que serían resueltas oportunamente por su conducción. El documento emitido condenaba la inflación, a la que no se atacaría correctamente, y criticaba el aumento de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, que se sostendrían en el incremento de los impuestos. También se refirió negativamente al “desorden laboral”, alentado por la Ley de Contrato de Trabajo y por la actitud parcial del Ministerio de Trabajo. Llamaba, en ese sentido, a “reestablecer la disciplina en la producción”. Por

²⁰³ *La Nación*, 2/2/76.

²⁰⁴ *La Nación*, 3/3/76.

último, criticó la “inseguridad empresarial, fruto de la violencia reiterada”.²⁰⁵ El documento demandaba que:

“[El] gobierno asegure el orden, el respeto y la tranquilidad física y jurídica del empresario; la modificación de la ley de Contrato de Trabajo y de todas aquellas normas legales que atentan contra la productividad y el desenvolvimiento de las empresas, junto con una política laboral que preserve la neutralidad del Ministerio de Trabajo y [el] trato equitativo para sectores laborales y empresarios; que se eviten los enfrentamientos estériles entre sectores; [...] la necesidad de implantar un programa coherente de contención del proceso inflacionario, de incremento de la productividad y de la inversión privada productiva, y la aplicación de una política salarial coordinada con la estabilización económica y el incremento de la producción.”²⁰⁶

También solicitaba la “reducción severa” de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales; la reducción de las cargas impositivas y de los sistemas de indexación; la derogación de las normas legales que trababan la comercialización y la producción; la instauración de una política crediticia; la fijación de precios retributivos, pagados en tiempo y forma. En suma, la CGE hacía propias las exigencias de APEGE, aunque no se planteaba una confluencia con aquella entidad. Anunció que convocaría a medidas de fuerza, como cierres de comercios y manifestaciones. El criterio de aplicación sería progresivo, y sus alcances y efectos, controlados. El miércoles 11 de febrero la Confederación Industrial Argentina (CINA), publicó una solicitada en la que caracterizaba la situación como “grave emergencia nacional”, y sostenía que estaba en peligro la Nación misma. Señalaba, a su vez, que era necesario detener el “desborde de poder” del sindicalismo. La reversión del proceso demandaría el sacrificio de todos, pero, sin embargo “es imprescindible deponer toda actitud tendiente a defender sólo el

²⁰⁵ *La Nación*, 4/2/76.

²⁰⁶ *Ídem*.

interés sectorial por encima de los intereses de la Nación toda”. Esta frase era una clara referencia al paro de APEGE, al que explícitamente la CINA no adhirió.²⁰⁷

Las concesiones discursivas efectuadas por la dirección de la CGE no alcanzaron a contener la sangría que estaba sufriendo. La atracción que ejercía el programa de APEGE, y la desconfianza generada por una dirigencia que había avalado la política oficial hasta no mucho tiempo atrás, pesaron más. Durante las dos primeras semanas de febrero una cantidad importante de corporaciones se desafilieron de la CGE, criticando a su dirección y plegándose al plan de lucha de APEGE. El 6 de febrero se hizo pública la desafiliación de la Liga de Comercio, Propiedad e Industria de Punta Alta y su adhesión al lock out del 16.²⁰⁸ El 7 de febrero la Corporación de la Industria y el Comercio de Bahía Blanca resolvió desafilarse de la CGE en una asamblea en la que se “juzgó severamente” a los dirigentes nacionales por su responsabilidad en la política de control de precios, las leyes de abastecimiento, los códigos de trabajo y por ocupar cargos políticos en el gobierno.²⁰⁹ La Cámara de la Industria Curtidora Argentina resolvió desafilarse de la CGE y de la CINA el 11 de febrero, señalando que “dichas entidades han desvirtuado los auténticos principios del empresariado nacional al haber avalado una política económica que llevó al país al caos actual”. Declaró apoyar los principios de APEGE y adhirió al paro.²¹⁰ También se desafilieron el Centro de Industria y Comercio de Río Colorado,²¹¹ la Cámara Comercial e Industrial de Tandil, la Cámara Empresaria

²⁰⁷ *La Nación*, 11/2/76.

²⁰⁸ *La Nación*, 6/2/76.

²⁰⁹ *La Nación*, 8/2/76.

²¹⁰ *La Nación*, 12/2/76.

²¹¹ *La Nación*, 15/2/76.

del Transporte Automotor de Pasajeros²¹² y la Cámara Argentina de Mercerías y Anexos,²¹³ entre otras.

La situación obligó a la CGE a convocar a tibias medidas de protesta, para contrarrestar el efecto causado por el lock out de APEGE. El 11 de febrero se resolvió convocar a una “semana de protesta del empresariado nacional” entre el 21 y el 28 de ese mes. No son casuales aquí las fechas: diez días antes APEGE había anunciado su lock out, que se produciría tan sólo seis días después del anuncio de la CGE. La medida se efectivizaría con la realización de apagones o paros simbólicos, actos públicos y manifestaciones.²¹⁴

A pesar de ello, el desmembramiento de la confederación no parecía tener fin. En los días previos al 16 de febrero se conoció el pronunciamiento de las diez regionales provinciales de la CGE que habían manifestado previamente sus disidencias. Las Federaciones y Confederaciones de Santa Cruz, La Rioja, San Juan, Mendoza, Salta, Jujuy, Misiones, Córdoba, Tucumán y Catamarca, hicieron público que se sumaban a la medida convocada por APEGE. Frente al hecho consumado, la CGE no tuvo más remedio que virar su posición respecto a la medida. Luego de varias solicitudes oponiéndose al paro, finalmente, su vicepresidente primero y su secretario, en conferencia de prensa, anunciaron que “no deseaban entrar en competencias con otras entidades”, y que dejaban en libertad de acción a sus afiliados para que adhieran al lock out.²¹⁵ Luego del un febrero agitado, la crisis interna de la CGE continuó desarrollándose. El 7 de marzo se conoció la renuncia de su presidente y 5 vocales, y algunos días después la convocatoria a

²¹² *La Nación*, 24/2/76.

²¹³ *La Nación*, 17/3/76.

²¹⁴ *La Nación*, 12/2/76.

²¹⁵ *La Nación*, 15/2/76.

un lock out en la Provincia de Buenos Aires, por 48 horas, que tuvo escasa repercusión.²¹⁶ El 14 de marzo se constituyó un nuevo reagrupamiento empresario al interior de la CGE, el Movimiento de Empresarios del Interior (MEDI), integrado por las federaciones y confederaciones de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan y Tucumán (aquellas que se habían sumado al paro de APEGE). El nuevo ente exigió en un documento la renuncia de las autoridades de las tres cámaras que conformaban la CGE: Confederación General del Comercio, Confederación General de la Producción y Confederación Industrial Argentina. A su vez, se exigió la renuncia de la dirección nacional de la CGE. Entre otras razones, argumentaron que esa conducción había avalado las políticas que llevaron al empresariado a la quiebra, “propiciando esquemas ajenos a nuestra mentalidad, imponiendo ideologías estatizadoras y colectivizantes”.²¹⁷ Un día después, la filial Córdoba de la CGE criticó a la conducción nacional de la entidad, señalando que no había defendido a los pequeños empresarios por su alianza con el gobierno, y que eso hacía mermar la confianza de sus bases. Reclamaba de la confederación “auténtica independencia” y la renuncia de sus autoridades.²¹⁸ Es evidente la polarización que suscitó la profundización de los enfrentamientos sociales. En ese escenario, no había demasiado margen para la conciliación, y la CGE pagó el precio con su desmembramiento. La amenaza que pesaba sobre el conjunto de las relaciones sociales merced al avance de las fuerzas revolucionarias, parece haber sido determinante para la unificación de la clase dominante detrás del Partido del Orden. En este proceso de descomposición, muchas de las cámaras

²¹⁶ *La Nación*, 9 y 19/3/76.

²¹⁷ *La Nación*, 15/2/76.

²¹⁸ *La Nación*, 16/2/76.

industriales y federaciones provinciales integrantes de la UIA se realinearon en la estrategia reaccionaria (aunque la sangría sufrida por la CGE excede por largo al de las cámaras provenientes de la UIA), luego del interregno reformista sellado con la unificación en la CINA-CGE.

Después de la tormenta: las corporaciones empresarias y el golpe

La asunción del gobierno encabezado por el General Videla fue apoyado y saludado por todos los sectores empresarios que impulsaron el cambio de régimen para restaurar la hegemonía de la clase dominante. En primer lugar, es necesario mencionar un dato significativo: la disolución de APEGE, que una vez consumado el golpe ya no tuvo razón de ser. En el seno de la burguesía agraria, el golpe fue respaldado unánimemente por todas las corporaciones nacionales. La asunción de Videla fue bien recibida, por ejemplo, por los miembros de CARBAP. Así lo expresaba Jorge Aguado en un artículo publicado en abril del '76 por la revista *Extra*:

“Las fuerzas armadas argentinas han asumido su responsabilidad de tomar el poder para impedir la continuación de un gobierno que, por obra de su incapacidad e inmoralidad, venía sumiendo el país en una profunda crisis social, económica y política”.²¹⁹

Demandaba a su vez el inicio de “un verdadero proceso revolucionario [...] que recupere la vigencia de los grandes principios nacionales”. Señalaba entonces la necesidad de “prepararse [...] para aceptar los cambios concretos que la evolución del país en revolución requiere”. Para lograr esos cambios “la consigna de la hora es la participación activa en todos los aspectos de la vida nacional”.²²⁰

Ese mismo mes, la revista *Confirmado* publicaba otro artículo de Aguado, en el que se señalaba que el gobierno militar había “respondido rápidamente” a “viejas y unánimes demandas de los

²¹⁹ Aguado, op. cit., p. 251.

²²⁰ Ídem, pp. 251-252.

productores agropecuarios”, como la eliminación del “monopolio de comercialización” estatal. Por esa razón manifestaba su “optimismo” frente al nuevo gobierno, y llamaba a los productores, nuevamente, a prestarle su colaboración.²²¹ Posteriormente, CARBAP solicitó algunas “correcciones” a la política económica de Martínez de Hoz, pero manteniendo su apoyo general al Proceso de Reorganización Nacional. Un ejemplo de ello fue el establecimiento de un impuesto de emergencia a la producción agropecuaria en septiembre del '76, que a pesar de las protestas, CARBAP aceptó “como una contribución monetaria de los productores al proceso de recuperación nacional”.²²² Algunos meses antes, cuando el gobierno peronista intentó establecer un impuesto similar, habían puesto el grito en el cielo.

El apoyo de CARBAP a la dictadura no se limitó sólo a estas declaraciones, se materializó en la promoción de sus cuadros a funciones de gobierno. Jorge Girado, ex vicepresidente segundo de la entidad, fue nombrado Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires en 1976. Ya bajo el gobierno del General Viola, Jorge Aguado se desempeñó como Ministro de Agricultura de la Nación, y con Galtieri fue nombrado Gobernador de Buenos Aires. A su vez, ocuparon cargos otros dirigentes que fueron miembros de la mesa ejecutiva de CARBAP: Ignacio García Cuerva fue Subsecretario de Agricultura en 1983; Ricardo Salabarren fue Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires; Héctor Orbea fue Subsecretario de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires en 1981; y Jorge Zorreguieta (que también fue un destacado dirigente de SRA), fue subsecretario de Agricultura de la Nación entre 1976 y 1979, y ascendiendo a secretario de la misma

²²¹ Ídem, p. 247-248.

²²² Ídem, p. 299.

cartera entre 1979 y 1981.²²³

La Sociedad Rural Argentina, por su parte, saludó el golpe militar con estas palabras:

“Vuestra Excelencia y los demás oficiales del Ejército, la Armada, y la Fuerza Aérea han encarado la difícil misión de revertir la decadencia argentina. Todo ciudadano responsable desea ver a nuestro país convertido definitivamente en una nación moderna, en donde las normas y valores morales e intelectuales tengan plena y permanente vigencia.”²²⁴

El balance hecho en su *Memoria y Balance* de 1976 fue muy claro respecto a la situación imperante bajo el gobierno democrático y sobre la necesidad de liquidar esa experiencia:

“Durante el período 75-76 el país presenció posiblemente su más grande convulsión social, política y económica desde la época de la Organización Nacional. Estos trastornos, consecuencia de un régimen demagógico y populista, llevaron al país casi al borde de su disolución, desgracia que pudo ser evitada debido a la intervención militar del 24 de marzo, destinada fundamentalmente a reencausar el país en el camino de la ley, de la responsabilidad, de la verdad [...] El problema en su esencia fue la ausencia de autoridad. La intervención militar del 24 de marzo puso término a tanto desgobierno, abriendo la posibilidad de una firme recuperación moral y económica del país, al amparo del derecho y del respeto a las libertades fundamentales del hombre.”²²⁵

El tono de los apoyos se mantuvo en el orden político general. Además, al igual que CARBAP, SRA aportó algunos de sus cuadros, que se desempeñaron como funcionarios dictatoriales. Ya mencionamos el caso de Jorge Zorreguieta. Habría que mencionar también a Juan Alemann, asesor económico de la SRA que se asumió como Secretario de Hacienda durante la gestión

²²³ Palomino, *Organizaciones corporativas...*, op. cit., p. 117.

²²⁴ Palomino, *Tradición y poder...*, p. 132.

²²⁵ Sociedad Rural Argentina: *Memoria y Balance*, 1976.

Martínez de Hoz. A su vez, dos puestos clave del gobierno fueron ocupados por socios destacados de SRA. Nos referimos en primer lugar al propio Martínez de Hoz, ministro de Economía, que no sólo era socio, sino un descendiente directo del fundador de la entidad. Y quien se desempeñó como su secretario de Agricultura (1976-1979), Mario Cadenas Madariaga, que también había sido vicepresidente de CRA. En el aspecto económico, SRA, aunque en un principio apoyó el plan, poco a poco hizo sentir voces de descontento. Las críticas se dirigían a los puntos negativos para el agro de la política económica: cargas impositivas, tipo de cambio y retenciones a las exportaciones. La apertura democrática encontró a la SRA insistiendo en una propuesta que corte con el estatismo vigente desde 1945, del que el gobierno militar no habría estado ajeno.

Menos conocida es la posición de FAA, que también saludó el cambio político que implicó el golpe. Bajo el titular “Se abren nuevas expectativas”, el 1º de abril de 1976 en su periódico *La tierra*, señalaron:

“Se cerró otra etapa en la accidentada marcha de a vida institucional argentina. El largo y penoso proceso de debilitamiento de nuestras instituciones republicanas, jaqueadas en sus principios básicos de sustentación por sus propios protagonistas que no acertaban a encontrar un camino viable para reemplazarlo, tuvo su epílogo en la madrugada del 24 de marzo pasado, cuando un pronunciamiento militar determinó la caducidad de todas las autoridades constitucionales y su reemplazo -en el Gobierno Central- por un triunvirato integrado por los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. El cambio -que operó en todos los órdenes- se produjo en forma casi matemática, sin que hubiera dificultades, por lo que la actividad del país prácticamente no se vio alterada en su ritmo habitual.”²²⁶

La bienvenida a un gobierno de facto que reemplace al que, a su

²²⁶ *La Tierra*, 1/4/76.

juicio, posibilitó la crisis política de la época, fue reforzada en sucesivas afirmaciones en su *Memoria y Balance*. En su editorial del período 1975/1976, hicieron suyas las palabras del Arzobispo de Santa Fe, Monseñor Vicente Zaspé, quien exhortó a las Fuerzas Armadas unidas, las familias, la juventud, los jueces, los docentes, los medios de comunicación, los políticos, los sindicatos, los empresarios y la Iglesia a trabajar conjuntamente para “reorganizar la Nación”. En la misma línea, Humberto Volando escribió:

“Con la nueva etapa que se inició, como argentinos de bien, hemos hecho fervientes votos, para que los que asumieron la responsabilidad de conducir acierten, que actúen inspirados por un espíritu de grandeza y sepan discernir en todo momento entre los intereses reales y los de las fracciones.”²²⁷

El apoyo se mantuvo con el transcurso de la dictadura militar, tal como se expresó en la editorial de la *Memoria y Balance* de 1977/1978, titulada “La pausa gremial”. En la misma aceptaron la validez de la prohibición de las actividades gremiales y de los partidos políticos, considerando que “era natural e inevitable que se adoptaran algunas medidas drásticas, encaminadas a lograr urgentes correctivos”.²²⁸ No obstante, reclamaron que dichas medidas fueran equitativas para todos los sectores y temporarias. Por otra parte, reafirmaron su apoyo a la política general de las Fuerzas Armadas de la siguiente manera:

“Las Fuerzas Armadas, en su mensaje al país al cumplirse dos años del Proceso de Reorganización Nacional, han dicho: ‘Las Fuerzas Armadas se encuentran elaborando las bases políticas que permitirán a la Nación transitar el camino a la democracia, la justicia y la libertad sin los riesgos y asechanzas que han caracterizado las últimas décadas de nuestra historia.’ Aplaudimos sin reservas, este tan sustancioso enunciado, sin duda, congruente con las más caras

²²⁷ FAA: *Memoria y Balance 1975/1976*.

²²⁸ FAA: *Memoria y Balance 1977/1978*, p. 22.

aspiraciones del pueblo argentino.”²²⁹

La editorial de 1978/1979 balanceaba la experiencia del período mediante las siguientes palabras:

“Vemos afianzarse y consolidarse la paz interior y la conciencia soberana de la población. La paz alcanzada en este aspecto interno permite visualizar la formación de una conciencia de unidad frente a quienes quisieron imponer la violencia como método.”²³⁰

Estas palabras contienen las definiciones de la entidad acerca del rumbo general del Estado Argentino. Es decir, atienden al problema de la restitución de la hegemonía burguesa ante la crisis económica y política, acicateada por la amenaza revolucionaria. En este aspecto, la Federación Agraria parece haber hecho causa común con el Partido del Orden expresado por las Fuerzas Armadas y APEGE. En efecto, este apoyo a la línea general de la dictadura no fue puesto en duda ante la persistencia de la crisis de acumulación de capital. Es más, en un principio fue saludada la aplicación de diversas medidas económicas y el nombramiento de ciertos funcionarios clave para el sector agropecuario. Un ejemplo de ello es el pronunciamiento en *La Tierra* del 22 de abril de 1976 bajo el titular: “Notables figuras ruralistas integran el actual gobierno”. En el artículo se refieren a Mario Cadenas Madariaga (secretario de Agricultura y Ganadería), quien fuera vicepresidente de CRA; Jorge Zorreguieta (CARBAP y SRA), subsecretario de Agricultura; Alberto Ramón Mihura (vicepresidente de CRA en 1975), subsecretario de Ganadería; y Juan Alemann, asesor económico de la SRA. A su vez, apoyaron el nombramiento del doctor Jorge José Girado, ex vicepresidente segundo de CARBAP,

²²⁹ Ídem.

²³⁰ FAA: *Memoria y Balance 1978/1979*, p. 21.

como ministro de asuntos agrarios de la provincia de Buenos Aires.²³¹

Días antes habían señalado su acuerdo con el ministro de Economía Martínez de Hoz, quien calificó al sector agropecuario como una de las esperanzas de la recuperación económica. En la misma edición de *La Tierra*, caracterizaron como “medidas importantes” la privatización del comercio de cereales y oleaginosas, la eliminación de la cuota de faena en materia de carnes, la fijación de nuevos valores para el trigo, maíz, sorgo y girasol, y la implementación de “importantes” medidas tributarias.²³²

La preocupación de la entidad por su futuro económico la llevó a concertar encuentros con el secretario de Agricultura, quien asistió a la reunión directiva de la institución a explicar los lineamientos de la política económica.²³³ Asimismo, la Federación Agraria participó en diversas reuniones empresariales con dirigentes de la SRA, CRA y CARBAP, donde se elogió a Madariaga: “tiene una filosofía de trabajo importante para el sector, que es la de ponerse en contacto con los hombres de campo”.²³⁴ Este hecho contrasta notablemente con la gran cantidad de desplantes hechos a los funcionarios del gobierno peronista, cuando se negaban a asistir a las reuniones a las que eran convocados.

Sin embargo, 1977 encontró a la Federación Agraria reclamando políticas sectoriales específicas. Especialmente, pugnaban por: “Una distribución equitativa de las cargas en este período de esfuerzo excepcional [...] una participación futura acorde con los requerimientos de un país maduro, consciente de [los]

²³¹ *La Tierra*, 22/4/76.

²³² *La Tierra*, 15/4/76.

²³³ *La Prensa*, 4/6/76.

²³⁴ *La Opinión*, 28/4/76.

merecimientos de su real aporte a la sociedad.”²³⁵ En este sentido iba dirigido el pedido por el reajuste del precio mínimo sostén del trigo, lino, soja, girasol y maní, y la modificación de la ley de arrendamientos y aparcerías. A su vez, reclamaron mayores créditos para el sector. Las reiteradas insistencias en la insatisfacción de las demandas, sumadas a la crisis económica y social que ya casi nadie negaba hicieron que la Federación Agraria realice su primera crítica general al gobierno militar. Recién en 1982, a seis años del golpe, declararon en su editorial:

“La designación de Bignone y la llegada de otro equipo de gobierno muestran que el Proceso de reorganización nacional está terminado y que a partir de este momento todos los afanes de sus prosélitos están encaminados a hallar una salida política más o menos decorosa. Se vive la crisis más grande de la historia argentina.

“El endeudamiento interno y externo por gastos desaprensivos, fuga masiva de capitales, descapitalización del agro, destrucción de la industria, desmantelamiento de órganos del Estado encargados de políticas sociales, enriquecimiento de funcionarios, denuncias no investigadas y la arbitrariedad en el tratamiento de las personas.”²³⁶

Sin embargo, esto no contrasta con las posiciones asumidas por otras corporaciones de la burguesía rural, como CARBAP o SRA, a quienes, a pesar de haber criticado ciertas medidas económicas del Proceso o de convertirse en abiertos opositores en el ocaso del régimen, no se duda en calificar de golpistas.²³⁷ Al parecer, el

²³⁵ FAA: *Memoria y Balance 1976/1977*, p. 21.

²³⁶ FAA: *Memoria y Balance 1981/1982*, p. 28.

²³⁷ Ver: Palomino, *Tradición y Poder...*, op. cit.; Palomino, *Organizaciones corporativas...*, op. cit.; Giberti, Horacio: “CONINAGRO y la última dictadura militar”, en *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*, N° 17, 2do. Semestre

cumplimiento de las tareas más urgentes, la derrota de las fuerzas revolucionarias, colocó el problema económico en el centro de la escena. La continuidad de la crisis y las políticas económicas que trajeron quiebras y desocupación hacían ya indefendible el régimen. Sólo entonces, y eludiendo todo lo antes dicho por ellos mismos, concluyeron: “Autores, encubridores, testigos y beneficiarios andan por todos lados muy sueltos de cuerpo y en muchos casos hasta tienen la osadía de querer volver a empuñar los timones oficiales.”²³⁸

CONINAGRO asumió una posición similar a la de la FAA dado que acordó con los lineamientos políticos generales tendientes a la reconstitución del orden y la “lucha contra la subversión”.²³⁹ No obstante, la política económica de la dictadura militar, al poco tiempo de implementarse, recibió críticas con respecto a las fuertes cargas impositivas, las tasas de interés y el tipo de cambio. Para 1980, los reclamos al gobierno en política económica indujeron a la entidad a publicar la “Carta abierta a las autoridades”, donde señalaba: “La vigencia de medidas económicas incompatibles con todo objetivo de producción sumió a los ganaderos patagónicos en una crisis económica de gravedad y perdurabilidad sin precedentes históricos en el país”.²⁴⁰ Las mencionadas críticas se hicieron más frecuentes durante los años 1981 y 1982 cuando se pidieron medidas que resolvieran la crisis económica que atravesaba el sector.

La situación fue distinta para las corporaciones industriales. El régimen militar intervino la CGE, sus cámaras y federaciones, y al cabo de un año decidió su disolución, expropiando todos sus

2002.

²³⁸ FAA: *Memoria y Balance 1981/1982*, p. 29.

²³⁹ Giberti, “CONINAGRO...”, op. cit.

²⁴⁰ Ídem, p. 134.

bienes. Además, dejó sin efecto la fusión de la CGI y la UIA. Sin embargo, en contraposición a la suerte corrida por la CGE, se le devolvió la personería jurídica a la UIA y se restituyeron sus bienes, aunque su funcionamiento estuvo condicionado por la intervención militar que se extendió hasta 1981. La dirigencia tradicional de esta entidad estrechó acuerdos con Martínez de Hoz, quien dio un apoyo, al parecer algo tibio, al proceso de reorganización de la entidad.²⁴¹

El gobierno militar recibió una cálida bienvenida por parte de las agrupaciones internas de la UIA. Aunque no faltaron diferencias, ya que mientras el MIA (Movimiento Industrial Argentino -dirigencia tradicional-) se mostró de acuerdo con los aspectos políticos y económicos de la dictadura, el MEDI (Movimiento de Empresarios del Interior) y el MUI (Movimiento de Unidad Industrial), no. En abril de 1977, el MEDI y el MUI hicieron pública una declaración en la que admitían la necesidad del golpe de Estado para llenar el vacío de poder, pero criticaban la política económica por incentivar la inflación, la especulación en detrimento de la producción, el alto gasto público y los controles de precios. Estas mismas entidades, poco tiempo después, reivindicaron haber participado del lock out de febrero de 1976.

El apoyo de conjunto de la UIA al régimen dictatorial quedó cabalmente demostrado en 1979, cuando publicaron una solicitada en la que celebraban el aniversario del golpe, que, según expresaron, había llegado para solucionar los problemas que impedían el normal desenvolvimiento social argentino. No obstante, la persistencia de los acuerdos políticos generales no soslayaron las críticas en materia de política económica que la UIA tenía para el gobierno. Al igual que en el caso de las corporaciones agrarias, vemos un acuerdo general y un respaldo

²⁴¹ Acuña, *op. cit.*

a la principal tarea política que el régimen dictatorial vino a cumplir: restituir el orden, cerrando la crisis hegemónica abierta y el proceso revolucionario, eliminando a los activistas políticos y sindicales, y disciplinando a la clase obrera. Esto no impidió que algunas corporaciones hayan expresado críticas parciales a ciertas medidas económicas en distintos momentos, ni que se convirtieran en opositores abiertos a la continuidad del régimen cuando ya no era necesaria la intervención militar. La burguesía argentina recurrió al “Partido Militar” con un objetivo claro. Una vez cumplido ese objetivo, no había necesidad de sostener un régimen impopular y todos se sumaron al coro que clamaba por el retorno a la democracia.

Conclusiones

El recorrido por los posicionamientos y las acciones de las corporaciones empresarias que expresaban los intereses de la burguesía agraria e industrial entre 1973 y 1976 nos permite esbozar algunas conclusiones provisionarias. El primer punto son las posiciones asumidas frente a la apertura democrática y el retorno del peronismo al gobierno, en 1973. Frente a este hecho podemos marcar dos posiciones claras. En primer lugar el apoyo al proceso, no exento de críticas, que brindaron las corporaciones industriales y algunas de las corporaciones agrarias. La CGE, que delineó el plan económico vigente hasta fines de 1974, fue el principal apoyo del gobierno. La UIA también brindó su respaldo, y terminó integrándose a la CGE en medio del proceso. La FAA hizo lo propio, aunque ya hacia 1974 comenzó a deslizar algunas críticas que derivaron en el distanciamiento de 1975. Por el contrario, las corporaciones de la burguesía rural media y grande expresaron en diferentes tonos su oposición a la política agraria peronista. Desde comienzos de 1975 asistimos a una ofensiva política que emprenden algunas fracciones de la burguesía contra el gobierno de Isabel Perón. Esta ofensiva asume características golpistas, que se harán visibles a medida que la crisis hegemónica se profundice. Los reclamos económicos fueron cediendo terreno a reclamos de índole política, que en algunas corporaciones, como CARBAP, se muestran abiertamente golpistas desde muy temprano. La ofensiva fue impulsada, en primer lugar, por la burguesía rural, hecho que atestiguan las declaraciones y las acciones de fuerza emprendidas por las corporaciones que expresaban sus intereses. Sin embargo, dentro de la alianza que estos sectores conforman, se perciben algunas diferencias tácticas que enfrentaron a CARBAP y FAA, que muestran mayor disposición al enfrentamiento que SRA y

CONINAGRO. Como señalábamos, parece haber una coincidencia estratégica que apuntaba a desestabilizar al gobierno e impulsar un golpe de estado que cierre la crisis, y las diferencias que aparecen tendrían que ver con el momento propicio para que ese golpe se produzca.

Sin embargo, esas diferencias desaparecieron frente a un hecho político que ofició como punto de inflexión: el Rodrigazo. Esa inflexión se percibe, como señalamos, en el grado de virulencia de los discursos, pero también en las características de las acciones de protesta encabezadas por la burguesía agraria. De enero a marzo del '75 pudimos contabilizar siete paros comerciales, de alcance regional, y de duración variable. Entre marzo y junio esas acciones se canalizan en una serie de paros nacionales (tres en total) de corta duración, que tienen un carácter demostrativo, convocados por FAA, SRA, CRA y CONINAGRO. El primero, el 3 de marzo, convocado por SRA, CRA y CONINAGRO, con un día de duración. El segundo, convocado por CRA y FAA para el 19 de mayo, con una duración de 3 días. El tercero, convocado por FAA, CRA y SRA para el 4 de junio, también de tres días. Por el contrario, los paros convocados luego del Rodrigazo, por su duración, exceden el carácter demostrativo y tienen un efecto desestabilizador por sus consecuencias económicas. Nos referimos a los dos paros convocados por CRA, FAA y SRA. Uno que comenzó el 19 de septiembre y se extendió por 11 días, el otro convocado para el 24 de octubre, que alcanzó una duración de 18 días. La siguiente acción, que comenzó a prepararse a comienzos de 1976 y que terminó definiendo la situación, fue el lock out del 16 de febrero de ese año. La derrota de este gigantesco plan de ajuste por la acción obrera dirigida por elementos de la izquierda revolucionaria encendió el alerta. La clase dominante parece comprender, como muestran las acciones que emprendió de aquí en adelante, que la resolución

de la crisis sólo podría realizarse si daba antes un paso previo: disciplinar a la clase obrera, derrotar y eliminar a su vanguardia. Esto no podía hacerse dentro de los marcos democráticos, y por esa razón el golpe militar contrarrevolucionario se transforma en la única alternativa viable. La ofensiva desatada en la segunda mitad del año buscaba diferentes objetivos: generar el máximo desgaste posible al gobierno de Isabel Perón, arrebátandole el poco respaldo que le quedaba. Nuclear tras el programa golpista al conjunto de las fracciones de la clase dominante, para lo que se emprendió un ataque sistemático contra la corporación empresaria, CGE, que reunía a aquellas fracciones afines al gobierno. Y por último, neutralizar a los sectores de la clase obrera que podrían enfrentar el golpe, presentando esta opción como única alternativa posible frente al caos. A su vez, la burguesía golpista se dio una organización centralizada que dirigió la acción y delineó el programa del golpe: APEGE. Esta “mega corporación” reunió a la vanguardia golpista, la burguesía agraria, con las corporaciones que expresaban los intereses de la burguesía comercial y financiera. A medida que APEGE desplegó su acción, comenzó a desmembrarse la Alianza Reformista, corporizada en la CGE. En los meses previos al golpe vamos a ver como sus bases abandonaron esta corporación para sumarse a APEGE. A su vez, vemos cómo la dirección de la CGE comenzó a hacer propio el programa de APEGE, de la que, sobre el final del proceso, sólo la separan diferencias tácticas.

Una vez consumado el golpe vemos el resultado lógico del impulso dado a esa salida por las diferentes corporaciones. En el terreno de la burguesía agraria observamos un apoyo abierto de todas las corporaciones a las tareas políticas asumidas por la dictadura militar: reestablecer el orden, eliminar a la “subversión” y disciplinar a la clase obrera. La existencia de críticas parciales a algunas medidas económicas no debe hacernos perder de vista que

cada una de las corporaciones agrarias se pronunció abiertamente en favor del golpe. En el terreno de la burguesía industrial vemos cómo la corporación que se opuso hasta último momento al golpe fue disuelta, mientras que quienes desde dentro de la CGE se sumaron a la alianza golpista, pudieron recuperar su personería gremial, y dieron muestras de respaldo al régimen militar.

Estos puntos, desarrollados a lo largo del trabajo, nos permiten esbozar algunas discusiones más generales con quienes han estudiado el problema. Que el golpe contó con un apoyo civil es algo que hoy nadie niega. Sin embargo, parece haber un consenso general en que ese apoyo partía de los capitales más concentrados, tanto en el agro como en la industria, y de las corporaciones que los representaban. El apoyo al golpe provenía de la “oligarquía diversificada”, al decir de unos, o del capital trasnacional o financiero, según otros. Las corporaciones que identifican son la UIA, la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural o CARBAP. Nadie señala entre ellos a la Federación Agraria o a sectores de la CGE. El problema es que ninguno de los que sostienen estas posiciones se ha ocupado de estudiar el problema de la gestación de la alianza golpista en su totalidad, y derivan sus conclusiones del análisis de sus resultados (el plan económico implementado por Martínez de Hoz), o de reconstrucciones parciales que parten del mismo tipo de prejuicios. Creemos que nuestra investigación demuestra que la salida golpista terminó siendo asumida por el conjunto de la clase dominante, y que esto resultó así porque lo que estaba en juego excedía los intereses parciales de cada fracción por separado. También se suele identificar el componente civil del golpe como el apoyo de “personas”, generalmente funcionarios o dirigentes que participaron del Proceso o manifestaron públicamente su respaldo. Intentamos con este trabajo devolver a esas “personas” su anclaje social, en tanto representantes fracciones de la clase dominante.

El análisis de la acción política de las corporaciones apunta en ese sentido. A su vez, intentamos demostrar que estas corporaciones no constituyeron organismos personalistas o anquilosados, sino que contaron con el respaldo de las fracciones que representaban y apelaron a él. La convocatoria a asambleas ante cada medida importante, la movilización de sus bases, la conformación de líneas internas dentro de las corporaciones que apoyaban al gobierno, sus internas y rupturas, así lo demuestran. El apoyo civil al golpe no parte de individuos, sino que es expresión de un respaldo social que fue mayoritario en la clase dominante.

Para entender un proceso que unificó a la burguesía, profundamente dividida en los 20 años previos, hay que ver lo que estaba sobre la mesa: la continuidad de las relaciones de producción capitalistas, amenazadas por la constitución de una alianza que escapaba a la dirección de la clase dominante. El proceso revolucionario abierto en 1969 es la determinación más general, que permite explicar no sólo la unidad alcanzada por la clase dominante, sino las características excepcionales del tipo de acción que se emprendió. Vemos, como nunca antes, a la burguesía recurriendo a la acción directa, saliendo a la calle, conspirando. Algo que no suele suceder en momentos de “normalidad”. No era la primera vez que la burguesía agraria enfrentaba la confiscación de la renta por parte del Estado. Tenemos ejemplos históricos claros: el primer peronismo, la dictadura de Onganía. Sin embargo, es la primera vez en la historia que observamos una movilización de la magnitud y la virulencia que adquirieron los paros agrarios de 1975. Hasta hace no mucho tiempo, la única. Tampoco se registran antecedentes de un lock out general como el del 16 de febrero de 1976. Todo ello es una expresión de la profundidad que había adquirido la lucha de clases: una situación excepcional que demandó respuestas “excepcionales”. Tampoco era la primera vez que la burguesía

argentina impulsaba un golpe de estado, pero si la primera vez, y hasta ahora la única, en que ese golpe tenía como objetivo liquidar físicamente a decenas de miles de personas.

Referencias bibliográficas

- Acuña, C. (1996). Las contradicciones de la burguesía en el centro de la lucha entre el autoritarismo y la democracia (1955-1983). *Realidad Económica*. 138, 18-48.
- Aguado, J. (1977). *Cuatro años de acción gremial*. Buenos Aires: CARBAP.
- Asborn, M. (1993). La moderna aristocracia financiera. Argentina 1930-1992. Buenos Aires: El bloque.
- Azpiazu, D. y Khavisse, M. (1984). *La concentración de la industria argentina en 1974*. Buenos Aires: Centro de Economía Transnacional.
- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010). *Hecho en Argentina. Industria y Economía 1976-2007*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Azpiazu, D., Basualdo, E.M. y Khavise, M. (1986). *El nuevo poder económico en la Argentina de los '80*. Buenos Aires: Legasa.
- Azpiazu, D. (1986). *Concentración de la industria argentina a mediados de los '90*. Buenos Aires: Eudeba/Flasco.
- Balvé, B. y Balvé, B. (2005). *El '69. Huelga política de masas*. Buenos Aires: Ediciones ryr.
- Barsky, O. y Gelman, J. (2009). *Historia del agro argentino*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Basualdo, E. (2006). *Estudios de historia económica argentina*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Caggiano, R. (1975). *Notas sobre el desarrollo de la burguesía nacional. La Confederación de la Industria y la UIA en el período 1957-1973*. Buenos Aires: Centro de Estudios Urbanos y Regionales, Instituto Torcuato Di Tella.
- Castellani, A. (2010). *Estado, empresas y empresarios. La construcción de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989*. Buenos Aires: Prometeo Libros.

- Cúneo, D. (1967). *Comportamiento y crisis de la clase empresaria*. Buenos Aires: Editorial Pleamar.
- Dethiou, C. (2008, septiembre 23-26). “Macar S.R.L”: Trayectoria de una empresa textil (1956-1990). Caseros: *XXI Jornadas de Historia Económica*.
- Echagüe, C. (2004). *Argentina: declinación de la soberanía y disputa ínter imperialista*. Buenos Aires: Editorial Ágora.
- Giberti, H. (2002). CONINAGRO y la última dictadura militar. *Revista Interdisciplinaria de Estudios Agrarios*. Nº 17, 133-162.
- Giberti, H. (1986). *Historia económica de la ganadería argentina*. Buenos Aires: Solar.
- Izaguirre, I. (1994). *Los desaparecidos: recuperación de una identidad expropiada*. Buenos Aires: CEAL.
- Kandel, P. y Mario M. (1976). *Entorno y caída*. Buenos Aires: Planeta.
- Lenin, V. (1960). La bancarrota de la II Internacional. *Obras completas*, Tomo XXI, 212-213. Buenos Aires: Cartago.
- Lobbe, H. (2009). *La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976)*. Buenos Aires: Ediciones ryr.
- Makler, C. (2006). Las corporaciones agropecuarias ante la política agraria peronista (1973-1974). En *El agro en cuestión. Discursos, políticas y corporaciones en la Argentina, 1870-2000* (pp. 181-210). Buenos Aires: Prometeo.
- Marín, J. (2003). *Los hechos armados. Un ejercicio posible*. Buenos Aires: La Rosa Blindada/PICASO.
- Martínez Nogueira, R. (1988). Las organizaciones corporativas del sector agropecuario. En *La agricultura pampeana. Transformaciones productivas y sociales* (pp. 295-322). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, CISEA.

- Niosi, J. (1974). *Los empresarios y el Estado Argentino (1955-1969)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- O'Donnell, G. (2008). *Catacumbas*. Buenos Aires: Prometeo.
- O'Donnell, G. (1976). *Estado y alianzas en la Argentina 1956-1976*, Documento de trabajo N° 5. Buenos Aires: CEDES.
- Palomino, M. (1989): *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*. Buenos Aires: CISEA.
- Palomino, M. (1988). *Tradición y Poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*. Buenos Aires: CISEA.
- PAMPIN, Graciela. *La industria de bienes electrónicos y el desarrollo tecnológico en Argentina: expansión y crisis de Winco S.A. 1954-1980*. *Revista de Historia Industrial*. (2008) [en línea]. [consulta: 10 de marzo de 2010] <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2944372>>
- Portantiero, J. (1973). Clases dominantes y crisis política en la Argentina. En *El capitalismo argentino en crisis* (pp. 73-117). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pucciarelli, A. (Coord.) (2006). *Los años de Menem*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pucciarelli, A. (Coord.) (2006). *Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Pucciarelli, A. (Coord.) (2011). *Los años de Alfonsín: ¿el poder de la democracia o la democracia del poder?*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Roman, V. y di Salvo, M. T. (2008, septiembre 23-26). Los 'hombres de farmacia' como empresarios. Caseros: *XXI Jornadas de Historia Económica*.
- Rougier, M. (2007). Expansión y crisis de La Cantábrica (1940-

1990). En *Políticas de promoción y estrategias empresariales en la industria argentina 1950-1980* (pp. 133-176). Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.

Rougier, M. (2004). *Industria, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del Banco Nacional de Desarrollo*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Sartelli, E. (1996). *Celeste, blanco y rojo. Democracia, nacionalismo y clase obrera en la crisis hegemónica*. Buenos Aires: Razón y Revolución.

Sartelli, E. et al. (1998). *Gramsci, la vida histórica y los partidos. En busca de una teoría marxista de la política*. Buenos Aires: Razón y Revolución.

Sartelli, E. (2011). *La sal de la tierra. Clase obrera y lucha de clases en el agro pampeano (1870-1952)*. Mimeo.

Schvarzer, J. y Rougier, M. (2006). *Las grandes empresas no mueren de pie: el (o)caso de SIAM*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Schvarzer, J. (1991). *Empresarios del pasado. La Unión Industrial Argentina*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Buenos Aires: Siglo XXI.

